



La globalización de la protesta

286



¿Por qué protesta tanta gente a la vez?

Didier Billion / Christophe Ventura

Las protestas alcanzaron en estos últimos tiempos una gran amplitud global. Pero ¿qué tienen en común? ¿Contra qué se enfrentan? ¿Qué imaginarios alternativos, políticos y organizativos, ponen en juego? Desde América Latina hasta el mundo árabe, pasando por Europa, las desigualdades, el autoritarismo, la corrupción y el funcionamiento de los servicios públicos han concitado una gran energía contra el orden establecido.

2019 ha sido testigo de la multiplicación en todo el mundo de poderosos movimientos populares de protesta que siguen activos. Chile, Colombia, Ecuador y Haití en América Latina; Francia (los «chalecos amarillos») y el movimiento contra la reforma del sistema de pensiones) en Europa; Argelia, Egipto, Iraq y Líbano en Oriente Medio; Sudán en África.

Esta ola cierra una década iniciada con el proceso revolucionario tunecino, punto de partida de una verdadera onda de conmoción política que alcanzaría a muchos países del mundo árabe a partir de 2011, mientras otros movimientos sociopolíticos de protesta se extendían por Europa y América (incluido el emblemático Occupy Wall Street). Como a principios de la década de 2010, los movimientos actuales exi-

Didier Billion: es director adjunto del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS), París.

Christophe Ventura: es director de investigación y encargado del programa América Latina / Caribe en el IRIS.

Palabras claves: democracia, globalización, movimientos sociales, protestas.

Nota: este artículo se basa en –y a su vez actualiza– los resultados del estudio «Mouvements de contestation dans le monde. Causes, dynamiques et limites», realizado por los autores para la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), febrero de 2020. Traducción del francés de Lucas Bidon-Chanal.

gen en todas partes el fortalecimiento de los derechos sociales y democráticos, al tiempo que revelan las vulnerabilidades estructurales, sociales, económicas y políticas de los países en los que se despliegan.

La denuncia y el rechazo de varios fenómenos recurrentes, algunos de los cuales se han agravado desde el comienzo de la década, constituyen el núcleo de estas movilizaciones que dejan ver cierto grado de articulación: alto costo de vida y disminución del poder adquisitivo, desigualdades sociales, políticas de austeridad que vuelven oneroso el acceso a servicios públicos básicos deteriorados, corrupción endémica, acaparamiento de las instituciones por parte de un cuerpo político al servicio de minorías privilegiadas, lógicas confesionales (Oriente Medio) y clientelistas para la distribución del poder y las riquezas que refuerzan las dinámicas de desposesión.

A estos movimientos se agregan otras dinámicas de crisis, de orígenes más directamente políticos: el golpe de Estado en Bolivia en un contexto de polarización política, la afirmación y el conflicto de soberanía en el seno del Estado español (Cataluña) y las movilizaciones en Hong Kong (China). Estos casos, que dependen de lógicas específicas, no se desarrollarán directamente en este artículo, aunque sí se los mencionará.

Este texto busca elaborar y proporcionar un marco de lectura y análisis que permita comprender las características, las apuestas y los desafíos globales que presentan los actuales movimientos de protesta, sobre todo con demandas sociales. También tendrá como objetivo identificar ciertos límites en el curso actual de su desarrollo. En esta perspectiva, el artículo propone la definición de siete entradas temáticas que constituyen, cada una tomada por separado, una clave analítica para aclarar e interpretar lo que ponen en juego estos movimientos, pero también sus perspectivas a largo plazo: a) causas económicas y sociales que poseen raíces comunes; b) causas políticas profundas que coinciden y lógicas de refundación democrática; c) movimientos interclasistas y «destituyentes»; d) movimientos transversales que engendran sus propias formas de organización; e) movimientos confrontados con el riesgo de su propio declive ante las estrategias del poder y la violencia de los aparatos estatales; f) radicalidad social sin la existencia de proyectos políticos alternativos; y g) nuevas culturas políticas sin una dimensión internacionalista.

Causas económicas y sociales que poseen raíces comunes

El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Mundial: todas las organizaciones económico-financieras internacionales continúan diagnosticando y describiendo los desarrollos de la crisis de la

globalización liberal que afectan el sistema económico mundial y desestabilizan a las sociedades y los equilibrios geopolíticos que estructuran la escena internacional. Esta crisis multiforme ha experimentado un desarrollo ininterrumpido desde el inicio de la crisis financiera internacional de 2008 y esto se manifiesta a través de varios fenómenos combinados y duraderos:

- desaceleración generalizada del crecimiento¹, del comercio internacional² y de la demanda mundial,
- disminución de la inversión extranjera directa (IED)³,
- volatilidad del precio de las materias primas (que bajó en promedio 5% en 2019, según la Cepal). Varios de los países tratados aquí, denominados del «Sur», se ven directamente afectados por este fenómeno,
- generalización de la austeridad presupuestaria dentro de los Estados,
- aumento de la deuda pública y privada a niveles no vistos desde la década de 1950⁴,
- desarrollo de las desigualdades sociales,
- multiplicación de tensiones y conflictos (China/Estados Unidos, crisis en Oriente Medio, Brexit, debilitamiento del multilateralismo, etc.).

En América Latina, 2019 ha cerrado una década de desaceleración económica. La Cepal señala que 23 países latinoamericanos (de los 33 estudiados) se habrán visto afectados por una desaceleración económica en 2019 o 2020, y que entre 2014 y 2020 el subcontinente experimentó su periodo de crecimiento económico más débil de los últimos 40 años (con dos años de recesión general en 2015 y 2016). Sin embargo, según la organización, el crecimiento latinoamericano debería experimentar una ligera recuperación en 2020 (1,3%), luego de haber alcanzado, en promedio, un pobre rendimiento, de 0,1%, en 2019.

En Oriente Medio encontramos una mayor concentración de Estados patrimonialistas que en cualquier otra parte del mundo. Esto significa que familias y/o clanes son propietarios de facto del Estado, lo que permite comprender por qué las reformas de inspiración neoliberal han tenido sus peores

En Oriente Medio encontramos una mayor concentración de Estados patrimonialistas que en cualquier otra parte del mundo

1. Según la OCDE, el crecimiento mundial en 2019 y 2020 alcanzará su valor más bajo desde 2008.

2. Lo mismo ocurre en materia de comercio mundial, según la OMC, ya que el crecimiento global tiende a ser equivalente al del PIB mundial.

3. La IED cayó 20% en el primer semestre de 2019 en comparación con 2018 según la OCDE, a pesar de su aumento en China, la India y Rusia.

4. Según el FMI, la deuda global (pública y privada combinadas) representa 225% del PIB mundial. «En promedio, la deuda global ahora supera los 86.000 dólares per cápita, lo que representa más de dos veces y media el ingreso promedio per cápita». «New Data on Global Debt», 2/1/2020, disponible en <<https://blogs.imf.org/2019/01/02/new-data-on-global-debt/#more-25340>>.

resultados en la región en comparación con otros conjuntos geopolíticos. Esta situación genera bajas tasas de crecimiento y altas tasas de desempleo⁵.

Así, encontramos en la mayoría de los países en que se desarrollan los movimientos de protesta características comparables. No solo mantienen las injusticias, la precariedad y la miseria social, sino que además las «clases medias» —es decir, ante todo consumidoras—, especialmente aquellas que se formaron durante la década de 2000, se ven afectadas por las consecuencias de la crisis económica internacional.

El caso de América Latina es emblemático en este sentido. De hecho, desde fines de la década de 2000, estas «clases medias» se convirtieron en la mayoría de la población. Según la OCDE, incluso constituyen más de 70% del total. No obstante, la organización afirma que 37,6% de quienes las integran siguen siendo «vulnerables». Teniendo solo un ingreso de entre 5,50 y 13 dólares diarios, son los más expuestos a la precariedad y la inseguridad sociales. Según la OCDE, esta categoría representaba a 34,1% de la población en 2000. Las «clases medias» más estables (con un ingreso diario de 13 a 70 dólares por día) aumentaron de 21,1% de la población en 2000 a 35,4% en 2016. Finalmente, la categoría pobre (con un ingreso diario menor a 5,50 dólares) cayó de 42,9% en 2000 a 24,6% en 2016⁶. Es entre ellos donde se debe buscar a los nuevos integrantes —a menudo trabajadores precarizados— de las «clases medias vulnerables».

Desde principios de la década de 2000, América Latina ha experimentado un lento cambio sociológico. La mayoría de los latinoamericanos vio aumentar gradualmente, en varias proporciones y hasta principios de la década de 2010, su capacidad de consumo (a través de los ingresos, la redistribución, la deuda, la llegada a los mercados latinoamericanos de muchos productos de exportación chinos muy baratos) y experimentó una mejora de la protección social (gracias a las políticas estatales⁷). Pero estas dinámicas se han confrontado a las de la desaceleración económica y la volatilidad de los precios de las materias primas desde 2008 (especialmente el petróleo desde 2012).

Así, en todos los países afectados por los movimientos de protesta, tanto en América Latina como en otras regiones, operan dos dinámicas contradictorias: por un lado, aumento en las exigencias en materia de consumo, estabilidad, movilidad y ascenso social, calidad de los servicios públicos,

5. Según el FMI, el año 2019 registra uno de los crecimientos más débiles después de 2016 en la mayoría de los países de la región. FMI: *Perspectives économiques régionales pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale*, 10/2019.

6. OCDE et al.: *Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition*, OECD Publishing, París, 2019.

7. Sobre este tema, v. C. Ventura: «Enjeux et perspectives de la protection sociale en Amérique latine: un rôle pour la France?», nota de análisis, AFD / IRIS, 6/2018.



medio ambiente y funcionamiento de las instituciones, desde principios de la década de 2010; por otro lado, concomitantemente, desaceleración económica e inicio de crisis sociales. El hecho de que los Estados no hayan resuelto estas contradicciones ha socavado la confianza de la población en las instituciones y el cuerpo político. Esta doble dinámica contradictoria, que produce fuertes antagonismos sociales y políticos, constituye el caldo de cultivo en el que, en configuraciones siempre específicas y variables, se desarrollan los levantamientos sociales actuales.

Como subproductos sociales y políticos de la crisis financiera y económica de 2008, estas revueltas a menudo apuntan a un adversario: el neoliberalismo. A veces se enfocan en las instituciones internacionales con las que está asociado, como el FMI, que está involucrado en el desarrollo y la conducción de las políticas públicas de varios países (Ecuador, Egipto, Haití, Sudán). Más allá de esto, la ira se dirige contra una forma de organización de la sociedad considerada disfuncional, que ya no permitiría a la mayoría de los ciudadanos acceder plenamente, y sobre la base de un principio de igualdad, a sus derechos formales proclamados (económicos, sociales, democráticos) y a los servicios y recursos colectivos.

En este contexto, la corrupción y la prevaricación de las clases dominantes, experimentadas de manera provocativa en tiempos de crisis, se asocian a mecanismos de colusión entre el mundo de los intereses económicos y financieros y el de los responsables políticos. Esta fusión organizaría la desposesión de las riquezas colectivas y nacionales en beneficio de las elites y su refugio en la trastienda de la globalización (paraísos fiscales, sistema financiero), donde se multiplicarían por sí solas.

Los movimientos de protesta de la ola actual, en el marco específico de cada contexto nacional, proceden de un fenómeno de acumulación larga y multifactorial de causas de descontento. Es este el contexto en el que debemos comprender el papel que desempeñan en cada caso la medida, la decisión, el escándalo o el exceso. Si bien estos últimos juegan el rol de detonador impredecible, los movimientos en realidad son siempre activados por el poder político que abusa de la paciencia popular.

Causas políticas profundas que coinciden y lógicas de refundación democrática

El rechazo a la corrupción y la prevaricación –percibidas como las formas en que se organiza la sumisión de las clases políticas locales a los intereses económicos y financieros nacionales e internacionales– constituye un punto común a todos los movimientos de protesta actuales, pero estos también se alzan contra los poderes de los Estados autoritarios y arbitrarios, que pueden

tomar varias formas, recurrentes o nuevas: Estados autoritarios, dictaduras laicas o religiosas, Estados democráticos que se convierten en «iliberales». También se puede observar que, ante el aumento de las protestas y de los movimientos que a veces toman formas insurreccionales, todos los poderes estatales se reorganizan y endurecen (represión, reducción o suspensión de los derechos democráticos, desvíos en las medidas de seguridad, golpes de Estado o guerras civiles, según el caso). Este dato esencial indica tanto la exacerbación de las tensiones sociales como la dificultad, si no la imposibilidad, de alcanzar en esta etapa soluciones políticas negociadas.

En la segunda mitad de la década de 2010, surgió una nueva generación de poderes conservadores en los Estados comúnmente calificados de democráticos. Políticamente autoritarios y vehículo de ideologías nacionalistas y/o xenóforas, todos tienen en común el hecho de preconizar un liberalismo ortodoxo en el plano económico. Estos poderes buscan adaptar las sociedades (los derechos económicos, sociales y, si es necesario, democráticos de las poblaciones) a las demandas de los actores económicos y financieros, en el contexto de crisis de la globalización liberal.

Forjados por la resistencia a estos desarrollos, los movimientos actuales llegan a inscribir sus luchas democráticas en un cuestionamiento más profundo de los sistemas políticos, de las representaciones políticas, institucionales y confesionales. La cuestión democrática atraviesa así el conjunto de las reivindicaciones de estos movimientos:

- demandas de protección y garantía de las libertades, incluso las de manifestarse y expresarse (Colombia, Chile, Hong Kong, Cataluña, Argelia, Líbano),
- rechazo de los abusos represivos y de seguridad,
- exigencia de materialización real de los derechos formales (sociales, económicos, políticos), del principio de igualdad –incluso en el acceso a los servicios públicos y al poder del Estado contra las minorías privilegiadas (militares, religiosos, familias, etc.)–.

Cada una de estas demandas está entretrejida y articulada en torno del imperativo democrático. Se trata, como ya lo planteaba el movimiento español de los indignados en 2011, de inventar una «democracia real», entendida como un proyecto en constante búsqueda de una definición que vincule inextricablemente una dimensión política y social.

En este contexto, todos los movimientos de protesta actuales expresan una fuerte desconfianza hacia la democracia tradicional, reducida a una democracia de los poderosos. Estos son los principios fundacionales –representación y delegación– que son cuestionados, puestos en tela de juicio e incluso radicalmente rechazados.

Todos los movimientos de protesta actuales expresan una fuerte desconfianza hacia la democracia tradicional

Por lo tanto, estos movimientos conllevan demandas políticas que, articuladas entre sí en la experiencia de la movilización colectiva y frente a la represión, «hacen sistema» y pueden revestir una radicalidad sistémica. Ya no se trata de ganar un reclamo sectorial como al inicio, sino de cambiar el sistema en su conjunto y de abordar las causas de los problemas políticos y sociales en sus raíces. Al hacerlo, estos procesos alimentan lógicas de refundación general del pacto democrático y social, como lo indican, hasta ahora exitosamente en el caso de Chile, las demandas de nuevas constituciones en varios países (Argelia, Líbano, Sudán, Hong Kong, Cataluña).

Movimientos interclasistas y «destituyentes»

El estudio de las coaliciones de actores en cada uno de los movimientos de protesta permite identificar fuertes similitudes en su composición social. Más allá de los sectores inmediatamente afectados por la medida o la decisión que desencadenó las protestas y que se halla en el origen de las primeras manifestaciones u ocupaciones (trabajadores del transporte en Ecuador, estudiantes, jóvenes y movimientos feministas en Argelia, en Chile y en Iraq, militantes anticorrupción en Haití, etc.), los movimientos de protesta articulan gradual y rápidamente una serie de sectores afectados por la crisis económica, social y/o política en su conjunto. Las demandas formuladas por estos movimientos son, en primer lugar, producto de experiencias vividas en una cotidianeidad cuyo deterioro está directamente relacionado con las transformaciones estructurales del capitalismo y su gestión por parte de las clases dominantes.

Campesinos, obreros, empleados (en especial en el sector público), trabajadores del sector informal, pequeños empresarios o emprendedores, jóvenes, artistas y trabajadores de la cultura, mujeres —principales víctimas de las desigualdades en los últimos años en los países afectados y que soportan cada vez más difícilmente la dicotomía que existe entre su creciente nivel de calificación media y su precarización manifiesta—, desempleados, usuarios de servicios básicos: estos perfiles constituyen la columna vertebral de las poblaciones movilizadas o vinculadas a los movimientos de protesta. Entre estos perfiles emerge la figura del trabajador precario, falto de seguridad en su presente y su futuro (empleo, seguridad social, jubilación).

En una dinámica interclasista que, además de los clivajes de clase clásicos, puede incluir clivajes identitarios (género, adscripción étnica y religión), estos movimientos aglomeran a individuos, organizaciones y movimientos sociales de las clases populares, pero también a capas medias urbanas que ven en riesgo el nivel de vida alcanzado y sus aspiraciones de movilidad social. Su implicación en estos movimientos indica una ruptura cultural respecto

de una forma de vida prometida por el modelo liberal que se les escapa o a la que ya no tienen acceso —o que sienten que pueden perder—.

Cada movimiento toma parte de sus referencias, a veces de sus consignas, de movimientos precedentes y de la larga historia de las luchas sociales y políticas nacionales (Argelia, con la lucha por la dignidad vinculada al periodo de la lucha nacional por la descolonización; Chile, con el lema «No son 30 pesos, son 30 años»; la referencia a la República en el caso catalán, etc.). Muchos de los actores, movimientos u organizaciones militantes que se encuentran en las calles se inscriben en una memoria más larga. Pero también en luchas recientes que han marcado la vida política nacional: los movimientos contra la explotación del gas de esquisto en el sur de Argelia; la Asociación Sudanesa de Profesionales en Sudán, creada en 2016, con docentes, periodistas, médicos y abogados que forman una red clandestina; el movimiento estudiantil en Chile, etc.

Estos movimientos son en un primer momento «destituyentes» —a menudo reclaman «que renuncien» los políticos en funciones— y revelan la presencia en sus países de una heterogeneidad de demandas democráticas y sociales no atendidas por el sistema representativo y el Estado. Tienen como objetivo dar centralidad a estas demandas y rearticularlas en un marco de desintermediación de las relaciones políticas y sociales entre la sociedad y su representación organizada e institucional.

Movimientos transversales que engendran sus propias formas de organización

Los actuales movimientos de protesta se articulan de acuerdo con varios principios: participación directa, implicación por afinidad, horizontalidad y autoorganización. Estos principios les permiten tomar una forma característica, la de una fuerza que busca ocupar y apropiarse del espacio público urbano. La ciudad es, de hecho, la cuna de todos estos movimientos. La mayoría de los países en los que tienen lugar están experimentando una urbanización masiva y, en algunos casos, altas tasas de crecimiento demográfico. Por lo tanto, es en el universo socioeconómico, político y cultural urbano donde se materializan y toman forma todas las nuevas relaciones sociales producidas por los desarrollos económicos nacionales e internacionales. En las ciudades —y en la red jerárquica que se desarrolla entre ellas dentro de un Estado (relación centro/periferia, megalópolis conectadas a los flujos de la globalización/ciudades secundarias, ciudades desvitalizadas, etc.)— se concentran los principales

**La ciudad es,
de hecho, la cuna
de todos estos
movimientos**

problemas sociales y ecológicos de la época, se trate del desempleo, de la precariedad y de la informalidad del trabajo, de dificultades para acceder a la vivienda o a los servicios públicos y básicos (agua, energía, saneamiento, comunicación, transporte), de fenómenos de inseguridad, formas de segregación social y espacial vinculadas a las desigualdades y la pobreza, de contaminación o de consecuencias del calentamiento global. También es en la ciudad y en la forma de vida urbana donde las poblaciones observan de manera cotidiana –en primer lugar, en su vida diaria individual y familiar– el deterioro y la disminución del papel del Estado, y este es crecientemente percibido, dentro de las clases trabajadoras, solo en su dimensión represiva.

Estas dinámicas moldean la vida cotidiana de los individuos y las poblaciones, así como su forma de vida. Y alimentan, en diferentes niveles y de manera acumulativa, no solo las lógicas de adaptación, sino también, en tiempos de crisis aguda o recurrente, la ira, la toma de conciencia y las movilizaciones de resistencia del conjunto de las categorías sociales que coexisten en el espacio urbano. En este contexto, la calle y el barrio constituyen los primeros peldaños y los espacios privilegiados donde estas poblaciones se organizan para satisfacer sus necesidades ante los problemas cotidianos, entre lógicas de competencia –a veces delictivas–, pero también de solidaridad.

Así, la calle, la plaza pública y el barrio son los espacios donde se pone a prueba y desafía a diario el orden social y político dominante. Si la organi-

La calle, la plaza pública y el barrio son los espacios donde se desafía a diario el orden social y político dominante

zación de manifestaciones y acciones regulares tiene la función de construir y alimentar una relación de fuerzas con el poder, así como la de asegurar la visibilidad pública y mediática de los movimientos, la ocupación de espacios públicos persigue objetivos complementarios. Se trata de facilitar un anclaje en la cotidianeidad social local y de convertir, en ciertos casos, estos espacios ocupados en laboratorios temporarios de experimentación de las prácticas políticas y sociales alternativas llevadas a cabo por es-

tos movimientos (juego de solidaridades concretas con la población del barrio, alimentos, gestión de los residuos, transporte, prácticas culturales, procesos de toma de decisiones, etc.). La existencia y el mantenimiento de estos movimientos constituyen para quienes participan en ellos un proyecto en sí mismo.

En este contexto, el papel de internet y las redes sociales se vuelve decisivo. La esfera digital y el desarrollo de un espacio público digital generado y animado por inmensas plataformas de redes sociales⁸, a su vez dirigidas por

8. Según el informe anual de 2018 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas, el número de usuarios de internet se ha duplicado en el mundo durante la década, pasando de menos de 30% a más de 51% de la población mundial entre 2010 y 2018.

algoritmos que unen a los individuos –a menudo en beneficio de las lógicas comerciales– por enlaces de afinidad y centros de intereses comunes, impactan en los movimientos sociales en varios niveles. El espacio digital y las redes sociales en particular (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp) multiplican las interacciones de los movimientos y sus miembros sin intermediarios, en todos los niveles de la sociedad y los territorios (local, nacional, global), y los conectan con una serie de individuos no conocidos, comprometidos y organizados anteriormente, pero que pueden encontrarse de acuerdo con sus valores, demandas y resistencias. Al permitir que los movimientos difundan su mensaje a millones de personas, que son tanto medios como actores en sí mismos, y que convoquen a movilizaciones callejeras sin la necesidad de recursos financieros o de medios tradicionales, el espacio digital produce y favorece el desarrollo de nuevas formas de compromiso que presentan diferentes niveles de intensidad, sostenibilidad e impacto.

Fuertes, débiles o intermitentes, según los individuos, las causas sostenidas y los momentos, estos compromisos se liberan de la lógica de pertenencia o lealtad organizacional, así como de las divisiones políticas, sociales, religiosas y culturales tradicionales.

Movimientos confrontados con el riesgo de su propio declive ante las estrategias del poder y la violencia de los aparatos estatales

La estrategia de acción y desarrollo de los movimientos populares de protesta generalmente toma dos formas, en función de la naturaleza de las demandas y de su capacidad para movilizar sectores que se extiendan más allá del núcleo inicial:

- la de una fuerza de desborde espontáneo y de confrontación con el Estado y los poderes constituidos; a partir de un acto inaugural (manifestación, acción espectacular) que golpea a la opinión pública y atrae la atención internacional, se busca imponer inmediatamente una relación de fuerzas y el perímetro reivindicativo a partir del cual el Estado será llevado a negociar (Chile, Colombia, Ecuador) con la esperanza de canalizar y detener el desarrollo de este movimiento;

- la de una fuerza que progresivamente se va desarrollando, profundizando, ampliando y estableciendo en el tiempo con una óptica de «asedio» (Argelia, Haití, Líbano, Iraq, Hong Kong, Cataluña); en este caso, los registros de acción del movimiento se desarrollan e interconectan a medida que este se amplía (manifestaciones, ocupaciones, bloqueos, huelgas), para llevarlo hipotéticamente a una dimensión política más nítida (cuestionamiento del régimen).

En ambos casos, los movimientos enfrentan varias problemáticas y desafíos. Cuando logran alcanzar la primera etapa de su evolución, es decir, cuando logran elevarse al nivel de una fuerza capaz de demostrar su potencia y su capacidad de movilización, surgen nuevas dificultades. Se trata entonces de mantener todas las capacidades de movilización (encarnación de un relato colectivo del cambio y la transformación, poder de influencia y presión sobre el orden político e institucional, potencia colectiva para obtener conquistas) y de contener el agotamiento a largo plazo de su dinámica propulsora. Esto es fundamental, especialmente, cuando los motores que alimentaron el éxito original del movimiento (diversidad, horizontalidad, no representación, no delegación, rechazo de la cooptación por parte de los partidos políticos y las organizaciones sociales tradicionales, organización de espacios que albergan vínculos militantes) se enfrentan a la continuidad en el tiempo. El pasaje a esta nueva situación va acompañado de la aparición de nuevas contradicciones que pueden conducir a dificultades estratégicas.

En primer lugar, se debe enfrentar el desafío de mantener la movilización de personas afectadas por diversos tipos de coerciones, así como por las de la vida material cotidiana. Entonces, en este contexto es preciso lidiar con un límite inducido por un modo de organización y funcionamiento basado en la adopción de un sistema de decisión colectiva (lógica de asambleas, rechazo de la representación, la delegación, los líderes y los portavoces) que asume la ausencia de una estructura de dirección y de toma de decisiones identificable, sostenible y estable. Esta orientación debilita la capacidad de los movimientos para superar las divisiones internas que surgen en torno de algún tema

El Estado tiene ventajas frente a los movimientos sociales, como su fuerza inercial y la resiliencia de sus estructuras

político o estratégico, para liderar una negociación colectiva con el aparato del Estado y para adaptarse a las nuevas situaciones creadas por sus propias emergencias.

Una dimensión clave es la cuestión de la reorganización y el redespliegue del poder estatal después de que ha sufrido el primer impacto. El Estado tiene ventajas frente a los movimientos sociales, como su fuerza inercial y la resiliencia de sus estructuras, que opone al poder explosivo de aquellos. Además, es capaz de combinar y alternar, con el tiempo, conce-

siones parciales (sin poner en cuestión las estructuras económicas y sociales), intentos de división, cooptación de elementos o de sectores del movimiento, banalización y descrédito de sus acciones, judicialización y represión de sus actores (vigilancia judicial, encarcelamiento, enjuiciamiento, violencia estatal, etc.). También busca desviar y reanudar la agenda nacional sobre otros temas (fin de la parálisis económica, reactivación de la economía de-

teriorada por la «inestabilidad social», restauración del «orden» frente a la «anarquía», cuestiones de seguridad, etc.). Finalmente, puede apelar a argucias conspirativas mediante la denuncia casi sistemática de manipulaciones urdidas por intereses extranjeros.

A través de la articulación de estos diversos medios, se trata de desalentar la participación, de condenar el carácter «radical» y no constructivo de los movimientos y de producir resignación y cansancio en la sociedad y en el interior mismo de los movimientos.

Radicalidades sociales sin existencia de proyectos políticos alternativos

Los actuales movimientos populares de protesta han conseguido victorias parciales. Las medidas contra las cuales se levantaron pudieron ser suspendidas o canceladas (Chile y Ecuador con el freno al aumento del precio del transporte, Hong Kong con la retirada de la enmienda a la ley de extradición, etc.). También lograron obtener satisfacciones políticas más amplias y significativas, como el aplazamiento de las elecciones en Argelia (finalmente celebradas el 12 de diciembre de 2019 con una baja participación, menos de 40% del electorado, debido a los numerosos llamados al boicot); la caída del gobierno de Saad Hariri en Líbano y su reemplazo por un gobierno de «tecnócratas independientes» liderados por Hassan Diab; la renuncia de miembros del gobierno de Sebastián Piñera en Chile, el condicionamiento de su programa gubernamental para los dos últimos años de su mandato y el compromiso de realizar un referéndum sin precedentes sobre una posible nueva Constitución (26 de abril de 2020); el establecimiento de mesas de negociación en Colombia y Ecuador; la renuncia del primer ministro Adel Abdul-Mahdi en Iraq y la implementación de un proceso de transición basado en un compromiso que expresa una fuerte madurez política en Sudán. En términos más generales, estos movimientos han abierto canales para la expresión de la ciudadanía y han aumentado los niveles de conciencia, participación y conflictividad en la sociedad. También lograron poner bajo presión a sus gobiernos en el ámbito internacional (Ecuador, Chile, Iraq) sobre las cuestiones relativas al respeto de los derechos de manifestación y al empleo desproporcionado de la violencia.

La estrategia de rechazo de los portavoces, los líderes y la autoorganización permitió a los movimientos evitar ciertas trampas de confrontación con el poder estatal: cooptaciones, defecciones individuales mediatizadas, eliminación de la conducción del movimiento mediante la represión. Pero esta misma dinámica engendra a la vez límites políticos y estratégicos.

Producto de una era de crisis estructural de la globalización y hegemonía liberales, así como de los Estados, los movimientos participan de procesos de radicalización social y política en un mundo sin un «gran relato» ni una alternativa político-ideológica. En este contexto, si su espontaneidad y su inventiva constituyen su fuerza, su cultura política y su lógica organizativa les impiden encarnar una salida política colectiva alternativa al sistema (y las instituciones) que denuncian.

Estos movimientos son interpelados por su propio éxito

Por lo tanto, estos movimientos son interpelados por su propio éxito. Pero también interpelan a los gobiernos y las clases dominantes. En ausencia de salidas políticas, los riesgos de desgaste, decadencia y confrontación llevan consigo la semilla de nuevas radicalidades negativas que alimentarán futuras olas reivindicativas, pero también el fortalecimiento de las corrientes extremistas, sectarias, autoritarias y nihilistas.

Nuevas culturas políticas sin dimensión internacionalista

Portadores, a partir de demandas concretas, de una crítica cultural, social y política radical del orden dominante, estos movimientos de protesta generan una cultura política que combina varias características. Reivindican a menudo su independencia y su desconfianza respecto de las formas de organización tradicionales, y respecto de la dimensión electoral e institucional de la vida política. Esta orientación se sostiene en una experiencia ligada a decepciones, instrumentalizaciones, traiciones y derrotas pasadas, pero también en un cuestionamiento más profundo de la estrategia histórica que estructuró la acción de los trabajadores y los movimientos revolucionarios en el siglo xx. De hecho, los movimientos actuales cuestionan confusamente la idea de que la transformación de la sociedad y sus estructuras vendrá de la conquista del poder estatal por los partidos políticos. Por el contrario, estos últimos, cuyos miembros y dirigentes pueden ser aceptados en el movimiento, se consideran elementos funcionales al «sistema» rechazado. Acusados de múltiples defecciones, de ineficacia y de haberse adaptado al confort del poder, los partidos son percibidos como aparatos integrados al –y dependientes del– «sistema», que finalmente reproducirían. La cultura y los modos de organización y acción de estos movimientos los llevan a privilegiar la construcción de espacios alternativos, ajenos a las estructuras políticas y económicas dominantes de la sociedad, mientras las confrontan en los momentos de movilización colectiva. En esta perspectiva, los movimientos se interrogan por la cuestión de la

transformación política y social. Y obligan a todos los actores involucrados (partidos, sindicatos, asociaciones, intelectuales, instituciones, los propios movimientos) a preguntarse sobre las formas de sus relaciones recíprocas, sobre las de la participación ciudadana en la sociedad y sobre las estrategias colectivas que permiten transformarla.

En el curso actual de la crisis de la globalización liberal, las olas de movimientos de protesta condensan y encarnan esporádicamente las transformaciones filosóficas, culturales y políticas a largo plazo que tienen lugar en las sociedades. Desde este punto de vista, en continuidad con la alterglobalización respecto de muchas temáticas (desigualdades, bienes comunes, radicalización de la democracia, crítica del capitalismo productivista, etc.), estos movimientos constituyen, al mismo tiempo, vectores por los cuales estas transformaciones se expresan, se materializan y maduran.

Además, los movimientos de protesta buscan vincular todas sus preocupaciones en una perspectiva local, nacional e internacional. Pero esta última dimensión constituye su eslabón más débil. De hecho, aunque a escala mundial las protestas responden a fenómenos que atraviesan e impactan a todas las sociedades y se reconocen como parte del mismo impulso democrático y emancipatorio, no hay espacio público internacional que los reúna, en tanto que el marco nacional sigue siendo aquel en el que las poblaciones se organizan y movilizan.

Del mismo modo, las movilizaciones contra las consecuencias del cambio climático y en favor de la justicia ambiental, que intrínsecamente poseen una dimensión internacional, parecen solo marginalmente presentes en las que hemos tratado en este artículo. La unión no ha tenido lugar, aunque las preocupaciones ambientales no estén ausentes en ciertos procesos en curso (Argelia, Chile, Colombia, Ecuador, Líbano). Es probable que lo que impide una convergencia eficiente en esta etapa sea el sustrato sociológico de quienes dirigen las manifestaciones juveniles (Jóvenes por el Clima, Fridays for Future [Viernes por el Futuro]), demasiado ligado a una juventud educada en Occidente.

A modo de conclusión provisoria

Los movimientos de protesta que se desarrollan actualmente en varias regiones del mundo, sobre todo en los denominados «países del Sur», es decir, ubicados en la periferia del sistema económico mundial y de sus centros geopolíticos de toma de decisiones, provienen de convulsiones económicas, sociales y políticas engendradas por la crisis financiera internacional de 2008. Tienen sus raíces en la recurrencia y el aumento de

las desigualdades sociales, la pobreza, la informalidad, así como en el deterioro o el estancamiento de los ingresos en todos los países involucrados (y en un número creciente de países del mundo) desde 2008. Esto ocurre especialmente en las clases medias tradicionales y las «nuevas», surgidas, en América Latina, a partir del periodo de prosperidad económica de la década de 2000.

Favorecidos por la expansión de las redes sociales y la aparición de un espacio público digital internacional, estos movimientos sociales se están asentando en el panorama cotidiano de las sociedades, especialmente de las ciudades. Cuestionan transformaciones, proyectos, instituciones y poderes a corto, mediano y largo plazo, y acarrear nuevas prácticas sociales y nuevas formas de sociabilidad.

Sus modos de organización y acción (autoorganización, participación directa, horizontalidad, acciones concretas en torno de causas, no representación, no delegación), así como su concepción crítica –o incluso rechazo– de la democracia representativa y del papel de las instituciones políticas, interpelan y desconciertan a observadores, dirigentes políticos y clases dominantes en su conjunto.

Al mismo tiempo, estos movimientos enfrentan muchas limitaciones a corto plazo. Surgidos en sociedades donde la crisis del liberalismo se desarrolla sin que emerja un gran relato alternativo eficiente, revelan la existencia de un «momento» histórico complejo e indeterminado. Por un lado, en las sociedades emergen y se fortalecen nuevas demandas, reivindicaciones, propuestas y prácticas. Pero, al mismo tiempo, aún no encuentran salidas políticas. Y al reivindicar formas de organización y una cultura que impiden cualquier posibilidad de conducción formal, identificada y representativa, estos movimientos expresan esta situación contradictoria.

En este contexto, su resultado, político y social, sigue siendo incierto y tomará diferentes direcciones de acuerdo con las situaciones nacionales. Entre los factores que influirán en el futuro de los movimientos actuales, varios serán claves. ¿Podrán mantener un amplio apoyo entre la opinión pública y atraer a nuevos sectores –especialmente vinculados a la producción económica– en sus movilizaciones a medida que se desarrollen? ¿Lograrán desarrollar una cohesión reivindicativa y organizativa –según las estrategias de radicalización o de negociación que adopten sus actores– frente a las respuestas proporcionadas y las estrategias desarrolladas por los Estados? ☐

Desigualdad y descontento social en América Latina

Nora Lustig

La ola de protestas volvió a colocar en primer plano la concentración del ingreso en América Latina. Más allá de que los indicadores muestran una reducción de la desigualdad relativa, cuando se toman en cuenta el retroceso en el bienestar producido a raíz del fin del auge de las materias primas y las limitaciones de los indicadores de la desigualdad comúnmente utilizados, la oleada de protestas como rebelión frente a la desigualdad adquiere todo su sentido. Habría que poner el foco en la construcción de indicadores de desigualdad que puedan capturar mejor el descontento que surge de ella.

Introducción

América Latina es la región más desigual del mundo (v. gráfico 1). En los últimos 30 años, la distribución del ingreso en el subcontinente presentó tres tendencias. Durante los años 90 y principios de los 2000, la desigualdad aumentó en la mayoría de los países para los que existen datos comparables. Entre 2002 y 2013, la desigualdad se redujo en prácticamente todos los países. A partir de 2013 (y hasta 2017, último año para el cual se cuenta con información), esta tendencia a la reducción presentó señales de agotamiento en algunos países donde la

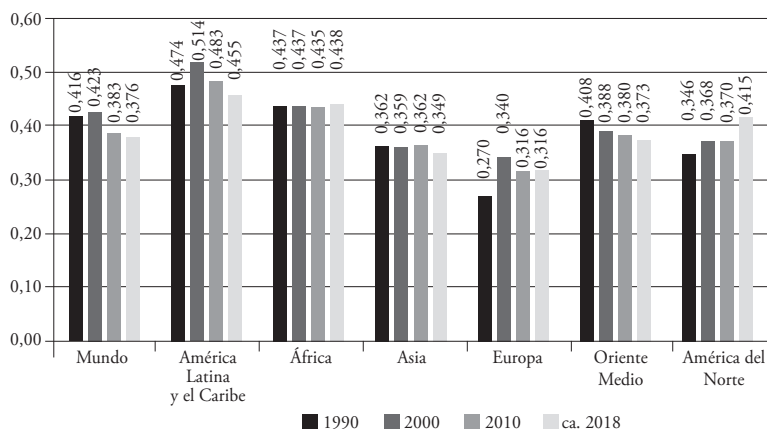
Nora Lustig: es profesora Samuel Z. Stone de Economía Latinoamericana y directora fundadora del Commitment to Equity Institute en la Universidad Tulane (Nueva Orleans); también es investigadora no residente en la Brookings Institution, el Center for Global Development e Inter-American Dialogue.

Palabras claves: descontento, desigualdad, índice de Gini, protestas, América Latina.

Nota: este artículo se basa en el capítulo «Desigualdad y política social en América Latina» que la autora preparó para el proyecto «50 años de historia en el desarrollo en América Latina: logros y desafíos pendientes» de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina.

Gráfico 1

La desigualdad por región: coeficiente de Gini



Nota: los años utilizados para Latinoamérica son 1992, 2000, 2010 y 2017. El conjunto de países utilizados varía en cada año.

Fuente: N. Lustig: «Desigualdad y política social en América Latina», cit.; basado en Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (SEDLAC) y POVCAL.

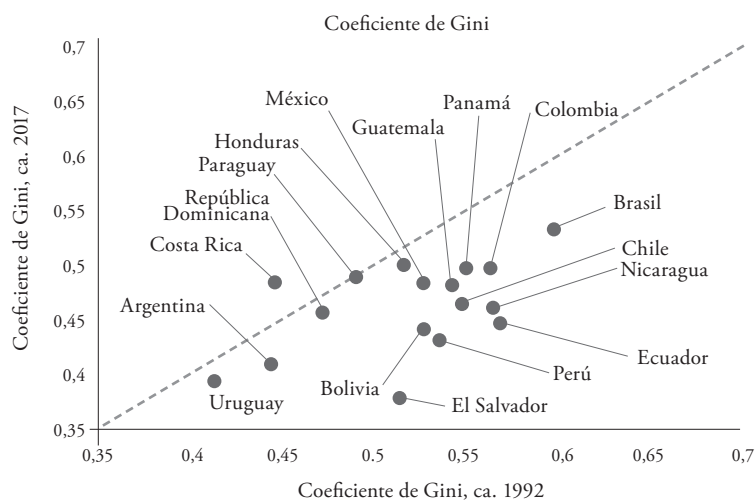
desigualdad comenzó a crecer, mientras que en otros el ritmo de caída se redujo; en otro subconjunto de países, sin embargo, la reducción de la desigualdad continuó. Si consideramos todo el periodo, los niveles de desigualdad más recientes son menores a los prevalecientes a principios de los años 90 (v. gráfico 2).

A raíz de la oleada de protestas en Chile, Colombia y Ecuador durante los últimos meses de 2019, el tema de la alta concentración del ingreso en América Latina volvió a ocupar los titulares. Hay, sin embargo, una aparente incongruencia entre las tendencias detectadas en el comportamiento de la desigualdad en los últimos 30 años y el manifiesto descontento. De hecho, en lo que va de este siglo, la desigualdad en Latinoamérica cayó a una escala pocas veces observada en la historia (desde que se dispone de datos, claro está). Alrededor de 2000, el coeficiente de Gini era igual a 0,514, es decir 12% más alto que el dato más reciente de 0,455¹. Una caída de este porte significa que, por ejemplo, en Brasil —el país más desigual de la región— el

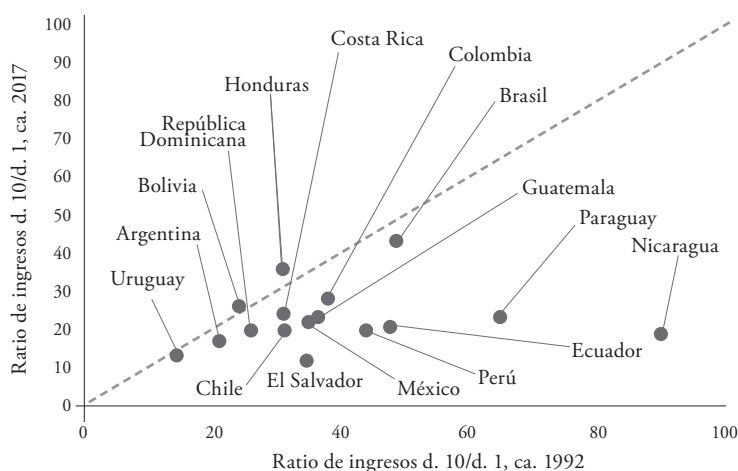
1. Recordemos que el coeficiente de Gini es un indicador de desigualdad de los más utilizados y que cuanto más cercano a cero (uno), más igual (desigual) es la distribución de la variable analizada.

Gráfico 2

Cambios en la desigualdad por país y para todo el periodo ca. 1990-2017



Cociente de la proporción de ingreso del decil más rico al decil más pobre



Nota: la línea punteada representa la diagonal de 45 grados. Los ingresos utilizados para calcular el cociente de ingresos entre deciles extremos están expresados en dólares paridad poder adquisitivo (PPA) de 2011. Argentina: 1992-2017; Bolivia: 1992-2017; Brasil: 1992-2017; Chile: 1992-2017; Colombia: 1992-2017; Costa Rica: 1992-2017; República Dominicana: 1992-2016; Ecuador: 1994-2017; El Salvador: 1995-2017; Guatemala: 2000-2014; Honduras: 1992-2017; México: 1992-2016; Nicaragua: 1993-2014; Panamá: 1995-2017; Paraguay: 1995-2017; Perú: 1997-2017; Uruguay: 1992-2017; Venezuela: 1992-1999.

Fuente: N. Lustig: «Desigualdad y política social en América Latina», cit.

ingreso percibido por el 10% más rico pasó de ser cerca de 60 veces más alto que el del 10% más bajo a ser menos de 40 veces más alto. La desigualdad disminuyó en cada país de la región, incluyendo los tres donde las protestas han sido intensas. En lo que va de este siglo, en Chile el coeficiente de Gini disminuyó de 0,481 (2006) a 0,465 (2017); en Colombia, de 0,562 (2001) a 0,496 (2017); y en Ecuador, de 0,532 (2003) a 0,446 (2017)².

Si la desigualdad experimentó una caída inusitada en el periodo reciente, ¿cómo se explican el descontento social y su virulencia? En esta sección se sugieren algunas explicaciones. En particular, se mencionan tres: el impacto negativo del fin del auge de las materias primas sobre las condiciones de vida; la limitación de los indicadores utilizados (por ejemplo, el coeficiente de Gini); y las limitaciones de los datos que se utilizan para medir la desigualdad de manera cabal.

En los países de América del Sur, el fin del auge de las materias primas se tradujo en una caída de la tasa de crecimiento del ingreso por habitante; algunos países, incluso, entraron en franca recesión. El descontento no solo se ha manifestado a través de movimientos de protesta: el voto popular en las elecciones presidenciales recientes se caracterizó por ir en contra de los partidos en el gobierno, independientemente de su signo ideológico (en países gobernados por la izquierda se eligieron candidatos más a la derecha y viceversa). Fue un voto de protesta frente a la pérdida de poder adquisitivo, el desempleo y la erosión de beneficios provenientes del gobierno. A ello habría que añadir que, en varios países, la desigualdad revirtió la tendencia de la década anterior y comenzó a subir. Esto ha pasado, por ejemplo, en Brasil y, en menor medida, en Paraguay. Si bien ha habido una caída de la desigualdad cuando se comparan los niveles de principios de siglo con los más recientes, durante los últimos años en varios países se produjo un estancamiento de esa caída o incluso un aumento de la desigualdad.

El menor dinamismo económico, combinado con una creciente desigualdad, ha resultado en un aumento de la incidencia de la pobreza, justo cuando la capacidad del fisco para ofrecer mecanismos de compensación se vio mermada. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), desde 2015, la incidencia de la pobreza en la región ha ido en aumento, y los pronósticos de ese organismo indican que en 2019 el número de pobres habría alcanzado un total de 191 millones (seis millones más que el año anterior), de los cuales 72 millones estarían en pobreza extrema. En comparación con 2014, habría 27 millones más de personas pobres, y de ellas 26 millones se encontrarían en condiciones de pobreza

2. Los datos de Chile previos a 2006 fueron calculados a partir de la antigua metodología que utilizaba el gobierno y, por lo tanto, no son comparables.

extrema³. Combinaciones de este tipo alimentan el descontento porque la población experimenta una intensa frustración. El progreso palpable durante la primera década del siglo no se sostuvo.

Segundo, es posible que los indicadores utilizados para medir la desigualdad no sean los más atinados para captar la relación entre esta y el descontento social. El coeficiente de Gini (y todos los demás indicadores de la concentración del ingreso que se utilizan convencionalmente) mide las diferencias relativas en los niveles de ingreso de las personas u hogares, cuando quizá lo que provoca una agudización del descontento social sea el crecimiento de brechas absolutas. Si en un país todos los ingresos aumentan en la misma proporción, el coeficiente de Gini de ese país sería el mismo antes y después de ese crecimiento. Sin embargo, en términos de poder adquisitivo, el que parte de un ingreso mayor se beneficiará en términos absolutos de ese crecimiento uniforme más que quien empieza desde un ingreso menor.

¿Qué ha pasado con las diferencias de ingreso en términos absolutos? Tomemos, por ejemplo, el caso de Chile, país que —a raíz de las protestas iniciadas en octubre de 2019 y su inesperada virulencia— se ha vuelto foco de especial atención. Si bien según la información de las encuestas de hogares, el ingreso percibido por el 10% más rico pasó de ser cerca de 33 veces más alto que el del 10% más bajo en 2000 a ser 20 veces más alto en 2017, las diferencias en términos absolutos crecieron marcadamente. Durante el mismo periodo, la diferencia entre el ingreso que recibió el 10% más rico en comparación con el 10% más pobre creció en nada más ni nada menos que 50% (y en 45% cuando se compara la diferencia en el ingreso del 10% más rico y el del habitante medio)⁴.

Es decir, aun cuando el sector más pobre mejoró su situación, el grupo más rico pudo incrementar cada vez más su consumo de lujo, al mismo tiempo que la población pobre y las clases medias continuaron enfrentando situaciones difíciles provocadas por un contrato social en el que el Estado escatima en servicios y beneficios, sobre todo para los grupos vulnerables y medios. En su lúcido artículo sobre el tema, Andras Uthoff describe cómo los sistemas de pensiones y de salud en Chile —establecidos durante la dictadura militar— han fallado de manera contundente en términos de la provisión

El progreso palpable durante la primera década del siglo no se sostuvo

3. Cepal: Panorama social de América Latina 2019, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2019.

4. Medido en dólares PPA de 2011, el ingreso promedio del primer decil y del decil más rico en el año 2000 fue de 56 dólares y de 1.819 dólares, respectivamente. Las cifras análogas en 2017 fueron 140 dólares y 2.754 dólares, respectivamente (cálculos de la autora sobre la base de POVCAL del Banco Mundial).

**Chile sale mal parado
en prácticamente
todas las
dimensiones del
Índice para una
Vida Mejor propuesto
por la OCDE**

de un seguro, la suavización del consumo a lo largo del ciclo de vida y el alivio de la pobreza en la vejez en el caso del sistema de pensiones, y también en cuanto a proveer un seguro y prevención de enfermedades en el caso del sistema de salud. Aun después de las reformas introducidas a partir de 2006 para mejorar el sistema de pensiones en las dimensiones mencionadas, 70% de los ciudadanos consideran que los beneficios están por debajo de los niveles requeridos. De hecho, en Chile más de 40% de los beneficiarios reciben un ingreso por debajo de la línea de pobreza y 79% lo hacen por debajo del salario mínimo. Las tasas de reemplazo son sumamente deficientes, ya que alrededor de 50% de los beneficiarios reciben una pensión menor a 38% del valor promedio de sus salarios en los últimos diez años (para las mujeres es peor, ya que la cifra es 24,5%)⁵. De hecho, en una sugerente columna publicada en *VoxEU*, Sebastián Edwards recalca que Chile sale mal parado en prácticamente todas las dimensiones del Índice para una Vida Mejor propuesto por la Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que estos factores han contribuido al malestar colectivo, aun cuando la desigualdad medida en términos relativos cayó⁶.

Asimismo, dos variables que inciden de manera importante en el poder adquisitivo no están incorporadas en las medidas convencionales de desigualdad y pobreza: los impuestos indirectos (impuesto al valor agregado –IVA–, específicos, etc.) y los subsidios al consumo. Los indicadores de desigualdad y pobreza utilizan el ingreso disponible (o lo más cercano a este concepto) para medir el bienestar, concepto que no capta el impacto de aumentos en los impuestos al consumo o reducciones en los subsidios. No existen series de indicadores de desigualdad o pobreza que capten las pérdidas en el consumo real que puede haber experimentado la población en el periodo post auge de las materias primas a raíz de la reducción de ciertos subsidios (o de los aumentos en los impuestos indirectos al consumo). Sin embargo, sabemos que los recursos fiscales asignados al rubro de subsidios para derivados de combustibles fósiles han disminuido de manera considerable en El Salvador, Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela y, en menor medida, México, lo cual se ha traducido en incrementos de precios sobre

5. A. Uthoff: «Do Competitive Markets of Individual Savings Accounts and Health Insurance Work as Part of the Welfare State?» en José Antonio Ocampo y Joseph Stiglitz (eds.): *The Welfare State Revisited*, Columbia UP, Nueva York, 2018.

6. S. Edwards: «Chile's Insurgency and the End of Neoliberalism» en *VoxEU.org*, 30/11/2019.

todo en tarifas eléctricas, combustibles y otros productos energéticos para la población.

La tercera razón que puede explicar la intensidad de las protestas y el voto en contra de los partidos en el poder es que tal vez los datos utilizados para medir la desigualdad son deficientes para cuantificar los niveles de concentración del ingreso entre los muy ricos, y también para evaluar cambios en las tendencias en esta concentración.

Las fuentes de información típicas de los indicadores de desigualdad son las encuestas de hogares. Una limitación conocida de tales encuestas es que, por diversas razones, no captan bien la cola superior de la distribución, esto es, los ingresos de los más ricos. En particular, los hogares tienden a declarar menos ingresos de los que realmente reciben, sobre todo los procedentes de las rentas del capital. A raíz de ello, tanto el grado de desigualdad como la tendencia pueden estar mal calculados. Cuando se corrigen las encuestas y se despojan de este sesgo, los resultados pueden ser muy diferentes. A modo de ejemplo, se examinarán tres trabajos relativamente recientes para Brasil, Chile y Uruguay⁷.

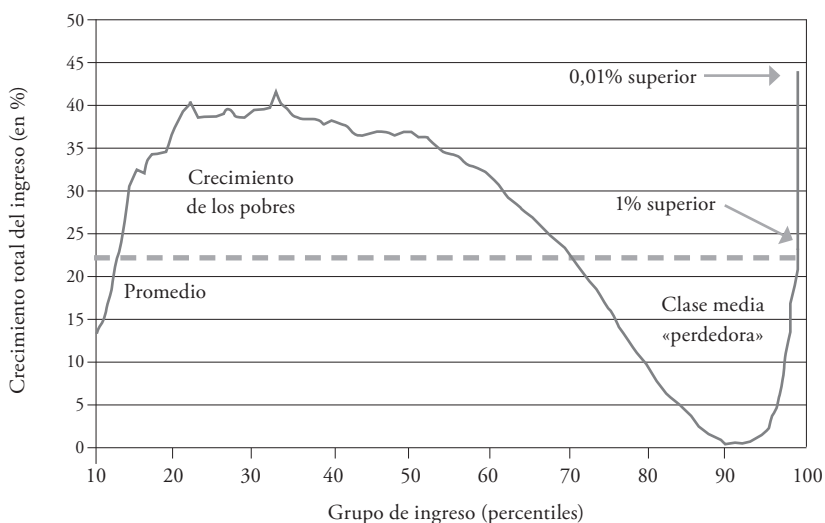
Con los datos corregidos, el coeficiente de Gini de Brasil no solo es bastante más alto que el calculado con los datos de la encuesta, sino que prácticamente ya no se observa la caída de la desigualdad a partir de 2000 (v. gráfico 3). Es más, el peso de la redistribución hacia los sectores de bajos ingresos recayó sobre la población del octavo y el noveno deciles (es decir, sobre las clases medias; en particular, la clase media-alta), mientras que el grupo más rico siguió experimentando un aumento de su ingreso⁸. En el caso de Chile, la proporción del ingreso que capta el 1% más rico con los datos corregidos por subdeclaración de los ingresos del tope es sistemáticamente más alta con los datos corregidos y no muestra la tendencia a la baja que se observa con la encuesta de hogares (v. gráfico 4). En el caso de Uruguay, la proporción que recibe el 1% es mayor con los datos corregidos y aumenta en lugar de disminuir como ocurre con los datos de encuestas (v. gráfico 5).

7. Brasil: Marc Morgan Milá: «Essays on Income Distribution: Methodological, Historical and Institutional Perspectives with Applications to the Case of Brazil (1926-2016)», tesis doctoral, Paris School of Economics (PSE) / École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), 2018; Chile: Ignacio Flores, Claudia Sanhueza, Jorge Atria y Ricardo Mayer: «Top Incomes in Chile: A Historical Perspective on Income Inequality, 1964-2017» en *Review of Income and Wealth*, 2019; Uruguay: Gabriel Burdín, Mauricio De Rosa, Andrea Vigorito y Joan Vilá: «Was Falling Inequality in All Latin American Countries a Data-Driven Illusion? Income Distribution and Mobility Patterns in Uruguay 2009-2016», DT 30/19, Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República, 2019.

8. M. Morgan Milá: ob. cit.

Gráfico 3

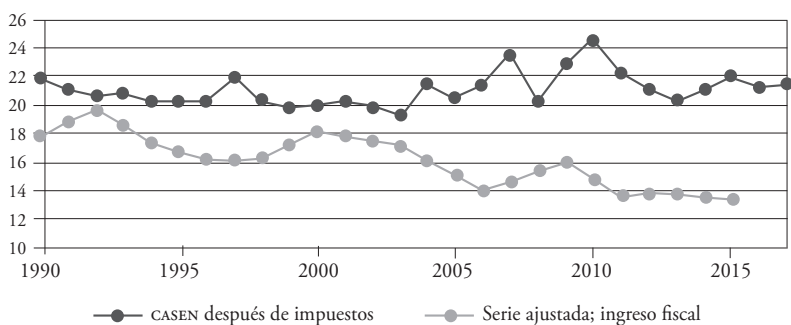
Brasil: curvas de incidencia del crecimiento del ingreso por persona por percentil, 2002-2013



Fuente: M. Morgan Milá: ob. cit.

Gráfico 4

Chile: proporción del ingreso total recibido por el 1% más rico, 1990-2015 (en porcentaje)

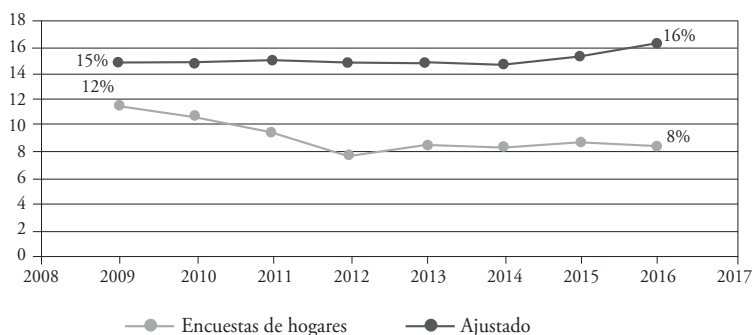


Nota: «CASEN después de impuestos» corresponde a la participación del 1% más rico después de impuestos en las encuestas de hogares; «serie ajustada» corresponde a la participación en el ingreso del 1% más rico según datos fiscales después de corregir los datos por subdeclaración de ingresos e incluir las ganancias no distribuidas.

Fuente: I. Flores, C. Sanhueza, J. Atria y R. Mayer: ob. cit.

Gráfico 5

Uruguay: proporción del ingreso
total recibido por el 1% más rico, 2008-2016 (en porcentaje)



Nota: «ajustado» se refiere a la participación calculada sobre la base del concepto de ingreso fiscal, que consiste en términos generales en ajustar los ingresos de las encuestas de hogares con la información de las declaraciones de impuestos y otras fuentes administrativas.

Fuente: G. Burdín, M. De Rosa, A. Vigorito y J. Vilá: ob. cit.

A partir de estos ejercicios, queda claro que para medir la desigualdad cabalmente es imprescindible tener acceso a información fiscal (por ejemplo, de las declaraciones de impuestos anonimizadas) y otras fuentes administrativas que permitan calcular mejor los ingresos –sobre todo los de la población en los estratos más altos–. Mientras esto no ocurra, tendremos una mirada parcial y sesgada del grado de desigualdad y de su evolución en el tiempo. Esto nos llevará a diagnósticos erróneos sobre las causas y consecuencias de la desigualdad y a recomendaciones de políticas públicas incompletas y equivocadas.

En conclusión, cuando se toma en cuenta el retroceso en el bienestar de la población de los países de América del Sur acontecido a raíz del fin del auge de las materias primas, las limitaciones de los sistemas de pensiones y salud en Chile, el incremento de precios de combustibles de primera necesidad en varios países debido a la reducción de los subsidios gubernamentales, y cuando se consideran indicadores de la desigualdad que captan mejor lo ocurrido con las diferencias de los ingresos absolutos entre ricos y pobres y la concentración del ingreso en el tope de la distribución, la oleada de protestas como rebelión hacia la desigualdad adquiere todo el sentido⁹. ▢

9. Esta conclusión es hasta cierto punto contraria a la planteada por Francisco Ferreira y Martha Schoch: «Inequality and Social Unrest in Latin America: The Tocqueville Paradox Revisited» en *World Bank Blog*, 24/2/2020.

La manifestación: el origen de una forma de protesta

Olivier Fillieule / Danielle Tartakowsky

Hoy es habitual que gente de diversas edades, grupos sociales y adscripciones ideológicas se manifieste en las calles con distintos tipos de demandas. Sin embargo, eso no fue siempre así. En el libro *La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles* (Siglo Veintiuno, 2015), Olivier Fillieule y Danielle Tartakowsky trazan un recorrido histórico del repertorio de protestas con una visión comparativa y global.

Charles Tilly postula que la manifestación en su sentido contemporáneo surge en 1850; es una estilización teórica. Cualquier estudio histórico de los casos nacionales incita a relativizarla. Para el Nuevo Mundo, la cuestión de la transición entre el repertorio de acciones del Antiguo Régimen y el repertorio moderno no tiene siquiera la menor pertinencia. En Europa, las guerras napoleónicas y luego las revoluciones francesas del temprano siglo XIX provocaron una conmoción cuyos ecos fueron perceptibles en el continente entero, e incluso más allá. En numerosos Estados, estos momentos de conmoción, de crisis y a veces de revolución van acompañados por «movimientos callejeros» que pertenecen al repertorio del Antiguo Régimen y que durante algún tiempo pueden prolongarse en cortejos pacíficos.

Olivier Fillieule: es politólogo y sociólogo. Se desempeña como investigador sénior en el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS, por sus siglas en francés) y es profesor en la Universidad de Lausana.

Danielle Tartakowsky: es historiadora y se especializa en historia contemporánea. Es profesora en la Universidad París VIII.

Palabras claves: democracia, manifestación, Modernidad, protesta, voto.

Estos cortejos, que en la acepción contemporánea del término podríamos considerar manifestaciones *avant la lettre*, se distinguen de estas en distintos aspectos. A menudo se despliegan con la ayuda y al abrigo, a veces relativo, de fiestas de soberanía, de festividades tradicionales¹ o de ceremonias funerarias². No son percibidos por los poderes vigentes como modalidades acordadas de la política y, por lo demás, no dejan de ser ocasionales y «observados», cuando no reprimidos. Vincent Robert los califica como «coletazos de crisis revolucionarias»³, que desaparecen no bien los regímenes en cuestión entran en una etapa de estabilización.

La matriz británica

Las primeras marchas, documentadas en Estados Unidos y en Gran Bretaña desde el primer tercio del siglo XIX, no cumplen esas mismas funciones. Durante las primeras décadas del siglo XIX, en EEUU, las ciudades son habitadas por una población heterogénea de recién llegados de orígenes diversos. Numerosas ceremonias cívicas organizadas en esas ciudades recurren a marchas en las que se reúnen los grupos de personas que estructuran los gremios, los grupos sociales, políticos o étnicos. Estas marchas, que se multiplican en las décadas de 1830 a 1850, permiten a la población no solo presentar y representar públicamente su diversidad, sino también asignar un lugar a cada grupo. La república democrática se encarna en innumerables fiestas cívicas, durante acontecimientos que se consideran dignos de celebración (tal como la conclusión del canal de Erie en 1825) o en ocasión de aniversarios regionales o locales, o incluso fiestas nacionales (el Admission Day en San Francisco, el Día de San Patricio en Nueva York, el 4 de Julio, el aniversario del nacimiento de George Washington, etc.⁴). Fenómenos de índole similar se encuentran a lo largo del tiempo en diversos países de América Latina, como México⁵.

En Europa, las manifestaciones emergentes son, en primer lugar, de protesta. En Bohemia, el movimiento nacional de 1848 califica las concentraciones

1. Matthias Reiss (ed.): *The Street as Stage: Protest Marches and Public Rallies since the Nineteenth Century*, Oxford UP, Oxford, 2007.

2. Emmanuel Fureix: *La France des larmes. Deuils politiques à l'âge romantique (1814-1840)*, Champ Vallon, París, 2009.

3. V. Robert: *Les chemins de la manifestation, 1848-1914*, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1996.

4. Mary P. Ryan: *Civic War: Democracy and Public Life in the American City during the Nineteenth Century*, University of California Press, Berkeley, 1997.

5. Loïc Abrassart: «Un peuple en ordre. Processions civiques, cortèges et construction du peuple dans les fêtes civiques mexicaines du Porfiriato, Mexico, 1900-1910» en *Sociétés et Représentations* vol. 2000/1 N° 8, 12/1999.

**Es en Gran Bretaña
donde primero
se desarrolla la
manifestación,
comprendida como
un cortejo
autónomo, ordenado**

al aire libre organizadas en el norte de Praga, durante la «primavera de los pueblos», de *meetingki*, antes que recurrir al término *tàbory*, para anclarlas en la cultura nacional, ya que se refieren a los *tàbor* (campos militares, símbolos de la historia nacional checa). En 1883, en París, la Comisión Ejecutiva de los «obreros sin trabajo», que intenta movilizar a las víctimas de la crisis económica, utiliza también las formas y el vocabulario británico cuando llama a un «*meeting* en la plaza pública». Estos préstamos lingüísticos, tal vez más numerosos de lo que estos ejemplos atestiguan, demuestran la fuerza del modelo inglés e incitan a interrogarse sobre el lugar de la manifestación en la Gran Bretaña del temprano siglo XIX.

Al parecer, es en Gran Bretaña donde primero se desarrolla la manifestación, comprendida como un cortejo autónomo, ordenado y que goza de una tolerancia definida, aunque no ilimitada⁶. En *Contentious Performances* [Actuaciones contenciosas], Tilly identifica tres momentos claves en la historia de la manifestación en Gran Bretaña. Primeramente, las manifestaciones de los seguidores de John Wilkes en 1768 y 1769

incorporan elementos de las antiguas celebraciones públicas (coronaciones, festejos de victorias militares, participación de no electores en comicios objetados y marchas de trabajadores en defensa de derechos amenazados). Sin embargo, el apego de quienes protestaban a un programa de derechos populares y su identificación con un formidable impulso popular distinguen a estas manifestaciones como nuevos tipos de realizaciones.⁷

Esta última y sutil observación sugiere que lo que cambia no es la forma de las protestas, sino su sentido y su interpretación, los cuales, como contrapartida, contribuyen a transformar la morfología de esas protestas. El aporte de nuevos significados a una forma previa induce otros modos de reacción de los actores implicados, ya sean la gente en el poder, aquellos a quienes apunta la protesta o los públicos⁸.

6. C. Tilly: «Social Movements and National Politics» en Charles Bright y Susan Harding (eds.): *Statemaking and Social Movements: Essays in History and Theory*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1984.

7. C. Tilly: *Contentious Performances*, Cambridge UP, Cambridge, 2008, p. 75.

8. Ver Mark Traugott: «Barricades as Repertoire: Continuities and Discontinuities in the History of French Contention» en M. Traugott (ed.): *Repertoires and Cycles of Collective Action*, Duke UP, Durham-Londres, 1995; Cécile Péchu: *Droit au logement, genèse et sociologie d'une mobilisation*, Dalloz, París, 2006.

En segundo lugar, la masacre de Peterloo del 16 de agosto de 1819⁹ tiene como efecto específico tornar más legítimo el acto de manifestar y, sobre todo, tornar más costoso el de reprimirlo:

Por contrapartida, eso afianzó el derecho de los ciudadanos a marchar y a congregarse pacíficamente en nombre de la reforma parlamentaria. La manifestación se volvía un medio disponible para una amplia gama de reivindicaciones públicas.¹⁰

Por último, Tilly evoca las grandes manifestaciones políticas de 1820 en favor de la reina Carolina de Brunswick y dirigidas contra el rey, que culminan con los funerales políticos de la reina en agosto de 1821. Los modos de acción utilizados se inspiran en los *camp meetings* metodistas y primitivos, en su retórica milenarista, en el ceremonial de las guildas o gremios medievales, en la cultura más reciente de los ex-combatientes de las guerras antinapoleónicas o la de los sindicatos o sociedades de socorro mutuo, según combinaciones complejas. A menudo se inscriben en una perspectiva de mutación radical, incluso escatológica. Aspiran también a la construcción de una opinión pública nacional¹¹, como lo atestiguan las marchas hacia Londres a partir de 1816, que reúnen, repetidas veces, a más de 100.000 manifestantes.

Durante la década de 1820, los trabajadores en huelga, por su parte, recurren cada vez más a menudo a la manifestación¹². En la década siguiente, esta ocupa ya un lugar central en el repertorio británico de la protesta.

Esta transformación que, según Tilly, se inicia en Gran Bretaña alrededor del periodo 1801-1820 para consumarse en la década de 1830, ocurre de

9. La represión ocurrió en la plaza de St. Peter's Field, en la ciudad de Mánchester, el 16 de agosto de 1819, contra una manifestación que reclamaba la reforma de la representación parlamentaria en un sentido democrático (sufragio universal, voto secreto, elección anual de la Cámara de los Comunes) [N. del E.].

10. C. Tilly: *Contentious Performances*, cit., pp. 76-77. Una observación idéntica figura en Peter A. J. Waddington: «Controlling Protest in Contemporary Historical and Comparative Perspective» en Donatella Della Porta y Herbert Reiter (eds.): *Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1998.

11. E. P. Thompson: *La formation de la classe ouvrière anglaise*, Gallimard / Seuil, París, 1988. [Hay edición en español: *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, Crítica, Barcelona, 1989].

12. Marc W. Steinberg: «The Roar of the Crowd: Repertoires of Discourse and Collective Action among the Spitalfields Silk Weavers in Nineteenth-Century London» en M. Traugott (ed.): *Repertoires and Cycles of Collective Action*, ob. cit.; Marc W. Steinberg: *Fighting Words: Working-Class Formation, Collective Action, and Discourse in Early Nineteenth-Century England*, Cornell UP, Cornell, 1999.

**Existen
protomanifestaciones
a partir de 1831
en Lyon, que
desaparecen bajo el
peso de la represión
y reaparecen
a partir de 1870**

una manera un poco más tardía en Francia¹³: en *La France conteste* [Francia protesta]¹⁴, la sitúa hacia 1850. En *Contentious Performances*, a partir de los trabajos de Vincent Robert, subraya que 1848 marca sin duda el nacimiento de la manifestación moderna en Francia, pero que debido al paréntesis autoritario del Segundo Imperio (1850-1860) se fija recién a partir de 1890¹⁵. Más precisamente, según Robert, existen protomanifestaciones a partir de 1831 en Lyon, que desaparecen bajo el peso de la represión y reaparecen a partir de 1870, aunque limitadas a formas antiguas (funerales anticlericales, celebraciones locales de la toma de la Bastilla, ceremonias oficiales, procesiones religiosas, delegaciones de trabajadores ante las autoridades municipales o estatales). A partir de la expansión de las asociaciones voluntarias, a finales de la década de 1880, las manifestaciones adquieren cierta prominencia en la vida pública lionesa. A esto hay que añadir el rol —en cierto modo, similar al de Peterloo en Gran Bretaña— de la masacre de Fourmies en 1891¹⁶.

Movimientos obreros y manifestaciones

La huelga y la marcha suelen ir a la par¹⁷. Los cortejos son, en efecto, indispensables para la conducción de algunas huelgas y por eso se convierten en sus apéndices obligados. Responden, entonces, a objetivos que pueden diferir de un grupo a otro: «columnas» destinadas a incitar a los otros obreros a parar la producción (minas, astilleros), marchas forzosas a consecuencia del cierre de una empresa por el patrón (*lock out*), cortejos destinados a afirmar la cohesión del grupo obrero (en particular, en las ciudades medianas monoindustriales), la solidaridad o la fuerza perpetuada de movimientos que se eternizan como en la industria textil, cortejos festivos de fin de huelga... En Nueva Inglaterra, obreras en huelga

13. Acerca del caso estadounidense, v. Michael P. Young: «Confessional Protest: The Religious Birth of us National Social Movements» y «Reply to Tilly: Contention and Confession» en *American Sociological Review* vol. 67 N° 5, 2002.

14. C. Tilly: *La France conteste, de 1600 à nos jours*, Fayard, París, 1986.

15. V. Robert: ob. cit.

16. Marcha en defensa de la jornada laboral de ocho horas que acabó con nueve muertos y más de 30 heridos [N. del E.]. André Pierrard y Jean-Louis Chappat: *La fusillade de Fourmies. 1^{er} mai 1891*, Miroirs, Lille, 1991.

17. Michelle Perrot: *Jeunesse de la grève*, Seuil, París, 1984.

de la industria textil y del calzado organizan *parades* (desfiles) desde el primer tercio del siglo. En Europa, en la segunda mitad del siglo XIX, estas manifestaciones se desarrollan al ritmo de conflictos locales. No corresponden a ningún principio unificador pero contribuyen a constituir precozmente la manifestación o, al menos, el cortejo como el momento esencial de la huelga (piénsese en *Germinal* de Émile Zola). La depresión económica que azota a Europa y culmina en 1885-1886 constituye la primera ocasión de convergencias desde 1848, que aun así son de alcance limitado. Va acompañada por manifestaciones de «sin trabajo» en diversos países de Europa.

En Gran Bretaña, el reflujo del cartismo¹⁸ en beneficio de las *trade unions* significó la afirmación de estrategias que desconfiaban de la movilización colectiva globalizante en las formas que esta adoptó en el temprano siglo XIX. La Social Democrat Federation organizó potentes manifestaciones de «sin trabajo». En Londres, estas se convierten en levantamientos (1886) y se topan con una violenta represión (Bloody Sunday [domingo sangriento], noviembre de 1887), que resulta en un trato menos liberal y una desconfianza mayor de las *trade unions*. Por ende, la manifestación callejera retrocede en Gran Bretaña en el preciso momento en que comienza a afirmarse en diversos países de Europa occidental.

Por el contrario, en Francia o en Bélgica, estas mismas movilizaciones de la década de 1880 constituyen el momento de un giro del movimiento obrero hacia el nuevo repertorio de acción. En París, los *meetings* que vanamente intentó organizar la Comisión Ejecutiva de los «obreros sin trabajo» y las relaciones peligrosas que las manifestaciones blanquistas¹⁹ mantienen con las de los «boulangistas»²⁰ resucitan durante cierto tiempo algunos fantasmas de 1848 pero, en realidad, constituyen un «adiós a las barricadas»²¹. En Bélgica, alrededor de Lieja y de Charleroi, la revuelta industrial de marzo de 1886, que se salda con la muerte de 28 obreros, es la última en su género. Su desaparición coincide con la afirmación de nuevos

18. El movimiento cartista se desarrolló a fines de la década de 1830 por iniciativa de la Asociación de Trabajadores Londinenses. En un primer momento reclamó el sufragio universal masculino, contra el sistema electoral restrictivo vigente [N. del E.].

19. Seguidores de las ideas de Louis Auguste Blanqui (1805-1881), quien propugnaba la acción revolucionaria conspirativa por parte de una pequeña vanguardia bien organizada como reemplazo de la acción de masas más amplia, para tomar el poder y ejercerlo de manera dictatorial en favor de las mayorías [N. del T.].

20. Movimiento protopopulista, nacionalista y antiparlamentario seguidor del general Georges Boulanger que logró el apoyo de sectores medios y obreros [N. del E.].

21. Michel Pigenet: «L'adieu aux barricades. Du blanquisme au vaillantisme (décennies 1880-1890)» en Alain Corbin y Jean-Marie Mayeur (dirs.): *La barricade. Actes du colloque organisé les 17, 18 et 19 mai 1995*, Publications de la Sorbonne, París, 1997.

modos de manifestación, en Francia, a iniciativa de los «guesdistas»²² y en Bélgica, del Partido Obrero Belga. Fenómenos similares afectan a Finlandia. En EEUU, «ejércitos» de desempleados realizan grandes marchas que dividen al país en 1893 y 1894 (bajo la dirección de los improvisados «generales» Charles Kelley, Lewis Fry, Jacob Coxey o Thomas Galvin²³).

La decisión de organizar, el 1º de mayo de 1890, un día internacional de lucha por la obtención de la jornada laboral de ocho horas, tomada un año antes por el congreso socialista de París, constituyó un momento importante de unificación simbólica de prácticas obreras que hasta entonces habían sido dispares. El llamado, que apostó ante todo a la simultaneidad de la acción, se abstuvo de especificar sus formas. Las marchas que ese llamamiento suscitó fueron de una diversidad extrema.

Durante tres años, Londres debe a la presión de la Social Democrat Federation, y a un liberalismo político notoriamente más extendido que en otros lugares de Europa, el hecho de albergar poderosas manifestaciones que se convierten en formas de amparo para los refugiados políticos de toda Europa. En Francia, los guesdistas intentan, sin éxito, «intimaciones» ante los poderes públicos, que constituyen la matriz de las manifestaciones peticionarias contemporáneas. En Alemania, en Austria-Hungría, en Italia o en Bélgica, después de 1890, se multiplican los cortejos ritualistas y festivos, que a menudo se despliegan por el espacio campestre para evitar cualquier tipo de conflicto. En su mayoría, estos cortejos son mejor tolerados que bajo otras circunstancias, excepto en Europa central y oriental. Tanto para los manifestantes como para las fuerzas del orden, estas manifestaciones se vuelven una ocasión posible y frecuente de aprendizaje de la marcha ordenada. Pero eso no puede ser lo esencial. Los grabados que aparecen en casi todos los países involucrados para documentar este mito del 1º de Mayo erigen la marcha como símbolo del progreso hacia un devenir mejor. Contribuyen a dotar a la manifestación de un alcance simbólico capaz de acrecentar sus capacidades movilizadoras²⁴. El fenómeno no tiene la misma validez en EEUU, donde la apropiación de esta iniciativa sigue siendo marginal si se exceptúan el 1º de mayo de 1933 en Nueva York y el 1º de mayo de 1936 en Chicago.

22. En un congreso realizado en 1882 en Lyon se fraccionó la Federación del Partido de los Trabajadores Socialistas de Francia: por un lado los «posibilistas» fundaron la Federación de Trabajadores Socialistas, mientras que Jules Guesde y los «guesdistas», de orientación marxista, crearon el Partido Obrero Francés [N. del E.].

23. Donald L. McMurtry: *Coxey's Army: A Study of the Industrial Army Movement of 1894*, Little, Brown and Company, Boston, 1929.

24. Maurice Dommanget: *Histoire du Premier Mai*, Le Mot et le Reste, París, 2006; D. Tartakowsky: *La part du rêve. Histoire du 1º mai en France*, Hachette, París, 1995; Miguel Rodríguez: *Le 1º Mai*, París, Gallimard, 2013.



© Nueva Sociedad / Gustavo Deveze 2020

El mundo obrero estaba lejos de ser el actor exclusivo de una práctica que se afirmaba como pluriclasista, a iniciativa de fuerzas políticas de todas las tendencias —socialistas, pero también católicos, liberales o nacionalistas—, y que se imponía en numerosos Estados de Europa occidental como una modalidad de la lucha política.

Sufragio universal y manifestaciones

La manifestación callejera solo se autonomiza y se afirma como modalidad de acción política con el surgimiento de una esfera pública y con la consolidación de las democracias parlamentarias. De ahí el evidente desfase entre tres conjuntos geopolíticos: el continente americano, Europa occidental y Australia, donde el fenómeno es precoz; Europa oriental, donde es claramente más tardío; y Asia, África y Oriente Medio, donde constituye una importación paradójica de la colonización o de la occidentalización y de las resistencias que estas suscitan.

El primer conjunto está surcado por importantes diferencias, que radican en la desigual legitimidad que el sistema político entonces dominante permite o prohíbe reconocer a este modo de acción. La manifestación goza de una tolerancia temprana en Gran Bretaña y en EEUU, donde cualquier movilización de la opinión pública es considerada un barómetro de la legitimidad política. Esto vale también para Bélgica, en virtud de la Constitución de 1830, y para algunos estados alemanes, ya que abarca únicamente a las marchas con dimensión cívica. Todos estos países sirven de modelos, a menudo idealizados, para quien los compara con aquellos otros países, mayoritarios, que por ese entonces imponen prohibiciones.

Esta tolerancia relativa permite que la manifestación se imponga como un instrumento de conquista del sufragio universal en diversos países de Europa occidental, tal como en algún momento sucedió en Gran Bretaña. Las manifestaciones que movilizan entonces a las elites, y se extienden a veces a los medios populares, aspiran a afirmar que quienes marchan poseen capacidad plena y total de convertirse en ciudadanos. Sus organizadores se esmeran en dar una imagen de orden y de respetabilidad. Así, los manifestantes marchan por todas partes en un orden estricto, vestidos con sus ropas de domingo²⁵. En Bélgica, liberales y católicos se movilizan conforme a esta modalidad a partir de 1884. También los socialistas inscriben

25. Bernd Jürgen Warneken y Joachim Albrecht (eds.): *Als die Deutschen demonstrieren lernten*, Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft, Tübinga, 1986; Thomas Lindenberg: *Strassenpolitik. Zur Sozialgeschichte der öffentlichen Ordnung in Berlin, 1900-1914*, J. H. W. Dietz Nachf, Berlín, 1995.

sus movimientos en el calendario religioso (15 de agosto de 1880 [día de la Asunción], Pentecostés de 1886), no sin hacer un aporte importante al giro del mundo obrero hacia el nuevo repertorio de acción. Manifestaciones similares se desarrollan en Finlandia y en Suecia entre 1904 y 1906, en Sajonia, en Hamburgo y en Austria en 1905 y 1906, en Prusia de 1908 a 1910, anotando puntos cuando no alcanzando victorias.

Las manifestaciones de las *suffragettes* constituyen una faceta específica de este mismo combate. En EEUU se organizan marchas de mujeres a partir del 8 de marzo de 1908 con motivo del Día de las Mujeres²⁶. Se extienden a algunos países de Europa a partir de 1911, convocadas por la Segunda Internacional, y definen amplios objetivos que incluyen la mejora de las condiciones de trabajo. En Gran Bretaña, se inscriben de manera más específica en el combate por el sufragio universal. En un primer momento, las *suffragettes* escogen reunirse en Hyde Park, pero luego toman la senda de las manifestaciones espectaculares, a menudo violentamente reprimidas, entre 1906 y 1911, antes de replegarse a manifestaciones más locales. La concentración que organizan en Londres en vísperas de la coronación de Jorge V, en presencia de numerosas delegaciones internacionales, incluida la de la India, se extiende a nuevos territorios; por ejemplo, Austria o Múnich²⁷. En EEUU, recién a partir de 1910 se organizan en Nueva York marchas anuales en favor del sufragio, como la marcha de las antorchas de mayo de 1912 en que las mujeres reivindican un nuevo estatuto. Si bien esas manifestaciones gradualmente se extienden a otros estados, solo relevamos una manifestación nacional en EEUU, el 3 de marzo de 1913, por la avenida Pennsylvania de Washington, bajo la batuta de Alice Paul, dirigente de la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer (NAWSA, por sus siglas en inglés). La marcha reprodujo el modelo británico: fue encabezada por Inez Milholland, a caballo y envuelta en una capa blanca, seguida por entre 5.000 y 8.000 mujeres, con delegaciones por estados, asociaciones de hombres y grupos de músicos. Según Birgitta Bader Zaar,

Las manifestaciones de las *suffragettes* constituyen una faceta específica de este mismo combate

26. Para más información sobre las manifestaciones de Londres y, más en general, sobre el movimiento de las *suffragettes*, v. Jill Liddington y Jill Norris: *One Hand Tied behind Us: The Rise of the Women's Suffrage Movement*, 2ª ed., Virago, Londres, 2000.

27. Richard Evans: *The Feminist Movement in Germany, 1894-1933*, Sage, Londres, 1976; Sharon H. Strom: «Leadership and Tactics in the American Women Suffrage Movement: A New Perspective from Massachusetts» en Jean E. Friedman y William G. Shade (eds.): *Our American Sisters: Women in American Life and Thought*, 3ª ed., D. C. Heath, Lexington, 1987.

los carros estaban adornados con los colores de las militantes británicas –blanco, violeta y verde– y con el amarillo de la NAWSA, con una réplica de la Campana de la Libertad de Filadelfia y una representación de la primera convención de las *suffragettes* estadounidenses, celebrada en Seneca Falls en 1848. (...) La procesión terminaba en un grupo de cien mujeres blancas²⁸ y niños, ubicados sobre las escalinatas del edificio del Tesoro frente a la Casa Blanca, y representando alegorías evocadoras de las virtudes constitucionales: Columbia, la Justicia, la Libertad, la Caridad, la Paz y la Esperanza.²⁹

Las muy violentas reacciones de los espectadores, que impidieron a las manifestantes desplazarse por el espacio urbano, y la actitud expectante de las fuerzas del orden provocaron un verdadero motín y llevaron al abandono de la estrategia de la manifestación por parte del movimiento.

En los países mencionados, la manifestación, que fue uno de los instrumentos de conquista del sufragio universal, no aparece en competencia con él. Una vez obtenido el sufragio (masculino), la manifestación perdió centralidad política, a menos que se afirmara como una modalidad de la fiesta de la soberanía; en primer lugar, en EEUU. La situación es radicalmente diferente en Francia, donde el sufragio universal masculino, proclamado en 1848

En Francia, el sufragio universal masculino es anterior –y por mucho– al surgimiento de la manifestación

pero muy pronto recortado antes de ser restaurado con todas sus prerrogativas en 1875, es anterior –y por mucho– al surgimiento de la manifestación en su acepción contemporánea. Esta cronología particular contribuye a conferir a la manifestación una ilegitimidad que durante un tiempo prolongado seguirá siendo la norma.

Hasta 1831, los usos del espacio público son regidos por el dispositivo legislativo instaurado durante la Revolución (ley marcial del 21 de octubre de 1789, leyes del 23 de febrero de 1790 sobre la utilización de la fuerza pública y del 27 de julio de 1791 sobre la requisita y la acción de la fuerza pública). Este dispositivo apuntaba a hechos de extrema gravedad y volvía a los contraventores pasibles de sanciones que llegaban a la pena capital. Pronto se mostró inadecuado para las concentraciones a las cuales se veían confrontadas las autoridades, como los *charivaris* (manifestaciones ruidosas) o las movilizaciones contra los recaudadores de impuestos o los patronos.

28. Blancas, en efecto, ya que la manifestación respeta una separación racial de los manifestantes.

29. B. Birgitta Bader-Zaar: «‘With Banners Flying’: A Comparative View of Women’s Suffrage Demonstrations 1906-1914» en M. Reiss (ed.): ob. cit., pp. 114-115.

En la práctica, este proceso desemboca en un vacío jurídico que viene a llenar la ley del 10 de abril de 1831, destinada a regular levantamientos más que manifestaciones. Según los términos de esta ley, la más pacífica de las reuniones podía ser calificada de movilización, en cuanto un representante del Estado ordenara su dispersión. Las personas que la prolongaran después del primer requerimiento podían ser arrestadas y llevadas ante los tribunales de contravenciones menores. Con todo, solo eran pasibles de penas leves. La Segunda República modificará esta legislación. La ley del 7 de junio de 1848 opera una distinción entre las movilizaciones armadas, completamente prohibidas, y las no armadas, prohibidas en caso de que pudieran «perturbar la tranquilidad pública». Preserva el principio del requerimiento previo, agrava las penas previstas por la ley de 1831 y prevé el juicio de las infracciones por los tribunales penales.

Los republicanos de la década de 1880 deben a su individualismo filosófico el considerar a los cuerpos intermedios como fuerzas que obran a modo de pantalla entre el ciudadano elector y los elegidos, única expresión legítima del pueblo soberano. Esta desconfianza hacia cualquier expresión colectiva de intereses particulares se extendía, naturalmente, a los «movimientos callejeros» que, a partir de 1789, han erigido y derribado regímenes. El nuevo régimen consideraba el sufragio universal, combinado con las conquistas democráticas de la década de 1880, como el único marco legal que permitía a cada uno expresar y, por ende, «manifestar» individualmente —diferencia notoria— su pensamiento. Así, negaba toda legitimidad a movimientos destinados a hacerse oír por los poderes públicos por otras vías. Además, no incluía la manifestación entre las libertades democráticas que en ese momento garantizaba. Limitaba la expresión del derecho de petición al Parlamento y para todo lo demás se atenía al corpus jurídico existente, agravado por la ley del 30 de junio de 1881, que prohibía realizar reuniones en la vía pública. Las constituciones republicanas ulteriores reconocerán al ciudadano el derecho de «manifestar su pensamiento» sin formular la existencia de un derecho a la manifestación en su acepción contemporánea. En virtud de la ley municipal de 1884, su eventual tolerancia quedaba a discreción de los alcaldes. En París, estaba sometida a la buena voluntad de la prefectura de policía.

Estas orientaciones políticas no significan en absoluto la ausencia de manifestaciones. Las crisis que marcan las primeras décadas de la República ven a los «movimientos de la calle» ceder el paso a manifestaciones de los boulangistas y, más tarde, de los antidreyfusistas que amenazan repetidamente, si no al poder, al menos sus símbolos, e inscriben la manifestación en el repertorio de acción de la derecha nacional. Este modo de expresión, al cual los estudiantes nacionalistas recurren con especial frecuencia en París, se afirma con el surgimiento de los partidos modernos, una vez concluido el

caso Dreyfus. La legitimidad que entonces se reconoce paulatinamente a los partidos y a los grupos parlamentarios no se extiende, en cambio, a la manifestación callejera, que se considera una expresión del desorden político y un potencial factor de violencia. La gradual intervención reguladora del poder central obedecía a consideraciones de orden público, no de legitimidad política.

En un régimen en el cual la «manifestación» pertenece a la misma categoría jurídica que la «concentración», el mantenimiento del orden público corresponde, desde luego, al ejército en sus cuerpos urbanos y rurales (la gendarmería). Pero la instauración del servicio militar obligatorio en 1872 y la organización regional de las tropas, luego de la derrota de 1870 en la Guerra Franco-Prusiana, tienen como consecuencia acercar el ejército a la sociedad civil y volver delicado un eventual cara a cara entre manifestantes y fuerzas del orden, en especial durante las huelgas. El 1º de mayo de 1891, en Four-

**En las provincias,
la utilización de la
gendarmería y
del ejército seguirá
siendo la regla**

mies, la muerte de nueve manifestantes, entre ellos cuatro mujeres y un niño, da prueba de esto. Sin embargo, la situación no evoluciona en todas partes al mismo ritmo. En París, el prefecto de policía Louis Lépine concibe métodos innovadores que permiten a la policía municipal «asegurar la calle»³⁰. En las provincias, la utilización de la gendarmería y del ejército seguirá siendo la regla. Nuevas manifestaciones sangrientas se producen en Narbona,

en Draveil-Vigneaux, en Villeneuve-Saint-Georges, mientras que la violencia desaparece (o casi) de las calles de la capital, hasta la guerra.

A esta modalidad de acción recurren las organizaciones obreras, los católicos en lucha contra los inventarios de bienes de la Iglesia, los viticultores de la región de Champagne o del Mediodía, los estudiantes nacionalistas y, desde luego, la Acción Francesa. Gradualmente, va a imponerse a los poderes públicos. En 1907, Georges Clemenceau admite que pueden tolerarse ciertas demostraciones, en función de la personalidad de sus organizadores y de su capacidad de enmarcarlas, en concordancia con los poderes públicos. La primera de esas «demostraciones» es la «gran protesta» contra la ejecución de Francisco Ferrer, el 17 de octubre de 1909³¹; también es la primera vez en la historia que el orden es asegurado por integrantes de la propia manifestación, lo que en francés se llama «servicio de orden»³².

30. Jean-Marc Berlière: *Le préfet Lépine, vers la naissance de la police moderne*, Denoël, París, 1993.

31. Pedagogo anarquista español, promotor de la Escuela Moderna, fue condenado a muerte por un consejo de guerra que lo acusó de haber sido uno de los instigadores de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona de julio de 1909. Su condena generó protestas en diversas ciudades del mundo [n. del e.].

32. Dominique Cardon y Jean-Philippe Heurtin: «'Tenir les rangs'. Les services d'encadrement des manifestations ouvrières (1906-1936)» en Pierre Favre (dir.): *La manifestation*, Presses de Sciences Po, París, 1990.

En 1921 se crea un cuerpo de gendarmes motorizados especializados en el mantenimiento del orden. El 23 de octubre de 1935, un decreto-ley estipula: «Los cortejos, las marchas, las concentraciones de personas y cualquier manifestación en la vía pública están sometidos a la obligación de una declaración previa ante el prefecto de policía». Concebido para controlar mejor los usos políticos de la calle luego de las manifestaciones sangrientas que se sucedieron entre febrero de 1934 y agosto de 1935, confiere así a la manifestación el estatuto del cual carecía hasta ese momento; pese a su carácter provisorio y a la ausencia de ratificación legislativa ulterior, permanecerá en vigor hasta la actualidad.

Las relaciones complejas entre la manifestación y la práctica electoral son distintas en otros lugares. En Argentina, las condiciones problemáticas en las cuales se efectúan los comicios dan mayor legitimidad a la manifestación. En Buenos Aires, donde el derecho a voto masculino irrestricto existe desde 1821, son pocos aquellos que lo ejercen en la práctica: solo una minoría de extranjeros elige naturalizarse y los ciudadanos nativos no demuestran demasiado interés en la actividad electoral. Además, el voto es ocasión frecuente de enfrentamientos colectivos y violentos entre facciones partidarias encuadradas por caudillos. El ejercicio del derecho de voto estaba lejos de verse asociado a la noción de representación política. Parecía dar pie a una serie de manipulaciones.

Los habitantes de Buenos Aires que no son indiferentes a la vida pública recurren a diversas acciones colectivas y desarrollan una verdadera «cultura de la movilización». Las manifestaciones y concentraciones en las plazas públicas son consideradas, incluso por las elites, mecanismos de intervención política adecuados para influir sobre el gobierno. Este modo de representación de los intereses colectivos del pueblo parece un complemento o un sustituto del voto, una práctica benéfica para las instituciones democráticas³³. Este uso legitimador de la manifestación probablemente sea válido también para otros países de Latinoamérica, incluso hasta fechas muy contemporáneas. Eso sucede en Venezuela a partir de la crisis de 1989³⁴.

Sistemas nacionales y movimientos transnacionales

Desde el cambio de siglo se afirman sistemas nacionales con reglas y ritos propios, que a menudo han quedado tácitos. Estos sistemas deben su

33. Hilda Sabato: *La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880*, Sudamericana, Buenos Aires, 1998.

34. Margarita López Maya: «Movilización, institucionalidad y legitimidad en Venezuela» en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* vol. 9 N° 1, 2003; M. López Maya y Luis Edgardo Lander: «Novedades y continuaciones de la protesta popular en Venezuela» en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* vol. 12 N° 1, 2006.

especificidad al derecho, a las modalidades del mantenimiento del orden, a las matrices históricas y culturales, distintas de un Estado a otro, así como a las relaciones que la cultura política dominante mantiene en cada uno de ellos con la Iglesia y el ejército. Se convierten en un marco unificador para todos los tipos de manifestaciones desplegadas en el marco nacional, más allá de la diversidad de sus actores o de sus objetivos, identitarios o reivindicativos. Esta «nacionalización» tiende a acentuarse aún más después de la Primera Guerra Mundial, cuando el papel político de las manifestaciones se diversifica considerablemente de un Estado a otro. En las democracias parlamentarias de Europa del Norte y del Noroeste, las manifestaciones se afirman de manera duradera como expresión ritualizada de grupos constituidos o como apéndices de huelgas, con exclusión de toda otra función. En los regímenes en crisis, en 1917, 1919, 1922 o 1933, la «calle» puede convertirse en uno de los elementos en juego y en un instrumento de lucha indisociable de las crisis revolucionarias, concebidas como el medio o la tentativa de giro de un régimen a otro, pero ya solo ocupa un lugar secundario en los procesos de ruptura. En contados países, como Francia o Argentina, desempeñan en cambio un papel determinante en la gestión de algunas crisis políticas mayores, que se resuelven dentro del marco de los regímenes existentes³⁵. La manifestación se impone allí como un medio de regulación de las crisis políticas. Se convierte en un síntoma de los límites a los cuales cada una de las partes pretende ceñirse y significa que la partida se juega en el campo del dominio, no de la violencia. Eso implica que todos adhieran de manera prolongada a los códigos constitutivos de la sociedad en cuestión y, por eso mismo, que no haya crisis abierta del régimen.

La afirmación de los sistemas nacionales que caracteriza la etapa de apogeo de los Estados-nación no excluye elementos tomados de la simbología internacional, tales como la bandera roja, La Marsellesa y, más tarde, La Internacional, en el umbral del siglo xx. Va aparejada a la afirmación periódica de ciclos transnacionales que repercuten, aunque de manera desigual, en la mayoría de ellos. Lo mismo ocurre con la «cultura de guerra» de la década de 1920, con la «conquista de la calle» que la Internacional comunista reivindica entre 1928 y 1931, con las «marchas del hambre» desplegadas frente a la crisis económica en numerosos países.

Estas marchas revisten una importancia particular en EEUU: la «Bonus March», 1932; la «marcha del hambre» en Dearborn; las marchas en defensa de «los nueve de Scottsboro», en el bienio 1932-1933, organizadas por

35. Marianne González-Alemán: «La marche de la Constitution et de la liberté» (19 septembre 1945): une certaine idée de 'l'Argentine authentique' en *Le Mouvement Social* N° 202, 1-3/2003.

el Partido Comunista estadounidense³⁶ y apoyadas por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés)³⁷. Las mutaciones características de los años 60 y luego los cuestionamientos del neoliberalismo inician circulaciones transnacionales similares, con sendas expresiones: las manifestaciones de los sedicentes «nuevos movimientos sociales», las manifestaciones altermundistas³⁸ o, más recientemente y aunque a menor escala, las manifestaciones antibélicas³⁹ y los movimientos de los indignados. En cada una de estas circunstancias, se efectúan transferencias de léxico que perturban los vocabularios nacionales. La frecuente utilización del término «marcha» en lugar de «manifestación» en la Francia contemporánea o la reciente afirmación del vocablo «indignados» son elocuentes acerca de las actuales circulaciones de significados. ▣

36. Refiere al hecho en el cual nueve jóvenes negros fueron acusados falsamente de violar a dos mujeres blancas en un tren. La injusticia de ese proceso sirvió como una de las inspiraciones para la novela *Matar a un ruiseñor*, de Harper Lee [N. del E.].

37. Marianne Debouzy: «Les marches de protestation aux États-Unis (xix^e-xx^e siècles)» en *Le Mouvement Social* Nº 202, 2003; M. Reiss (ed.): ob. cit.

38. Isabelle Sommier y O. Fillieule: «The Emergence and Development of the 'No Global' Movement in France: A Genealogical Approach» en Cristina Flescher Fominaya y Laurence Cox (eds.): *Understanding European Movements: New Social Movements, Global Justice Struggles, Anti Austerity Protest*, Routledge, Londres, 2013, pp. 47-60.

39. Stefaan Walgrave y Dieter Rucht: *Protest Politics: Demonstration Against the War on Iraq in the US and Western Europe*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2008.

Chile o el vértigo del futuro

Carolina Tohá

Chile vive un ciclo de protestas sin precedentes que desafía las interpretaciones sobre lo que entró en crisis. ¿El neoliberalismo? ¿El sistema político? ¿Un modelo desigualitario de sociedad? ¿Todo ello a la vez? El progresismo, que gobernó durante gran parte de la transición posdictadura, tiene su propio desafío en esta crisis: construir unidad, reflexión colectiva y alternativas. Pero aún está lejos de ello, en un año en el que se discutirá un cambio constitucional que parecía imposible poco tiempo atrás.

Nuestra crisis ¿qué tan nuestra es? En el debate del país, pareciera que es totalmente chilena. Circulan diversas hipótesis, hay discusión sobre ellas, pero todas hacen referencia fundamentalmente a dinámicas locales: primero, la desigualdad que Chile no ha logrado revertir; segundo, el empeoramiento de las expectativas económicas; tercero, la abismal fractura entre la esfera política y la sociedad. Las tres tienen abundante evidencia, por separado son ingredientes suficientemente poderosos como para traer inquietud y malestar, y combinados entre sí parecen un cóctel perfecto para una crisis, pero... ¿esta crisis? ¿Así, tan explosiva, definitiva, radical?

La crisis chilena tiene múltiples componentes locales, sin embargo, las mareas profundas que la mueven están totalmente conectadas con una tormenta mucho mayor, que con distintos síntomas está mostrando un problema de muchas democracias para dar respuesta a las

Carolina Tohá: es cientista política. Fue diputada (2002-2009), ministra secretaria general de Gobierno en el primer mandato de Michelle Bachelet (2009) y alcaldesa de Santiago (2012-2016).

Palabras claves: democracia, desigualdad, neoliberalismo, protestas, Chile.

insatisfacciones y los temores que el sistema de desarrollo del capitalismo global ha generado. La influencia de las concepciones neoliberales tiene un papel relevante en ese malestar, pero no es el único elemento. La crisis de las formas convencionales de representación política y social, incluyendo la decadencia de los partidos tradicionales; el cambio climático y los gigantescos dilemas que plantea; la polarización de los debates públicos de la mano de las redes sociales; la incertidumbre sobre el futuro laboral gatillada por los cambios tecnológicos; los procesos migratorios, con los temores que activan; la disolución de lazos tradicionales de identificación social y su reemplazo por una creciente fragmentación cultural y el frenazo de las expectativas económicas de largo plazo que afecta a parte importante del planeta, incluyendo a América Latina, son algunos de los factores adicionales que empujan los conflictos. Son tan profundos y variados los elementos que tensionan hoy el mundo que se puede decir que, más que tratarse solamente de una crisis del modelo neoliberal, esto es un cambio de era, una transición mayor que es difícil de dimensionar desde el centro de la tormenta en que estamos.

La forma en que todo esto se conjugó en Chile puede ser muy propia del contexto local, pero también es verdad que el país tiene una larga historia de trances políticos que han sido arquetípicos de procesos globales. No sería extraño que este también lo termine siendo, no solo en cuanto a crisis sino también como solución, cualquiera que esta sea.

Probablemente, cuando pase el tiempo y se estudie lo ocurrido en Chile surgirán dos líneas de análisis: una que observará las dinámicas profundas de la sociedad, que generaron una fragilidad tan alta en la legitimidad del orden social y una frustración tan marcada respecto a la posibilidad de modificarlo por las vías institucionales, que terminaron por allanar el terreno para que gran parte de la población estuviera dispuesta a poner todo en cuestión con tal de abrir la posibilidad de ciertos cambios. Y otra que analizará el manejo de la crisis y cómo se catalizó exponencialmente el malestar por las malas decisiones tomadas en el primer momento, y la forma confusa con que se intentó luego enmendarlas, lo que generó la sensación de que no había manera de que el actual grupo dirigente llevara por buen camino la solución del conflicto. Y nótese que «grupo dirigente» se refiere en este caso al gobierno en primer lugar, al presidente Sebastián Piñera en particular, pero también a la oposición y a otras entidades que podrían haber cumplido un papel en articular soluciones.

Al leer esto se podría pensar que Chile está rumbo a un despeñadero, pero los misterios de la vida han permitido que, en medio de los tropiezos de estas acaloradas semanas, la desorientada dirigencia política construyera una vía de salida sin siquiera dimensionar sus efectos. La derecha más aferrada a la Constitución del 80 estuvo dispuesta a renunciar a ella pensando que ese

solo gesto calmaría las calles y traería de vuelta la posibilidad de control. La centroizquierda, por su lado, imaginó que el reemplazo de la Constitución del 80 iba a ser percibida como un triunfo popular que traería al menos un paréntesis de reencantamiento con su conducción. Nada de eso ha ocurrido, pero sí se ha abierto un itinerario de mediano plazo que pondrá simultáneamente en juego la definición de nuevas reglas y el concurso por nuevos liderazgos. Tratándose de un proceso y no de un episodio, sus resultados dependerán de quienes sean capaces no ya de resolver el estallido social, sino de articular gradualmente una nueva forma de entendernos hacia adelante, algo que deberá ir construyéndose a tientos durante los próximos dos años o más. Y «quiénes» se refiere a qué personas, pero también a qué ideas y a qué formas de acción política.

La desigualdad, la economía, la política

La desigualdad chilena ha sido la causa más evidente, pero tiene muchas dimensiones

Los ingredientes que han alimentado esta crisis son, como decíamos, múltiples. La desigualdad chilena ha sido la causa más evidente, pero tiene muchas dimensiones y no todas pesan por igual. La que mide el índice de Gini no es la principal. Es un indicador que no da para estar orgullosos, pero que ha tendido a mejorar. Chile está en la medianía de Latinoamérica en este indicador, después de haber estado largos años en las peores posiciones. Hay estudios, como el realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)¹, que muestran que las desigualdades que más irritan a la sociedad chilena no son las brechas de ingreso sino cómo estas se traducen en diferencias de trato. Cómo, en el fondo, el tamaño del bolsillo influye en el mayor o menor respeto que se recibe de la sociedad. Otras visiones ponen el acento en la forma en que las diferencias económicas afectan el ejercicio de derechos sociales básicos como la salud o la educación, ámbitos donde es visible la herencia de las reformas impulsadas por la dictadura de Augusto Pinochet. Los sistemas de salud, educación y pensiones tienen un fuerte componente de mercado en Chile, que diferencia las prestaciones según la capacidad de pago, y los tres han generado un sector de empresas altamente lucrativas. Pese a que en todas estas áreas ha habido reformas importantes que han neutralizado algunos de sus rasgos más abusivos o excluyentes, su esencia permanece

1. PNUD: *Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile*, PNUD / Uqbar Editores, Santiago de Chile, 2017.

y nunca ha habido condiciones que permitan ponerla realmente en discusión. Hasta hoy.

La reducción de expectativas económicas es también un factor fundamental. Desde el retorno a la democracia, Chile se vio favorecido por las oportunidades que generó la apertura de su economía en pleno periodo de expansión de la globalización, a lo que siguió después el ciclo de altos precios de los *commodities*, que favoreció a gran parte de América Latina, incluido Chile. Terminadas ambas olas, lo que queda es una economía con proyecciones de crecimiento moderadas, mientras las expectativas de consumo de la población experimentan una inercia de 30 años que las empuja hacia arriba y la resaca del endeudamiento agobia la economía de los hogares.

El divorcio entre la política y la sociedad, o más bien, de las instituciones con la sociedad, lleva tiempo ahondándose. Comenzó como un aumento de la abstención desde fines de los años 90, siguió con la reducción de la adhesión de los partidos y luego con el aumento de la desconfianza. El golpe de gracia llegó con la sucesión de escándalos de corrupción y abuso que han alcanzado a prácticamente todas las instancias que detentan algún poder, público o privado: las empresas, la política, las iglesias, el fútbol, la policía, el ejército. Una bancarrota reputacional en toda la línea.

A pesar de que estos problemas son complejos para Chile, están lejos de ser una exclusividad del país. Chile no es más desigual que el promedio de la región, no tiene la economía más alicaída ni los peores índices de corrupción; sin embargo, es el país donde hay el mayor cuestionamiento y malestar con este estado de cosas. No se ha llegado a este punto solamente por el tamaño de los problemas sino, especialmente, por deficiencias en la forma de procesarlos desde la política. Sostenemos aquí que lo que sucede en Chile obedece a un colapso político más que a un cuestionamiento del modelo neoliberal o al agotamiento de la estrategia económica. Como resultado de la crisis, ciertamente se ha abierto una ventana para que Chile se desprenda de sus herencias neoliberales y reformule su modelo de desarrollo, pero lo que produjo la ruptura y colmó la paciencia de la gente fue la desesperanza en que el proceso político pudiese ser eficaz para procesar sus reclamos.

La política, la política, la política

Muchos han visto en la crisis chilena el acabose del modelo neoliberal. Se asume que Chile ha sido la Meca de esa ideología, transformada en modelo socioeconómico por la dictadura, preservado por décadas gracias a los candados que esta dejó en su Constitución y que las fuerzas políticas de otro signo no llegaron a abrir.

Lo que suele llamarse el «modelo chileno», y que muchos asimilan a la quintaesencia del modelo neoliberal, es una sopa que tiene más pelos que los que cuenta esa descripción. Lo que tiene de neoliberal el modelo chileno es innegable, pero digamos que esas ideas no escasean en otras partes, sino que han pasado a ser lengua franca en demasiadas latitudes, aunque en ninguna hayan alcanzado ni por cerca el nivel de penetración que llegaron a tener en el caso chileno. Es posible que el neoliberalismo que permaneció en Chile no hubiera flotado mucho tiempo si no hubiera sido porque las concepciones básicas de esa ideología solo ganaron terreno en el mundo entero al menos hasta la crisis económica mundial de 2008 y, después de eso, cuando empezaron a retroceder, no se logró levantar con éxito ninguna visión alternativa que las reemplazara sino, por el contrario, una cadena de decepciones, cuando no francas chambonadas.

En el fondo, la crisis del neoliberalismo cuyo emblema sería Chile no es solo el agotamiento de esas ideas sino, en gran parte, el efecto de la ausencia de otras con una capacidad equivalente para funcionar en las sociedades de hoy. Si las hubiera, probablemente el desarrollo de los sucesos iría por otro camino. Es la falta de esas ideas la que nos lleva hasta el estallido social chileno, pero también hasta Donald Trump, Jair Bolsonaro, el Brexit, Nicolás Maduro o frustraciones como la de Alexis Tsipras. La crítica al orden social no es lo mismo que la capacidad de levantar alternativas a él. En el amplio espectro de fuerzas políticas y sociales que se declaran inconformes con el sistema chileno, la amplitud de miras dura hasta que llega el momento de definir propuestas de reemplazo. En ese mismo instante reinan la dispersión de opiniones, las recriminaciones mutuas y las excusas para no ponerse de acuerdo. Nunca. Entonces, Chile será más neoliberal que otros, pero la fuerza de esa ideología y su resistencia pese a la decepción que ha producido no son algo solo chileno ni adjudicable exclusivamente a la porfiada herencia pinochetista, sino también a la falta de alternativas desde la vereda progresista.

Otro elemento que escapa a la descripción del modelo chileno como puro neoliberalismo es el conjunto de transformaciones que Chile ha tenido y que están en tensión con esa visión ideológica. Mal que mal, el país ha sido gobernado 24 de los últimos 30 años por gobiernos de centroizquierda, con un relato bastante disímil del neoliberal. Ese relato construyó una gramática de horizontalidad, de derechos, de igualdad, de no discriminación, de inclusión, que empujó a la sociedad en esa dirección hasta ponerla en conflicto con los elementos que obstaculizaban su camino. Y en ese proceso, la misma dirigencia política que lo encabezó ha ido quedando del lado de los obstáculos que hay que remover.

En Chile persisten desigualdades inaceptables, pero es una sociedad que se sacudió del conservadurismo que la caracterizaba, que se hizo consciente de sus derechos y que se tomó en serio la igualdad ante la ley. Ninguna de esas transformaciones sucedió espontáneamente, ni fue un efecto automático de los avances económicos, como a algunos les gusta argumentar. Fue el resultado de batallas políticas en las que esas concepciones fueron ganando terreno y transformándose en políticas públicas, instituciones y conquistas sociales. Pero llegó un punto en que Chile comenzó a tener un desajuste creciente con su promesa, con la imagen que se hizo de sí mismo, instalada en gran parte por el relato político progresista, pero también sustentada ampliamente por la sociedad. Esa promesa de Chile no era la pura oferta neoliberal. Esa oferta existía, pero mezclada con otros elementos en un híbrido muy particular. Ese híbrido, y no la pura herencia neoliberal, es el modelo chileno.

Cuando Chile relataba su éxito, no hablaba solamente de sus indicadores macroeconómicos, del crecimiento y las exportaciones. Hablaba de la reducción de la pobreza. De la expansión de la educación superior. De la cobertura escolar. De la esperanza de vida. De la mayor libertad. Del avance de las mujeres. Del fin de la censura. Del divorcio. Del reconocimiento de los diversos tipos de familia. Del combate contra la discriminación. De los avances en transparencia. Se hablaba del camino de los derechos garantizados y de la conformación de una red de protección social. Las bases neoliberales existían y se mantuvieron, pero se combinaron en el camino con una serie de otros elementos disonantes. La promesa de Chile era crecer con igualdad. Era la promesa de las políticas públicas graduales e incrementales.

El problema fue que ese camino se topó con un muro y nunca supo qué hacer con él. ¿Por qué esa trayectoria de avances pudo derrotar el conservadurismo que impedía el divorcio y toda forma de aborto y no fue capaz de cambiar el modelo previsional? ¿Por qué pudo implantar uno de los sistemas de transparencia pública más avanzados del mundo y no logró voltear los mecanismos de elusión tributaria de cuya existencia nadie duda? ¿Cómo se explica que Chile haya reformado más de 60 veces la Constitución eliminando enclaves autoritarios y nunca haya removido los quórum supramayoritarios que impiden a las mayorías funcionar como en cualquier democracia normal? ¿Cómo se entiende que se pudiera casi triplicar el porcentaje del PIB dedicado a salud y no se lograra terminar con la dualidad de un sistema para los ricos y sanos separado de uno distinto para el resto? Lo que ha hecho explotar a Chile es la incapacidad del sistema político de destrabar los debates que no tenían una salida

En Chile persisten desigualdades inaceptables, pero es una sociedad que se sacudió del conservadurismo que la caracterizaba

en el marco de la institucionalidad vigente. La derecha estiró demasiado el chicle de las ventajas que le daba el sistema. Hoy probablemente se arrepienta. Las fuerzas del centro y la izquierda, por su lado, nunca convocaron al electorado a dirimir ese conflicto, de hecho, nunca lo levantaron como un dilema central. Si lo hubieran hecho, probablemente hoy no tendrían sobre su cuello el aliento rabioso del movimiento social.

Lo que se viene abajo del modelo chileno no es solo su neoliberalismo, sino una forma de lidiar con él desde la política progresista. Todo lo que ese curioso experimento pudo dar lo dio con creces hasta producir una realidad para la cual ya no tuvo nada que ofrecer, una realidad que demandaba justamente lo que esa fórmula no podría entregar: tocar lo intocable, discutir lo que estaba fuera de la discusión.

Los nudos que la política no pudo desatar

Cuando llegó ese punto en que los debates de la sociedad no encontraban salida en el proceso político, quedaron en evidencia dos nudos que nadie pudo desatar.

Primer nudo: las instituciones contramayoritarias de la Constitución de 1980. Son varias: el sistema binominal de elección de diputados (que limitaba la representación), el Tribunal Constitucional y los súper quórum. La energía política se ha puesto siempre en el primero y el segundo, de hecho, el sistema binominal ya se eliminó, pero la madre del cordero es, en realidad, el tercero. En el sistema chileno hay una amplia batería de materias en las que solo se pueden hacer reformas si se reúnen quórum especiales, que van desde la mayoría absoluta hasta mayorías especiales de 4/7, 3/5 y 2/3. Muchos sistemas constitucionales tienen quórum especiales para algunas materias, particularmente para modificar la propia carta fundamental, pero no hay ninguna democracia sólida en el mundo que siquiera se acerque a los quórum establecidos en Chile. Esos quórum son casi imposibles de alcanzar sin el concurso de una parte relevante de la derecha y ello significa, en la práctica, que aunque haya mayorías persistentes en el tiempo que respalden ciertos cambios en áreas como, por ejemplo, la salud o la previsión, es imposible aprobarlos si no hay un acuerdo político transversal.

En ese marco de restricciones, la forma de avanzar fue a punta de acuerdos pragmáticos, que implicaban dejar de lado muchas cosas para poder avanzar en otras, y asumirlo así no fue incorrecto. Respetar la institucionalidad, tampoco. El error fue presentar como consensos lo que resultaba de ese juego de restricciones. Se acuñó la expresión «política de los consensos» y se

la vistió con lentejuelas como el mayor logro democrático, cuando era más bien una estrategia para sortear los obstáculos que ponía la Constitución al ejercicio de las mayorías. Esos obstáculos, que los conservadores juzgaron como un seguro contra las posturas más extremas, terminaron alentándolas. Al perder relevancia el juego democrático en que se disputan las mayorías fijando posiciones sobre los aspectos nucleares del país, lo que imperó fue una práctica política de complejas negociaciones insondables para la ciudadanía. Así, quienes estaban fuera de esa mesa tuvieron la cancha despejada para representar a todo el que quedaba descontento con el resultado final y ganaron terreno para propuestas radicalizadas o irrealizables.

Los gobiernos progresistas no tuvieron una estrategia de salida de esos candados que limitaban la decisión democrática. Muchos sectores se terminaron sintiendo cómodos con ese esquema de restricciones y languidecieron sus energías por cambiar las cosas. No es de sorprenderse después de tantos años en el poder. Pero el verdadero problema es qué hicimos los demás, los que pensábamos que era necesario mover esos límites. Cada vez que se manifestaron esas diferencias, la coalición de gobierno se tensionaba y se ponía bajo amenaza su unidad y estabilidad. Nunca hubo fuerza ni decisión suficiente para contrarrestar esos temores. En lugar de levantar una alternativa política que compitiera dentro de la coalición proponiendo un camino alternativo, esos sectores se fueron fragmentando, los liderazgos se fagocitaron unos a otros, y muchas veces se conformaron con masticar el descontento, cosechar de la frustración y alimentar así su cota de poder. La trampa de las supermayorías es, a la larga, mortal para la democracia. El circuito democrático que permite a los ciudadanos elegir-exigir-evaluar-elegir se interrumpe, lo que vuelve irrelevante la elección de los votantes. Y, de hecho, a la gente le resultó cada vez más irrelevante votar.

El segundo nudo es la desconexión de la esfera política con la sociedad que ha emergido tras 30 años de profundos cambios económicos, sociales y culturales. Hace largo tiempo comenzó a manifestarse el descontento con ciertas características del sistema imperante. Los chilenos están cansados de los prestadores de mercado en la salud, la educación y la previsión que no responden a sus aspiraciones, los abandonan cuando más apoyo necesitan y se enriquecen en el camino. En ese sentido, el tipo de soluciones que ofrece la derecha genera reticencia, pero tampoco convencen las propuestas de la izquierda, porque hay resistencia a reemplazar a los prestadores privados por sistemas solidarios que garanticen beneficios colectivos en lugar de contratos individuales. Cuando el gobierno de Michelle

Los gobiernos progresistas no tuvieron una estrategia de salida de esos candados que limitaban la decisión democrática

Bachelet restringió las prácticas de seleccionar alumnos o de cobrarles un copago en los colegios particulares que reciben subvenciones públicas, debió enfrentar una férrea oposición no solo de la derecha, sino también de grupos de centro y de una amplia gama de sectores medios, que le dieron la espalda a su agenda de reformas y se transformaron en sus mayores críticos. Actualmente, en medio del debate previsional, se ha sabido que la amplia mayoría de los cotizantes no está de acuerdo con dedicar sus ahorros a cuentas colectivas redistributivas, sino que prefiere dejarlos en su cuenta individual.

La sociedad que se ha volcado a las calles en estos meses tiene un reclamo de izquierda, pero se aleja de las soluciones que levanta ese sector. Es una sociedad exigente, no dispuesta a ser abusada, pero también individualista, reacia a entregar lo que siente como suyo a sistemas redistributivos. Critica los abusos del mercado, pero es entusiastamente consumista, reclama por derechos sociales pero los entiende como prerrogativas individuales y no como sistemas compartidos en los que todos cuidamos de los demás.

La política progresista no consiste solo en proponer soluciones, sino también en abordar los problemas de una forma que las haga posibles. Para la izquierda, es pan para hoy y hambre para mañana alentar los reclamos sociales sin explicitar que su solución pasa por formas más solidarias de organizar la sociedad, en que todos seremos apoyados cuando lo necesitemos, pero también tendremos que contribuir a sostener a los demás, no solo exigir lo que es nuestro sino aportar a lo que es común. Del mismo modo, es un espejismo interpretar el malestar ciudadano con discursos que reafirman nuestras consignas y nuestra identidad, sin hacer el menor esfuerzo por entender la identidad de esos sujetos que son los chilenos y las chilenas de hoy, cuya mentalidad, cultura, valores y prioridades son algo por descifrar. Construir un relato político democrático y progresista para el Chile actual es una tarea que está inconclusa, inexplorada.

Como resultado, así como algunos han dicho que el movimiento chileno es el primer levantamiento contra el neoliberalismo, otros creen que es la máxima expresión del neoliberalismo mismo. O puede terminar siendo ambas cosas. Lo cierto es que ha puesto en jaque una forma de resolver los problemas de la sociedad donde lo desafiado no son solamente los rasgos neoliberales del sistema, sino también la forma en que el progresismo critica sus defectos sin atreverse a levantar una alternativa real, acordada a lo menos dentro de las fronteras de su sector y con una parte relevante del movimiento social. La crisis de Chile es en gran medida la consecuencia de la fragmentación del campo no neoliberal, que fue capaz de entenderse por largos años para gobernar sin nunca llegar a una fórmula común sobre cómo reemplazar las instituciones heredadas de Pinochet.

«Formas de volver a casa»

Esta sección lleva como título el de un libro de Alejandro Zambra que trata sobre los caminos para regresar a la casa de la niñez después de que la vida nos lleva a lugares improbables, nos cambia y cuestiona nuestras identidades originales². Chile necesita encontrar un retorno a su casa, pero a una que no sea el mismo edificio que abandonó reclamando dignidad. Otra casa pero un mismo hogar, con cambios lo suficientemente ambiciosos para ponerlo en una ruta decidida de reversión de injusticias y desigualdades, pero que también rescate de la trayectoria recorrida hasta aquí lo que nos identifica como chilenos y chilenas, con luces, sombras, acuerdos y disputas.

La crisis que está viviendo Chile ha dado en llamarse «estallido social», pero está lejos de funcionar como algo que estalla y deja regadas por todos lados sus esquilas. Ha funcionado más bien como una muñeca rusa, una *matrioska* que va mostrando una a una sus capas. Comenzó como una revuelta contra el alza en el transporte público, a poco andar escaló a un cuestionamiento de todo el sistema social, con la consigna de la dignidad por delante. Cuando comenzaba a rutinizarse explotó la agenda feminista, que ya había anticipado en los años anteriores que las mujeres estaban llevando el debate político a otra cancha, una en la que lo público y lo privado se conectan como nunca antes, y las agendas de cambios estructurales tenían un efecto inmediato en las salas de clase, las oficinas, las sobremesas y las camas de millones de personas. En enero vino el turno de los escolares. En un mes en que nadie daría un peso porque un movimiento estudiantil pudiera mover ni siquiera a sus dirigentes, una coordinadora de secundarios logró echar abajo la aplicación de la prueba de selección universitaria, obligó a repetirla dos veces e impidió que se aplicara la evaluación de historia. En 2020 los universitarios chilenos serán seleccionados sin que sus conocimientos históricos cuenten en su calificación. Así las cosas, llegó el mes de febrero, cuando habitualmente todo muere y las noticias se limitan a describir la dulzura de los melones y los últimos avances en la cuantificación del daño solar. Pero no, este año las protestas siguieron. Fue el turno de las barras del fútbol. Los incidentes se agravaron, las amenazas de lado y lado subieron de tono y las teorías del terror comenzaron a escalar a niveles rocambolescos.

Ya hace varios años que los movimientos sociales chilenos vienen asumiendo características muy distintas de las tradicionales. Primero reemplazaron

**La crisis ha
funcionado más
bien como una
muñeca rusa que
va mostrando una
a una sus capas**

2. A. Zambra: *Formas de volver a casa*, Anagrama, Barcelona, 2011.

a los dirigentes por voceros, luego cambiaron los petitorios por manifiestos antisistema, después reemplazaron las organizaciones por asambleas hasta finalmente volverse del todo invisibles en el actual estallido social. No hay voceros, no hay organizaciones, no hay asambleas ni manifiestos que sean reconocibles como representantes del movimiento. Lejos de percibirlo como una desventaja, la mayoría lo considera una fortaleza: así nadie negociará por ellos y nadie los traicionará. Todo intento político de hablar en nombre del movimiento, todo indicio de que alguna organización política o social se pretende poner a la cabeza, es acallado de inmediato en medio de un repudio transversal. Ya nadie se atreve ni siquiera a intentarlo. En lugar de ello, florecen cabildos en los barrios, carteles con consignas redactadas en familia, pequeñas organizaciones que levantan causas diversas, nuevas figuras que participan del debate público refrescando las miradas y los temas, alcaldes y alcaldesas que se constituyen en referentes nacionales en lugar de los políticos tradicionales y temas eternamente ignorados como la segregación urbana, los pueblos indígenas y las violencias cotidianas se toman la agenda. Es, realmente, otro Chile.

La institucionalidad política del país no podría estar en un peor momento para enfrentar este desafío. Su respuesta también ha sido una *matrioska*, que capa tras capa muestra el jaque en que se encuentra. Las fuerzas policiales han incurrido en graves violaciones a los derechos humanos acreditadas a estas alturas por numerosos organismos internacionales y nacionales. El gobierno no ha demostrado ni la determinación ni la capacidad necesarias para impedirlo y se ha embarcado en un despliegue represivo que combina brutalidad con inutilidad: no ha servido para restituir el orden público y, por el contrario, ha generado más violencia y destrucción. El mundo político tuvo el acierto de lograr el acuerdo constitucional, pero luego de ello ha cometido error tras error. La oposición está fragmentada en ocho referentes que se disputarán los escasos minutos de campaña televisiva para instalar el mensaje a favor del cambio constitucional. Las recriminaciones mutuas, los mensajes confusos y el exceso de confianza pueden transformarse en un autogol de magnitudes bíblicas. La derecha, por su parte, también se ha enredado. Algunos de sus sectores que partieron apoyando el proceso constitucional han retrocedido y se han atrincherado en el temor a los cambios y las campañas del terror. Otra parte del oficialismo se ha plegado a la propuesta de dictar una nueva Constitución, y quizás ese sector sea, hasta ahora, el que ha tenido una reacción más interesante, intentando sintonizar con una sociedad que quiere cambios y espera que los dirigentes contribuyan a hacerlos posibles, no a entramparlos.

Históricamente, en Chile y en todo el mundo, el avance social se da por una combinación de movilización social, triunfos democráticos y capacidad

de articular respuestas de política pública que median entre la demanda social y la capacidad de solución del Estado, que es siempre limitada. Pero en Chile ese circuito está destrozado. Esa mediación es objeto de la mayor desconfianza. Todo ejercicio de autoridad y de pragmatismo se confunde con opresión ilegítima o engaño. Todo diálogo es una renuncia, todo compromiso es una traición, todo acuerdo es una derrota.

En el fondo, todos saben que no existe otra solución que un fuerte recambio dirigencial, a nivel político y social, y una regeneración del tejido institucional bajo el marco de una nueva Constitución que refleje un verdadero pacto social. Pero ese paso estará necesariamente mediado por la política existente. De lo contrario, se tendría que hacer por una vía insurreccional que produjera el colapso del sistema político. Si ese colapso llegara a suceder, lo que tendremos es lo que han tenido todos los procesos que recorren ese camino: reducción del campo democrático, espacio para aventuras autoritarias y altos riesgos de contrarreforma.

Entonces, el gran dilema de este momento es cómo esta política debilitada, de baja reputación y adhesión, puede conducir esta transición. Por más frágil que sea, esa política tiene a su favor un mandato democrático y la legitimidad institucional que no tiene nadie más. Es una tarea difícil, pero ineludible. Fallar en ella tendría consecuencias profundas, y las pagarían los chilenos y chilenas de hoy y de mañana. Simplemente no hay derecho a fallar. El reto de la política chilena es gigantesco y puede parecer abrumador. Ante ello, es necesario concentrarse en lo esencial. Aquí, cuatro tareas:

a) Si no se alcanza como punto de partida un acuerdo para un marco de reformas sociales fundamentales, todo el proceso constituyente estará asediado por la desconfianza y por la presión para resolver esas materias que debieran ser objeto de una sede diferente. Estamos hablando, a lo menos, de reformas en materias como previsión, salud y policías, incluyendo un pacto de justicia fiscal que las habilite.

La reforma previsional ya se está discutiendo, y hay espacio para avances impensados solo unos meses atrás. En salud hay piso para impulsar un seguro universal que supere la actual dualidad de un sistema separado para ricos y otro para los demás. Respecto a las policías, el lamentable despliegue de violencia e ineficacia del que han hecho gala durante el estallido social obliga a una reforma profunda y al establecimiento de un verdadero control civil como no lo ha habido desde la recuperación de la democracia. Un pacto fiscal de largo plazo, que eleve la recaudación y la progresividad, es otro componente indispensable del pacto social que se necesita. Ya casi nadie en Chile niega que la función del Estado en la garantía de los derechos sociales básicos debe

**La reforma
previsional ya se
está discutiendo, y
hay espacio para
avances impensados**

fortalecerse y hacerse de tal manera que su financiamiento se provea a través de un sistema tributario que contribuya a reducir las desigualdades no solo en la forma de gastar sino también en la manera de recaudar.

Hasta ahora, la oposición no ha mostrado una propuesta clara y conjunta en estas materias. Si lo hiciera, podría agrupar a sectores ciudadanos muy diversos que hoy están dispersos, y generar una línea común para debatir con el gobierno. Nunca como ahora los sectores de derecha habían estado tan abiertos a avanzar en reformas de este tipo, sea por necesidad o por convicción. El espacio que se ha abierto no se puede dilapidar, y aprovecharlo requiere de unos niveles de articulación y pragmatismo que han brillado por su ausencia. Aún hay tiempo. Para que 2020 sea el año en que arranque con éxito el proceso constitucional, deberá ser también el año en que se cristalice un amplio pacto social.

b) Así como decíamos que la política es fundamental para lo que viene, también es necesario admitir que, en la forma en que la hemos conocido hasta ahora, no alcanzará. Sus estilos tradicionales han quedado hace mucho tiempo en entredicho, y tampoco han funcionado los intentos que han levantado los nuevos referentes. La actual crisis chilena está abriendo muchos debates constitucionales y de políticas públicas; la pieza que falta es que se transforme también en un laboratorio de innovación para la acción política. Quizás ese sea su desafío más importante. Parece evidente que al menos una parte de las innovaciones que se requieren pasan por involucrar sistemáticamente a la sociedad en el ciclo de la toma de decisiones, pero no adulando a los ciudadanos ni entregándoles respuestas complacientes, sino haciéndolos parte de los dilemas y corresponsables de las definiciones.

Hacerlo seriamente es algo muy distinto que el discurso habitual de la participación ciudadana. Es un espejismo pensar que la crisis política que vemos hoy en Chile y en muchos otros países está ocasionada por diferencias entre el mundo político y la sociedad, cuando en realidad es una manifestación de conflictos en el interior de la sociedad misma que la política está siendo incapaz de procesar y resolver. En consecuencia, la idea de un mundo político que escuche más, que sea más empático y cercano, suena bien pero se queda corta. Es la sociedad toda la que debe escucharse más a sí misma, deliberar de otras maneras, sincerar sus tensiones, ponerles rostro a las partes en conflicto y asumir las limitaciones de las decisiones disponibles, sus costos y consecuencias. Una política dispuesta a jugar en esa cancha necesita reprogramar sus lenguajes y sus prácticas, partiendo de socializar transparentemente los dilemas que cada decisión abre y no solo las bondades que se les asignan a las soluciones que se proponen. Y ello únicamente podrá hacerse con éxito reivindicando el rol de la política, no renunciando a él.

La épica de la democracia es, antes que nada, la convicción de que hay un valor en el contraste de opiniones. Se basa en una épica de respeto a las

diferencias, y de duda y cuestionamiento de las opiniones propias. Es lo contrario de la moralización de la política. Cuando la crisis de confianza es respondida con un festival de sermones, no hace más que ahondarse. Hasta ahora la política chilena ha errado el tiro en su intento de reducir la brecha de los ciudadanos con ella. Lo que se necesita para el mundo de hoy no son autoridades que actúen como ciudadanos de a pie, sino ciudadanos que se asuman como autoridad y se hagan corresponsables de las decisiones. La política que servirá será la que pavimente el camino para que surjan instituciones y prácticas que permitan un ejercicio ciudadano enérgico, maduro e informado. Quizás el tiempo no alcanzará para que la nueva Constitución cristalice instituciones de ese tenor, pero ya sería un gran avance que no las obstaculice y habilite un proceso de ensayo y error que permita avanzar hacia allá.

c) Una de las consecuencias más evidentes de la crisis chilena es la reaparición de la violencia como un tema protagónico de la política. Se ha abierto un gran debate en torno del papel de la violencia en los conflictos sociales, su legitimidad o ilegitimidad, su origen y sus distintas manifestaciones, las formas de prevenirla o combatirla, pero mientras se discute, la frontera se ha corrido de forma radical. A pesar de que todos los estudios de opinión muestran que la mayoría de las personas no aprueban el uso de formas violentas de protesta, los porfiados hechos indican que tampoco hay un rechazo tajante de esos modos de movilización. En la práctica, los amplios sectores que se han movilizado y los aún más extensos que han respaldado el movimiento no han aislado las conductas violentas, y su distancia con estas está acompañada de discursos que las justifican y, en muchos casos, las glorifican. Transversalmente, el argumento más escuchado es que hay que rechazar la violencia, pero que también hay que admitir que, sin ella, nada hubiera cambiado, y todo el espacio que se ha abierto a reformas más profundas no existiría.

El debate sobre la violencia tiene varias dimensiones. De una parte, nadie debiera sorprenderse demasiado porque la historia nos ha enseñado que la sociedad chilena, así como es apegada al orden y las instituciones, tiende a ser extremadamente violenta cuando se interrumpe su normalidad. Por otro lado, la violencia de las protestas tiene parte importante de su explicación en la brutalidad e incompetencia policial, y el día en que se logre solucionar esa parte del problema, aquella tenderá a declinar. Así también, hay una dimensión de la violencia originada en la frustración que produjeron el entrapamiento del sistema político y la excesiva demora en desatar los nudos institucionales que lo provocaban. Por último, el clima de agresividad y destrucción que ha rodeado a una parte de las manifestaciones puede ser

**Lo que sucede
en Chile obedece
a un colapso político
más que a un
cuestionamiento del
modelo neoliberal**

disruptivo para muchos chilenos, pero es pan de cada día para muchos otros que viven en zonas periféricas de las ciudades, en barrios tomados por el narcotráfico y alejados de las prioridades del Estado.

Todos estos temas serán parte de los debates urgentes que la sociedad chilena tendrá que abordar en los próximos meses. Hay uno, sin embargo, que no puede esperar. Un país como Chile, fuertemente dañado por el trauma de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos, no puede permitirse que la democracia quede bajo sospecha de ser incapaz de respetarlos, protegerlos y sancionar severamente los actos que los vulneran evitando toda impunidad. Tampoco es tolerable que el Estado se reconozca incompetente para garantizar el orden público. Y menos aún que se acepte que es necesaria la violencia, y no el debate democrático, para que se produzcan los cambios que el país necesita. Hoy todas estas cuestiones están en duda. Si esas fronteras se diluyen, la democracia chilena tendrá un daño permanente que ni siquiera una nueva constitución podrá sanar.

Hay muchas dimensiones en la tarea de detener la violencia, pero ninguna es más fundamental que construir la confianza en que la democracia es la única manera de canalizar nuestros debates, de garantizar los derechos humanos y de proteger el orden público sin vulnerarlos.

d) Para terminar, el proceso constituyente que el país ha iniciado puede ser una excusa perfecta para alentar temores e incertidumbres y levantar fantasmas. Ya varios han decidido que esa será su estrategia. Lo que está por verse es qué mensaje levantarán los que ven en ese proceso una oportunidad. Ninguna de las constituciones que Chile ha tenido ha sido redactada mediante un proceso democrático y participativo. Todas han sido el resultado de la voluntad de los vencedores y la marginación de los vencidos. Todas han sido definidas prácticamente entre puros hombres blancos pertenecientes a un reducido grupo social. Ninguna generación de chilenos había tenido la posibilidad que tenemos hoy de cambiar esa historia y tener una constitución elaborada democráticamente, por la diversidad de la sociedad chilena, asegurando representación paritaria de las mujeres y garantizando cuotas de participación a los pueblos indígenas. No se entiende que ante una oportunidad histórica de esta magnitud no se levante un mensaje político de esperanza y unidad. Los sectores políticos que debieran estar abocados a construir esa confianza, a congregar esa voluntad, están dispersos y mayoritariamente focalizados en pequeñas disputas. Al final de este proceso, muchos de los referentes que hoy existen no existirán más, muchos de los líderes habrán sido reemplazados, y muchas de sus peleas, olvidadas en el laberinto de los tiempos. Solo quedará en la memoria que algunos apostaron a abrirle paso al futuro mientras otros se repartían los escombros del mundo que quedaba atrás. ▣

El tsunami feminista

Nuria Varela

¿En qué consiste la cuarta ola de feminismo? ¿Cómo pudo expandirse al conjunto del planeta? Multicultural, pensado para el «99%», definido por la tecnología, con puentes con el ecologismo y, no menos importante, intergeneracional, el feminismo 4.0 está erosionando los cimientos del patriarcado y politizando a nuevas generaciones sin perder los vínculos con las antiguas. Y, sobre todo, está en el corazón de diversos tipos de revueltas políticas, sociales y culturales que atraviesan el mundo actual.

*A las niñas, a las adolescentes, a las mujeres jóvenes,
a las que sin duda verán la caída del patriarcado.*

El feminismo es polifónico, el sonido de sus múltiples voces se escucha, simultáneamente, en todos los rincones del mundo, en distintos tonos y registros. Una melodía con distintas letras, pero con la misma música, la de un proyecto colectivo y emancipador al que nada humano le es ajeno.

El tsunami es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de

Nuria Varela: es periodista y doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. En la actualidad es directora general de Igualdad en el gobierno del Principado de Asturias (España). Entre sus libros publicados destacan *Feminismo para principiantes* (B de Bolsillo, Barcelona, 2018); *Íbamos a ser reinas. Mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las mujeres* (Ediciones B, Barcelona, 2017) y *Cansadas. Una reacción feminista frente a la nueva misoginia* (Ediciones B, Ciudad de México, 2017).

Palabras claves: 99%, cuarta ola, ecofeminismo, feminismo, interseccionalidad.

Nota: este artículo es un fragmento de *Feminismo 4.0. La cuarta ola* (Ediciones B, Barcelona, 2019).

agua. Así, como un tsunami, ha aparecido el feminismo en las primeras décadas del siglo XXI. El *fenómeno extraordinario* es el hartazgo de millones de mujeres en el mundo que han reaccionado de manera impresionante frente a la violencia, la opresión y la discriminación. Dice la geofísica que este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales producidas por el viento y las mareas. Así, la cuarta ola del feminismo, alimentada por las tres anteriores, las redes sociales y la toma de conciencia de las generaciones más jóvenes, está removiendo los cimientos patriarcales como nunca antes. En el interior de ese gran *evento complejo* también crecen las contradicciones y los discursos que, mezclados con los vientos de la posmodernidad, plantean nuevos conceptos, nuevas preguntas, nuevos reclamos.

¿Conseguiré el tsunami feminista de la cuarta ola arrasar definitivamente con el patriarcado? Feministas del Norte y del Sur están dispuestas a que así sea tras haber conseguido un movimiento global con el que hace ya 300 años comenzaron a soñar.

La metáfora del tsunami no es casual. La historia del feminismo se estructura en olas quizá porque el concepto indica, mucho mejor que un periodo o una época, que se trata de un movimiento social y político de largo recorrido, conformado por distintos acontecimientos, buena parte de ellos vividos de manera simultánea en distintos lugares del mundo, y que tiene su desarrollo según la sociedad en que nos situemos. Relatar su historia a partir de oleadas que se producen en determinados contextos históricos describe el feminismo a la perfección, como el movimiento arrollador por la fuerza desatada en torno de la idea de igualdad. La metáfora también

**Hasta la irrupción
del feminismo
radical, la historia del
feminismo es como
un río al que cada
vez le van llegando
más afluentes**

es adecuada para explicar las reacciones patriarcales que surgen ante cada progreso feminista. Cada vez que las mujeres avanzamos, una potente reacción patriarcal se afana en parar o en hacer retroceder esas conquistas.

Hasta la irrupción del feminismo radical, la historia del feminismo es como un río al que cada vez le van llegando más afluentes. El limitado caudal teórico y de experiencia política con que nació, en el corazón de la Ilustración francesa, fue aumentando con el torrente que aportaron las sufragistas y, tras ellas, el feminismo de clase, todas las riadas del resto de las familias que iban entrando en discusiones —más o menos acaloradas— con las teorías políticas que aparecían sucesivamente: liberalismo, marxismo, socialismo, anarquismo. A ese gran río, cada vez mayor, también iban llegando afluentes de distintas partes del mundo que hacían suyas las teorías y reivindicaciones asentadas en las realidades de los distintos territorios.

El caudal aumentó tanto que el cauce se quedó pequeño; aun así, durante un tiempo llegó a ser navegable y amplio hasta quedar estancado en un gran embalse, con tantos diques y presas que le fueron construyendo. El feminismo radical abrió las compuertas y las aguas se desbordaron. Como en una catarata, uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza, el agua cayó verticalmente a causa de la gravedad, y esa caída, con tamaño caudal, generó un gran potencial de energía.

En 2000, la escritora y activista bell hooks escribía:

La política feminista está perdiendo fuerza porque el movimiento feminista ha perdido definiciones claras. Tenemos esas definiciones. Reivindiquémoslas. Compartámoslas. Volvamos a empezar. Hagamos camisetas y pegatinas, postales y música hip-hop, anuncios para la televisión y la radio, carteles y publicidad en todas partes, y cualquier tipo de material impreso que hable al mundo sobre feminismo. Podemos compartir el mensaje sencillo pero potente de que el feminismo es un movimiento para acabar con la opresión sexista. Empecemos por ahí. Dejemos que el movimiento vuelva a empezar.¹

Y añadía: «necesitamos desesperadamente un movimiento feminista masivo radical, construido a partir de la fuerza del pasado».

Lo necesitábamos desesperadamente, en efecto, y lo hicimos. En 1996, Zillah Eisenstein escribía en *Hatreds: Racialized and Sexualized Conflicts in the 21st Century* [Odios. Conflictos por raza y sexo en el siglo XXI]:

El feminismo, o los feminismos, como movimiento transnacional –entendido como rechazo de las falsas fronteras de género o raza y las falsas construcciones del «otro»– es un importante desafío al nacionalismo masculinista, a las distorsiones del comunismo de Estado y a la globalización de «libre» mercado. Es un feminismo que reconoce la diversidad, la libertad y la igualdad, que se define a través y más allá del diálogo entre el Norte/Occidente y el Sur/Oriente.²

Y bell hooks lo subraya:

Las participantes del movimiento feminista afrontaron la crítica y los desafíos sin perder su compromiso más sincero con la justicia o la liberación,

1. b. hooks: *El feminismo es para todo el mundo*, Traficantes de Sueños, Madrid, 2017, pp. 26-27.

2. Z. Eisenstein: *Hatreds: Racialized and Sexualized Conflicts in the 21st Century* [1996], Routledge, Nueva York, 2014, p. 166.

y este hecho demuestra la fortaleza y el poder del movimiento. Esto nos muestra que, a pesar de haber estado profundamente equivocadas, en muchas feministas fue más fuerte la voluntad de cambiar, la voluntad de crear un espacio que hiciera posible la lucha y la liberación, que la necesidad de aferrarse a creencias y suposiciones erróneas.³

El feminismo de las plazas

Con todo ese bagaje, a partir de 2010, las calles y las plazas comenzaron a llenarse y las mujeres estaban allí, las feministas estaban allí. El feminismo estaba en el corazón de todas las protestas, capacitado y dispuesto a luchar, como siempre había hecho, pero esta vez éramos muchas más y, como había anunciado bell hooks, estábamos preparadas.

La década comenzó con las protestas en Grecia. El 5 de mayo de 2010, una huelga general seguida de numerosas y multitudinarias manifestaciones dio el pistoletazo de salida frente a las políticas de austeridad. Las feministas estaban allí. Tres años después de las primeras revueltas, ya habían creado Casas de Mujeres Autogestionadas. La primera, la de Tesalónica, la siguiente, en Atenas. La consigna: «¡Ninguna sola durante la crisis!». La firme determinación de las mujeres griegas fue la de ayudarse en casos de violencia de género, frente a las disparadas deudas o frente a la dictadura de la austeridad. Juntas, presionaron a las compañías eléctricas para que les devolvieran la luz... en realidad, se implicaron en todos los combates prestando especial atención a la inmigración, a los miles de personas, inmigrantes, refugiadas que entraron en Europa por mar a través de Grecia.

Ese mismo año se desencadenaba la Primavera Árabe. La plaza Tahrir de El Cairo fue el lugar simbólico de las revueltas. Las feministas estaban allí. El patriarcado, también. Fueron numerosas las violaciones a mujeres en la misma plaza, con la complicidad de los concentrados, que no hicieron nada para impedirlo. A las jóvenes que eran detenidas se les hacía la prueba de virginidad, acusadas de putas. A finales de año tuvo lugar el incidente de «la chica del sujetador azul». Agentes de seguridad la golpean, la desnudan y arrastran en Tahrir mostrando su sujetador azul. Pero... las feministas estaban allí. Tres días después, multitudinarias manifestaciones de mujeres se celebraban en todo el país como muestra de rechazo al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas Egipcias.

Al año siguiente, en 2011, tienen lugar enormes movilizaciones estudiantiles en América Latina, especialmente en Chile, donde jóvenes de secundaria

3. b. hooks: ob. cit., p. 84.

y estudiantes de universidad protagonizan las movilizaciones más importantes en el país desde el retorno a la democracia. También, en México, las y los estudiantes salen a las calles organizados en el Movimiento #Yosoy123, reclamando, especialmente, libertad de expresión. El movimiento fue autoproclamado en sus inicios como la «primavera mexicana». De igual manera, Colombia vivió su movilización estudiantil en 2011 en la que participaron también docentes y personal de las universidades y que se extendió prácticamente por todo el país. Las feministas estaban allí, en Chile, en México, en Colombia, algunas actuando como portavoces, todas muy jóvenes.

Ese mismo año, el 15-M acampaba en la madrileña Puerta del Sol y la indignación se extendía por toda España. Pocos meses después, el 17 de septiembre, unas 1.000 personas acudían a la llamada para ocupar Wall Street bajo la consigna de «rebelarse contra el sistema de tiranía económica de forma no violenta». El movimiento Occupy Wall Street se consolidó en más de un millar de ciudades en Estados Unidos en las que se habían organizado acampadas o manifestaciones. Las ocupaciones más multitudinarias fueron las de Nueva York, Los Ángeles y Oakland. El movimiento se había fraguado en las redes sociales y su modelo de organización estaba inspirado en las experiencias de Egipto y España.

Además, con Occupy Wall Street se teoriza el feminismo de las plazas. Las feministas Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser escriben, una vez acabadas las acampadas, el *Manifiesto de un feminismo para el 99%*. Un manifiesto que dedican «al colectivo [feminista negro] Combahee River, que imaginó el camino en etapas tempranas, y para las luchadoras feministas polacas y argentinas, que abren hoy otros nuevos», haciendo genealogía *sin personajes secundarios*.

El feminismo del 99% recoge su nombre de la consigna del movimiento Occupy Wall Street, se inspira en las huelgas feministas que a partir de 2017 se comienzan a organizar en medio mundo, cuestiona duramente al denominado «feminismo liberal» y enfoca sus críticas en el neoliberalismo, como la mayor parte del feminismo de la cuarta ola. Para el 99% es necesario hacer hincapié en problemas estructurales: feminización de la pobreza y precariedad de las mujeres, violencia de género, racismo... porque en realidad, el 99% es una llamada de atención a la colonización del neoliberalismo que ha conseguido diseminar su filosofía por todos los rincones. Es el feminismo que toma como referencia la situación vital, las demandas, las necesidades de la inmensa mayoría de las mujeres.

El feminismo durante esta década está en las plazas y, al mismo tiempo, va desarrollando sus propias campañas y movilizaciones. Así, en 2011, en

El feminismo del 99% recoge su nombre de la consigna del movimiento Occupy Wall Street

febrero, las italianas se movilizaban masivamente al grito de «Se non ora quando?» [¿Si no es ahora, cuándo?]. Mujeres que luchaban por su reconocimiento y su dignidad, y contra su cosificación como objetos de intercambio sexual.

Las mujeres indias llevan ya años manifestándose y realizando campañas contra la violación

Las mujeres indias llevan ya años manifestándose y realizando campañas contra la violación, poniendo nombre a la violencia sexual, movilizándose por todo el país, pero el punto de inflexión ocurrió en diciembre de 2012, cuando se produjo la violación en grupo, en un autobús en marcha en Nueva Delhi, de una joven estudiante que moriría días después por las heridas sufridas. Este hecho desencadenó una ola de manifestaciones de indignación que llevarían a endurecer las penas contra los violadores y a triplicar el número de denuncias por violación en la capital en los años siguientes.

En julio de 2014, el viceprimer ministro turco, Bülent Arınç, declaraba: «Una mujer debe ser decente. Debe conocer la diferencia entre público y privado. No debe reírse en público». La reacción fue inmediata. Las declaraciones fueron la última gota de un sistema represor contra las mujeres hasta el espanto. La campaña contra la violencia de género en Turquía, que ya llevaba tiempo desarrollándose, estalló tanto en las calles como en las redes sociales. Cientos de personas se manifestaron en el centro de Estambul y las redes se llenaron con el *hashtag* #direnkakhaha, la risa de la resistencia y #direnkadin, mujeres que resisten.

«Desde Tijuana hasta Ushuaia, exigimos aborto legal ya» fue una de las consignas más coreadas el 28 de septiembre de 2018. Larga es la lucha en América Latina por los derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo. Fue en el v Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1990 en Argentina, donde organizaciones feministas de diez países denominaron la fecha como el Día por la Despenalización del Aborto. Una campaña que se ha extendido por el resto del mundo pero que en los últimos años llena las calles de una región donde 90% de las mujeres viven en países que restringen la interrupción del embarazo.

Desde Tijuana hasta Ushuaia, los pañuelos verdes tiñen las calles y las redes sociales. En una región donde hay mujeres condenadas hasta 30 años por aborto, las campañas exigen «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir».

Una lucha que también se está llevando en Polonia desde 2016. En 2018, el gobierno de Mateusz Morawiecki volvió a la carga pretendiendo eliminar el tercer supuesto, el referido a la malformación irreparable del feto, lo que ha llevado a muchas mujeres a volver a manifestarse en las llamadas *Czarny Protests*

o protestas negras, manifestaciones en las que visten de negro exigiendo que no se limiten sus derechos. Con cada protesta negra, las calles de Varsovia y otras ciudades polacas se tiñen intentando evitar una legislación que criminaliza a cientos de miles de mujeres cada año.

En junio de 2015, la otra gran lucha de las feministas en América Latina, la erradicación de los feminicidios, también se hacía visible en las movilizaciones convocadas en Argentina, donde las mujeres ocuparon 80 ciudades bajo el lema «Ni una menos». En 2016, la lucha se intensificaba con la consigna «Vivas nos queremos» y en 2017, la movilización se extendía por Chile, Uruguay, Perú y México, bajo la consigna «Basta de violencia machista y complicidad estatal». 2017 había comenzado con la Marcha de las Mujeres, convocada el 21 de enero, al día siguiente de la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, tras una campaña electoral que lo llevó a la Presidencia y estuvo plagada de insultos y vejaciones a las mujeres. La Marcha de las Mujeres fue la movilización más multitudinaria en EEUU desde la Guerra de Vietnam. Se convocó en Washington pero fue apoyada con 700 marchas hermanas en todo el mundo. Hoy se ha articulado alrededor de la Women's March Global y mueve una gran marea de reivindicaciones feministas. Y también ese año, octubre de 2017 fue testigo de la aparición del Me Too, popularizado en las redes como #MeToo, «A mí también».

Millones de mujeres movilizadas en todo el mundo. Las campañas mencionadas lo son solo a modo de ejemplo, podríamos llenar un libro entero refiriendo el trabajo que el feminismo ha protagonizado en los últimos años en todo el mundo. Baste recordar cómo se celebró el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo de 2018, cuando las movilizaciones recorrieron las calles de todo el planeta, incluyendo lugares como Mosul, donde alrededor de 300 mujeres corrieron por sus calles en la primera maratón celebrada en la ciudad iraquí; o Arabia Saudita, donde un grupo de mujeres también salió a correr por las calles de la capital —una de las actividades que hasta hacía pocos meses estaban prohibidas—; Turquía, donde las mujeres marcharon por la principal avenida de Estambul para acabar «con el patriarcado», bajo una fuerte vigilancia policial; e incluso Kabul, la capital afgana, donde se manifestaron centenares de mujeres.

Las mujeres pararon el mundo

Y es que el 8 de marzo de 2018 fue el momento de inflexión de esta cuarta ola. El feminismo había acumulado ya el suficiente bagaje teórico y político y la suficiente capacidad organizativa como para lanzar y resolver con éxito una movilización global que mostrara sus reivindicaciones y exigencias, así

como su fortaleza y determinación para conseguirlas. La movilización se concretó en la huelga feminista.

No era la primera ni mucho menos, pero sí la primera global. Los antecedentes más recientes se encontraban en Islandia, cuando el 24 de octubre de 1975 90% de las mujeres secundaron una huelga que duró todo el día. Las islandesas salieron a las calles y se manifestaron a favor de la igualdad. En octubre de 2016, más de 100.000 mujeres en Polonia organizaron paros en el trabajo, además de manifestaciones para reivindicar los derechos sexuales y reproductivos. A finales de ese mes, fueron las argentinas quienes hacían huelga tras el asesinato de Lucía Pérez, con el grito de «Ni una menos».

En 2017 se hizo el primer *ensayo general*, con el 1 Paro Internacional de Mujeres convocado el 8 de marzo. En más de 50 países se realizaron paros parciales bajo el lema «Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras». La respuesta de millones de mujeres a esta convocatoria fue el germen del 8 de marzo de 2018. Fraser apuntó que lo que comenzó como una serie de acciones en el ámbito nacional se convirtió en un movimiento transnacional el 8 de marzo de 2017, cuando organizadoras de todas partes del mundo decidieron atacar juntas. Con ese golpe audaz, dieron un nuevo sentido político al Día Internacional de la Mujer. Dejando atrás las fruslerías de mal gusto y despolitizadas, las huelguistas reivindicaron las prácticamente olvidadas raíces históricas de ese día en el feminismo socialista y la clase trabajadora. Sus actuaciones evocan el espíritu de la movilización de las mujeres de clase trabajadora de comienzos del siglo xx. Reencarnando ese espíritu militante, las huelgas feministas de hoy están proclamando nuestras raíces en las luchas históricas por los derechos de los trabajadores y la justicia social.

Uniendo a mujeres separadas por océanos, montañas y continentes, así como por fronteras, alambradas de púas y muros, dan un nuevo sentido al lema «La solidaridad es nuestra arma». Rompiendo el aislamiento de las paredes domésticas y simbólicas, las huelgas demuestran el enorme potencial político del poder de las mujeres: el poder de aquellas cuyo trabajo remunerado o no remunerado sostiene el mundo.

La indignación, el cansancio y el hartazgo, capital político

Desde Yemen hasta China, desde Reino Unido hasta Afganistán y EEUU, la cuarta ola está resonando en todo el mundo. No sabemos hasta dónde llegó la influencia de las palabras de bell hooks; probablemente, como siempre ha ocurrido, fueron el pensamiento y la acción de miles de mujeres en todo el mundo lo que ha provocado el tsunami actual. ¿Y por qué regresó el feminismo



cual tsunami, filtrándose en todos los rincones del mundo? Estas cosas nunca tienen una respuesta simple.

En primer lugar, asegura Rosa Cobo, la *macrorrevisión* que hizo el feminismo desde los años 80 del siglo xx ha sido determinante. La cuarta ola ha aparecido precisamente porque el feminismo ha asumido la diversidad de las mujeres y se ha asentado esta idea en su configuración ideológica, de manera que ya es posible desplazar el foco desde el interior del feminismo hasta fuera, hasta los fenómenos sociales patriarcales más opresivos. Sin este lento y aparentemente imperceptible desplazamiento, no hubiese sido posible esta cuarta ola.

Además, millones de mujeres en el mundo estaban tan cansadas como hartas. Cansadas de ceder. Hartas de que nos relegaran. La reacción patriarcal ha sido tan intensa desde los años 80 del siglo pasado y ha golpeado tan fuerte que toda la indignación, el profundo cansancio y el hartazgo de las mujeres se convirtieron en un gran capital político. Ante tanta reacción patriarcal, era inminente la aparición de la reacción feminista.

Cuando aún estábamos rehaciéndonos de esa potente reacción patriarcal y el feminismo se estaba poniendo en pie de nuevo, dos circunstancias se precipitaron. Por un lado, el neoliberalismo explotó en la gran crisis de 2008 y, por otro, el fascismo se lavó un poco la cara y resucitó en forma de partidos políticos o candidaturas presidenciales que aspiraban, de nuevo, a gobernar el mundo. Dentro de la reacción patriarcal, ocupa un lugar destacado la organización de los grupos *antielección*, los que se autodenominan *provida*, aunque su defensa de «la vida» solo consiste en su oposición a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; especialmente, son beligerantes y violentos en contra del aborto, pero no se les conoce ninguna defensa de esos fetos cuando nacen y se convierten en niñas o en mujeres. La vida la defienden solo mientras está en el vientre de las mujeres gestantes. A partir del nacimiento, se desentienden de los niños y niñas abusados, de las niñas violadas, de las mujeres maltratadas... Esta nueva Inquisición está formada básicamente por fundamentalistas religiosos y militantes conservadores, ultraconservadores y populistas.

Frente a todo esto, se levantó la cuarta ola feminista. En 1971, Angela Davis había escrito que el fascismo es un proceso y su desarrollo y ampliación son de naturaleza cancerígena, por ello hay que combatirlo desde sus inicios. Las feministas fueron las primeras.

El otro cáncer con que se encontró el feminismo en el siglo xxi fueron las políticas económicas neoliberales, que han traído consigo una nueva política sexual. Además de crear una nueva clase social, el precariado, claramente feminizada, la economía neoliberal ha convertido la sexualidad femenina y su capacidad de procrear en un gran negocio global con dos grandes industrias,

la industria del sexo y la de los vientres de alquiler. El nuevo discurso económico patriarcal convierte la vida en mercancía. El neoliberalismo intenta convencernos de que los deseos se pueden convertir en derechos si se tiene suficiente dinero para comprarlos y reduce la libertad a un mero intercambio; si puedes intercambiar algo (aunque sea tu cuerpo), estás usando tu libertad de elección (da igual en qué condiciones está ocurriendo ese intercambio).

El feminismo, señala Rosa Cobo, ha sabido identificar la política sexual del neoliberalismo de manera que ha desenmascarado la misoginia que alimenta su núcleo duro. La filosofía neoliberal de que todo se puede comprar y vender está golpeando la vida de las mujeres explotándolas económica y sexualmente (feminización de la pobreza, brecha salarial, trabajos precarios, economía sumergida, crecimiento exponencial de la trata y la prostitución, aparición de nuevos nichos de negocio, como la compraventa y alquiler de vientres...)⁴. Frente a ello, las feministas han vuelto a exigir políticas redistributivas y a colocar en primera línea del debate político la precarización de las vidas de las mujeres, así como la profunda crisis de cuidados en la que estamos inmersas.

Además de la revisión interior y de la reacción feminista frente a la reacción patriarcal, un tercer elemento explicaría el surgimiento de la cuarta ola. Hasta ahora, las olas anteriores han surgido al tiempo que sucedía una «crisis civilizatoria», por decirlo en palabras de Amelia Valcárcel, es decir, al tiempo que cambiaban los sistemas políticos y económicos mundiales.

La cuarta ola es coetánea de la sociedad de la información y de lo que ya se comienza a denominar cuarta Revolución Industrial. El concepto «sociedad de la información» comenzó a utilizarse en Japón durante los años 60, pero será el sociólogo Manuel Castells quien examine los caracteres del nuevo paradigma para acuñar, no ya esta noción, sino la de «era informacional», con internet como fundamento principal de este nuevo modo de organización social en esferas tan dispares como las relaciones interpersonales, las formas laborales o los modos de construir la identidad propia. Según Castells, la sociedad de la información es aquella en la que las tecnologías facilitan la creación, distribución y manipulación de la información y juegan un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas⁵.

Explica Klaus Schwab, el fundador y director general del Foro Económico Mundial, que la cuarta Revolución Industrial sería aquella que está cambiando la

La cuarta ola es coetánea de la sociedad de la información y de lo que ya se comienza a denominar cuarta Revolución Industrial

4. R. Cobo Bedia: *La prostitución en el corazón del capitalismo*, Catarata, Madrid, 2017.

5. M. Castells: *La era de la información*, 3 vols., Siglo Veintiuno, Ciudad de México, 2001-2002.

forma de vivir, trabajar y relacionarnos, y se basa en el exponencial y vertiginoso desarrollo tecnológico desde campos como la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, la computación cuántica...⁶ Una revolución que no solo está cambiando el qué y el cómo hacer las cosas, sino hasta quiénes somos. Sin duda, como veremos a continuación, la cuarta ola feminista está definida por la tecnología.

Una cuarta ola que está caracterizada por un despertar, una toma de conciencia mayoritaria y una lucha global contra la verdadera raíz de la opresión de las mujeres, pero ¿cuáles serían sus principales rasgos? En primer lugar, el feminismo, actualmente, y por tercera vez en su historia, se ha convertido en un movimiento de masas. Antes lo había sido con el sufragismo (por primera vez) y más tarde también lo consiguió el feminismo radical, pero en este caso, esta cuarta ola presenta una novedad: el feminismo, por fin, es global. No hay país en el mundo en el que no haya –de una manera u otra– feminismo.

Virginia Guzmán y Claudia Bonan describen cómo ese movimiento de masas se va construyendo a partir de los años 90 del siglo xx, al tiempo que va profundizando en su rol como fuerza modernizadora y civilizadora. A partir de los años 90, los movimientos feministas se han expandido aceleradamente por diversas regiones geográficas y han adoptado distintas expresiones. Sus formas de organización se han vuelto más complejas, su composición, más heterogénea, y el rango de sus acciones y agendas, más amplio⁷.

La presencia de las mujeres en los ámbitos transnacionales las ha llevado a constituirse en protagonistas visibles de las relaciones internacionales y en participantes activas, junto con otros movimientos –de derechos humanos, ambientalistas, minorías sexuales, negros, indígenas– en los procesos de formulación de las leyes, marcos normativos y agendas políticas internacionales. La constitución de redes ha conectado a distintos grupos feministas a través del mundo y ha permitido la circulación de ideas, recursos y formas de comportamiento solidario. Su presencia en los espacios transnacionales ha tenido la doble virtud de visibilizar internacionalmente su protagonismo y sus propuestas y, al mismo tiempo, irradiar hacia sus sociedades el reconocimiento obtenido en estos espacios globales, y de esta manera, presionar sobre los límites culturales y políticos que las sociedades nacionales imponen al desarrollo de las agendas políticas de los movimientos sociales.

En conclusión, la experiencia política del movimiento feminista en los últimos años ha fomentado el desarrollo de un fuerte sentimiento de pertenencia a una lucha emancipatoria de carácter global. Este proceso ha permitido acceder y contribuir a una creciente conciencia sobre la diversidad

6. K. Schwab: *La cuarta revolución industrial*, Debate, Madrid, 2016.

7. V. Guzmán y C. Bonan: «Feminismo y modernidad» en *Debate Feminista* N° 35, 2007.

de formas de luchas, el multiculturalismo, las diferentes interpretaciones que suscitan las desigualdades, exclusiones y discriminaciones y sus formas de superación.

Las agendas feministas contemporáneas son agendas múltiples y pactadas entre un gran espectro de sujetos políticos, donde se articula un conjunto complejo de temáticas concernientes a la transformación global de las formas de vida en sociedad, bajo los ideales de emancipación, justicia social, libertad y no discriminación: la economía, el comercio y el presupuesto público; las formas de producción y consumo; las transformaciones en el mundo del trabajo; el desarrollo científico y tecnológico; la bioética y la bioseguridad; las migraciones internacionales; la guerra y la paz; el medio ambiente y la calidad de vida; el combate a la corrupción y al crimen organizado; las reformas de los sistemas multilaterales; la gobernabilidad, la redefinición del rol de los Estados nacionales y de las formas de ciudadanía en un mundo globalizado.

La segunda característica de la cuarta ola es la interseccionalidad, la propuesta feminista que ha hecho posible esta movilización global. Siguiendo a Rosa Cobo, no habría sido posible trasladar el mensaje y convencer si el feminismo no hubiese asumido la diversidad de las mujeres y, al mismo tiempo, no hubiese vuelto a poner sus energías en las políticas de distribución. Es decir, por un lado, el feminismo se ha «ensanchado», primero se hizo global internamente para luego hacerse global externamente. Esto significa que «ya no hay que elegir un bando», entre el movimiento feminista y el antirracista, por ejemplo. La interseccionalidad –según Kira Cochrane– es el principio rector de las feministas actuales⁸. Además de hacer al movimiento feminista más amplio y respetuoso, la interseccionalidad ha traído un efecto no esperado: la exigencia de autoevaluación de privilegios.

Quizá no sea arriesgado aventurar que los inicios del siglo XXI se recordarán como el momento en que las mujeres rompieron el silencio. El silencio es el mandato patriarcal por excelencia. Durante siglos se mantuvo la expresa prohibición a las mujeres de tener conocimiento, leer, escribir, crear, hablar en público... Ese pacto de silencio forjado sobre el miedo de ellas, la violencia de ellos y la indiferencia de la mayoría había conseguido normalizar el abuso, el maltrato, e incluso generar la cultura de la violación en la que vivimos.

Millones de mujeres en todo el mundo han dicho se acabó. Miles de mujeres han dejado de tener miedo y están dispuestas a hablar alto y claro

La segunda característica de la cuarta ola es la interseccionalidad, la propuesta feminista que ha hecho posible esta movilización global

8. K. Cochrane: *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada*, Gedisa, Barcelona, 2015.

en las redes sociales, frente a las cámaras y frente a los tribunales. Miles de mujeres en todo el mundo saben que el silencio y la sumisión, lejos de protegernos, amparan a los perpetradores y alimentan la impunidad, gasolina de la violencia.

El feminismo de la cuarta ola está definido por la tecnología. Internet está permitiendo al feminismo construir un movimiento *online* fuerte, popular, reactivo. Las redes sociales provocan a su vez un nuevo tipo de acción, la de las multitudes anónimas organizadas de forma rápida y precisa, con objetivos claros y comunes, con una estrategia que puede discutirse y planificarse. Las redes permanecen una vez desaparecida la acción, lo que hace que se creen conexiones virtuales permanentes que van concienciando a grupos cada vez más jóvenes y relacionados en todo el mundo. Grupos que nacen en el mundo virtual y luego sienten la necesidad también de organizarse en sus respectivos ámbitos, bien acercándose al movimiento feminista organizado, bien creando sus propios grupos feministas en los institutos, en las universidades... Un nuevo espacio de opinión pública al que las mujeres nunca habían tenido acceso por el control patriarcal de los medios de comunicación.

Por otro lado, se consolida la cada vez mayor alianza con el ecologismo y, a su vez, el desarrollo del ecofeminismo. La cuarta ola también es intergeneracional. No hay *relevo* generacional porque nadie se ha ido. Se está produciendo un diálogo intergeneracional en el que feministas de larga y muy larga trayectoria trabajan junto a mujeres jóvenes compartiendo liderazgos, propuestas y discursos. La novedad de la cuarta ola es la suma de millones de mujeres jóvenes al movimiento feminista, algunas, incluso, organizadas desde la educación secundaria.

Esta llegada masiva de jóvenes a la militancia feminista, además de nuevas miradas, respuestas y formas de militancia, ha provocado también que buena parte de la cuarta ola se articule alrededor de la denuncia de la violencia sexual, la más invisibilizada de todas y la que sufren especialmente niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.

El feminismo de la cuarta ola también se caracteriza por estar impugnando el modelo no solo en los regímenes autoritarios, también en las democracias actuales por déficit de legitimidad.

«Desdibujar las fronteras sin quemar los puentes», propone Rosi Braidotti⁹. No se me ocurre idea más poderosa que esa, la construcción de un feminismo puente, un feminismo que abra caminos e invite a pasar de un lugar inhóspito a otro que realmente queremos habitar, un lugar en el que sea posible respirar. ☐

9. R. Braidotti: *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada*, Gedisa, Barcelona, 2015.

¿Hacia dónde van los movimientos por la justicia climática?

Maristella Svampa

La irrupción de un activismo climático de matriz juvenil no solo revitalizó el campo de acción, sino que abrió nuevas expectativas en un contexto de renovada urgencia climática. Este movimiento no está exento de riesgos –como su encierro en una dimensión cultural-expresiva o la parálisis colapsista–, pero su persistencia resulta clave en el contexto del fracaso sucesivo de las cumbres climáticas globales.

El escenario actual presenta una profunda división. Por un lado, se observa la convergencia entre un proceso de derechización política, una preocupante ceguera ambiental y un peligroso deslizamiento ideológico de amplios sectores subalternos, seducidos por el discurso neofascista, que denuncian los resultados excluyentes de la globalización neoliberal. Por otro lado, el deterioro ambiental y el incremento exponencial de las catástrofes climáticas tienen su correlato en el aumento de las acciones de protesta y en la emergencia de nuevas organizaciones y colectivos, no pocos de ellos coordinados a escala global, que denuncian la guerra contra la naturaleza y exigen a las potencias mundiales y los decisores políticos cambios drásticos en la política climática.

Maristella Svampa: es socióloga y escritora. Sus libros más recientes son *Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking* (Sudamericana, Buenos Aires, 2018) y *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias* (CALAS / Universidad de Guadalajara, Zapopan, 2018).

Palabras claves: calentamiento global, justicia ambiental, justicia climática, movimientos sociales.

Nota: las ideas expuestas en este texto forman parte del libro *Una brújula en tiempos de crisis climática. Por qué debemos salir de los modelos de mal desarrollo* (en coautoría con Enrique Viale), de próxima publicación por Siglo Veintiuno.

¿Qué alcance tienen estas movilizaciones globales en un contexto planetario crecientemente autoritario y frente a un horizonte cada vez más colapsista? ¿Cuáles son los reclamos y las consignas más importantes de estos nuevos movimientos ciudadanos? ¿Estamos asistiendo a la cristalización de una red de movimientos y acciones que ilustran la potencial emergencia de una «sociedad en movimiento»? ¿Qué nuevos protagonistas conlleva la demanda de justicia climática?

En este artículo presentaré desde una perspectiva histórica la conformación del espacio de la justicia climática. Mi tesis es que en la actualidad existe un campo amplio y heteróclito de acción atravesado por la problemática de la justicia climática, que ha sido revitalizado por un protagonismo juvenil más radicalizado, al calor de los negacionismos y los desastres ecológicos. Ese campo incluye:

- organizaciones de base (movimientos socioambientales locales y culturales, ONG ambientalistas, organizaciones de pueblos originarios, entre otros);

- redes de organizaciones y movimientos sociales que nacen como instancias de coordinación para la realización de acciones de protesta puntuales y específicas, simultáneas en diferentes partes del mundo y que interpe-lan a las elites políticas y económicas –sea en la Organización Mundial del Comercio (OMC), las Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), el Foro de Davos o, recientemente, las marchas globales por el clima–;

- protestas de jóvenes bajo la forma de «huelgas climáticas», tales como las que promueven Fridays for Future (Viernes por el Futuro), Extinction Rebellion (Rebelión contra la Extinción), Jóvenes por el Clima, hasta aquellas movilizaciones espontáneas o acciones de desobediencia civil que exigen cambios en las políticas climáticas y/o denuncian la inacción de los respectivos gobiernos ante determinados crímenes ambientales (incendios en la Amazonía y en Australia, etc.).

Partimos de la base de que es necesario tomar como unidad de análisis las acciones colectivas de protesta y no solo las organizaciones. Como sostiene el economista ecológico Joan Martínez Alier: «Para que haya un movimiento, no hace falta una organización. Es erróneo buscar la presencia del movimiento global de justicia ambiental en los cambiantes nombres de las organizaciones más que en las acciones locales, con sus formas diversas, y en sus expresiones culturales»¹.

1. Ver J. Martínez Alier: «Una experiencia de cartografía colaborativa. El Atlas de Justicia Ambiental» en este número de *Nueva Sociedad*.

Las raíces de los movimientos

Durante mucho tiempo, en Occidente, la historia de las luchas y de las formas de resistencia colectiva estuvo asociada a las estructuras organizativas de la clase obrera, considerada como el actor privilegiado del cambio histórico. La acción organizada de esta clase era conceptualizada en términos de «movimiento social», en la medida en que esta aparecía como el actor central y, potencialmente, como la expresión privilegiada de una nueva alternativa societal, diferente del modelo capitalista vigente. Sin embargo, a partir de 1960, la multiplicación de las esferas de conflicto, los cambios en las clases populares y la consiguiente pérdida de centralidad del conflicto industrial pusieron de manifiesto la necesidad de ampliar las definiciones y las categorías analíticas. Para dar cuenta de ello, se instituyó la categoría —a la vez empírica y teórica— de «nuevos movimientos sociales», a fin de caracterizar la acción de los diferentes movimientos que expresaban una nueva politización de la sociedad, mediante la puesta en público de temáticas y conflictos que tradicionalmente se habían considerado propios del ámbito privado o que aparecían naturalizados, asociados al desarrollo industrial.

En este marco fueron comprendidos los nacientes movimientos ecologistas o ambientales que, junto con los movimientos feministas, pacifistas y estudiantiles, ilustraban la emergencia de nuevas coordenadas culturales y políticas. Los movimientos ecologistas y pacifistas apuntaban sus críticas al productivismo, que alcanzaba tanto al capitalismo como al socialismo de tipo soviético, al tiempo que aparecían unificados detrás del cuestionamiento al uso de la energía nuclear.

Así, los años 70 señalaron el ingreso de la cuestión ambiental en la agenda global. Surgieron entonces instituciones internacionales y nuevas plataformas de intervención —como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)—, diferentes organizaciones de tipo ecologista, los primeros partidos verdes (con el partido alemán como modelo) y numerosas ONG con tendencias y orígenes ideológicos muy contrastantes, desde los más conservadores hasta los más radicales.

En los años 80 asistimos a una inflexión, asociada a la emergencia del movimiento de justicia ambiental, nacido en Estados Unidos y vinculado a las luchas de las comunidades afroamericanas, cuyos barrios eran los más afectados por las actividades más contaminantes, como los vertederos de residuos tóxicos y la instalación de ciertas industrias. Se trata de un enfoque integral que, desde el origen, pone el acento en la desigualdad

Los movimientos ecologistas y pacifistas apuntaban sus críticas al productivismo

de los costos ambientales, la falta de participación y de democracia y el racismo ambiental, así como en la injusticia de género y la deuda ecológica².

Por su parte, en la misma época nacen las movilizaciones socioambientales de los países del Sur. Martínez Alier³, quien estudió los nuevos conflictos ambientales en los cinco continentes, bautizó a estos movimientos como «ecología popular» o «ecología de los pobres». Con esto se refería a una corriente que crecía en importancia y colocaba el énfasis en los conflictos ambientales, que en diversos niveles (local, nacional, global) son causados por la reproducción globalizada del capital, la nueva división internacional y territorial del trabajo y la desigualdad social. La desigual división del trabajo, que repercute en la distribución de los conflictos ambientales, perjudica sobre todo a las poblaciones pobres y que presentan mayor vulnerabilidad. Asimismo, Martínez Alier afirmaba que en muchos conflictos ambientales los pobres se alinean junto a la preservación de los recursos naturales no por convicción ecologista, sino con el fin de preservar su forma de vida.

Por otro lado, en 1999, asomaron a la escena pública global los movimientos antiglobalización, tras la batalla de Seattle, cuando lograron interrumpir la reunión de la OMC. De la mano de una narrativa que cuestiona la globalización neoliberal y responsabiliza al capitalismo por la degradación social y ambiental, los movimientos y organizaciones ambientales se propusieron interpelar a las instituciones internacionales que regulan el capitalismo en el mundo.

Así, el movimiento por la justicia climática es el heredero natural de estas tres corrientes mayores. Nació de la mano de las ONG más pequeñas, que

**El concepto de
«justicia climática»
fue introducido en
1999 por el grupo
Corporate Watch**

buscaban reapropiarse críticamente de este concepto, recuperando su dimensión más confrontativa e integral. Solo en 2009, tras el fracaso de la COP de Copenhague, la apelación a la justicia climática iba a encontrar una traducción en términos de movimiento global de carácter más radical, con eje en la crítica al capitalismo y con la transición energética como horizonte.

El concepto de «justicia climática» fue introducido en 1999 por el grupo Corporate Watch (activos miembros del movimiento de justicia ambiental), con sede en San Francisco, y proponía abordar las causas del calentamiento global, pedir cuentas a las corporaciones responsables de las emisiones (las empresas petroleras) y plantear la necesidad de

2. Sobre el tema, v. Henri Acselrad: «Movimiento de justicia ambiental. Estrategia argumentativa y fuerza simbólica» en Jorge Riechmann (coord.): *Ética ecológica. Propuestas para la reorientación*, Nordman, Montevideo, 2004.

3. J. Martínez Alier: *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*, Icaria, Barcelona, 2005.

la transición energética. Aunque los principios fueron establecidos en Bali (International Climate Justice Network, 2002), la nueva agenda ambiental fue presentada en sociedad en varias reuniones, una de ellas en la sede de Chevron Oil en San Francisco.

En tanto concepto totalizador, este apunta a retomar la visión integral de la justicia ambiental, nacida en los barrios afroamericanos en EEUU donde se denunciaba el racismo ambiental, así como la dimensión social más presente en la llamada ecología de los pobres, asociada a las resistencias territoriales de los países del Sur global. Desde esta perspectiva, la justicia climática «exige que las políticas públicas estén basadas en el respeto mutuo y en la justicia para todos los pueblos», además de «una valorización de las diversas perspectivas culturales»⁴. Aunque hay interpretaciones diversas, plantea no solo una política de equidad sino también una de reconocimiento y participación política de los sectores afectados.

En términos organizacionales, los movimientos por la justicia climática comparten el *ethos* propio de los movimientos alterglobalización: la acción directa y lo público, la vocación nómada por el cruce social y la multipertenencia, las redes de solidaridad y los grupos de afinidad aparecen así como piedras de toque en el proceso siempre fluido y constante de construcción de la identidad.

El escenario de las COP

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, se firmaron instrumentos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Al mismo tiempo, se iniciaron negociaciones con miras a una Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Dos años después, en 1994, la CMNUCC entró en vigor y en 1995 se celebró la Primera Conferencia de las Partes (COP). La COP nacería así como el órgano supremo de la Convención y la asociación de todos los países que son firmantes de ella («las partes»), cuyo objetivo es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a fin de impedir riesgos en el sistema climático. En las reuniones anuales participarían expertos en medio ambiente, ministros, jefes de Estado y ONG.

Desde 1995 hasta 2019 se realizaron 25 COP. Tal como afirmara Antonio Brailovsky, uno de los ecologistas pioneros en Argentina, poco antes de que arrancara la última COP, en Madrid,

4. David Schlosberg: «Justicia ambiental y climática: de la equidad al funcionamiento comunitario» en *Ecología Política*, 18/6/2011.

El solo hecho de que haya una reunión número 25 para discutir los problemas del clima quiere decir que se han reunido 24 veces y han fracasado en llegar a un acuerdo que funcione. Siempre prometen algo y luego no lo cumplen. De modo que tenemos 24 ejemplos de fracaso de cumbres del clima en las que dijeron un montón de cosas y no cumplieron ninguna. Por lo tanto, no veo razones para pensar que esta vez sea diferente.⁵

Una de las más esperanzadoras fue la COP3, realizada en Japón, en la cual, tras intensas negociaciones, se firmó el Protocolo de Kioto. Este instrumento, junto con el Protocolo de Montreal (de 1987, sobre protección de la capa de ozono), se constituyó en uno de los dos documentos más importantes de la humanidad hasta ese momento para regular las actividades antropogénicas. Así, se establecieron objetivos vinculantes para 37 países industrializados, que debían reducir entre 2008 –su entrada en vigor– y 2012 –su cumplimiento– 5% de sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto del nivel de 1990⁶.

El Protocolo de Kioto se convirtió en legalmente vinculante para 30 países industrializados, algunos de los cuales fueron de hecho reduciendo sus emisiones respecto de 1990. Por su parte, los llamados países en desarrollo, como China, la India y Brasil, aceptaron asumir sus responsabilidades pero sin incluir objetivos de reducción de emisiones. Rusia ratificó el protocolo en 2005, por lo cual la COP de Montreal fue la primera en la que el pacto entró en vigor. Pero sin el compromiso de EEUU, país responsable de un tercio de las emisiones mundiales y que se retiró en 2001, durante la era de George W. Bush, y con el aumento de las emisiones por parte de países emergentes como la India y China, el protocolo perdería mucha de su eficacia ambiental. Asimismo, este se vio minado por la introducción de mecanismos y vías que hicieron posible que los países industrializados pudieran apuntarse reducciones que no se realizan en su territorio, los llamados «mecanismos de flexibilidad», como el comercio de emisiones (la compra directa de cuotas de dióxido de carbono), y otros que significan inversiones en terceros países para que estos emitan menos, como el mecanismo de desarrollo limpio y la aplicación conjunta.

Mientras tanto, la participación de la sociedad civil en las COP, visible en un arco amplio de movimientos ecologistas y ONG ambientalistas de proyección internacional, se hacía cada vez mayor (en el caso latinoamericano se conformaron las Cumbres de los Pueblos). En 2005, asistieron a la COP11 de Montreal unos 10.000 participantes. En 2007, marcado por la acción global

5. Mario Hernández: «Si hay una COP25 quiere decir que se han reunido 24 veces y han fracasado», entrevista a A. Brailovsky en *Rebelión*, 30/11/2019.

6. Ricardo Estévez: «¿Conoces en qué consiste el GHG Protocol?» en *Ecointeligencia*, 20/5/2013.

y en tanto «movimiento de movimientos», un ecologismo cada vez más activo fue confluyendo en la conformación de Climate Justice Now (Justicia Climática Ahora), que reunió a las principales organizaciones⁷.

Pese a las expectativas, la COP15, que se llevó a cabo en Copenhague en 2009, desembocó en un gran fracaso. Se aprobó un texto elaborado por unos pocos países (EEUU, China y otros emergentes), el cual, además de su total falta de transparencia, se convirtió en una mera declaración de intenciones, pues a diferencia del Protocolo de Kioto carecía de los compromisos de reducción de emisiones necesarios para evitar el calentamiento global, aun si promovía la creación de un fondo verde. Asimismo, las tensiones vividas dentro y fuera de la cumbre pusieron de manifiesto el cambio de fuerzas en términos geopolíticos: el rol de China, principal país emisor de gases de efecto invernadero junto con EEUU, era toda una señal de cuánto habían cambiado los tiempos entre 1997 (año de la firma del Protocolo de Kioto) y 2009⁸.

La COP15, que se llevó a cabo en Copenhague en 2009, desembocó en un gran fracaso

Copenhague significó el cierre de un ciclo para no pocos movimientos sociales y ONG que fueron excluidos de la cumbre y encabezarían una enorme movilización que sitió la capital nórdica. Como afirmó el fundador de Ecologistas en Acción, Ramón Fernández Durán, el broche de oro fue la represión policial a la movilización, pues mostró que «el ojo público ciudadano ya no era bienvenido en un encuentro vacío de contenido y secuestrado por los poderosos»⁹. En consecuencia, hubo un distanciamiento de los grupos más críticos, que concluyeron que no era posible enfrentar el cambio climático sin cuestionar el capitalismo global. De ahí en más, el movimiento adoptaría la consigna «Cambiar el sistema, no el clima».

Por otra parte, como respuesta al fracaso de Copenhague, los países del llamado «eje bolivariano», liderado por Bolivia, llamaron a una contracumbre de carácter rupturista en Tiquipaya, a 30 kilómetros de Cochabamba, que tomaría el nombre de Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Esta cumbre se realizó en 2010 y reunió a más de 30.000 personas de 140 países. La ambiciosa iniciativa¹⁰ denunció la responsabilidad del capitalismo en el deterioro del

7. «Principios» en *Clima Justice Now*, <<https://climatejusticenow.org/sobre-cjn/principios/>>.

8. Tom Kucharz: «La justicia climática como reto social y político» en *Ecologistas en Acción*, 18/4/2010.

9. Ramón Fernández Durán: «Fin del Cambio Climático como vía para ‘Salvar todos juntos el Planeta’» en *Ciudades para un Futuro más Sostenible*, 2010.

10. Esta fue promovida por el ambientalista Pablo Solón, en ese entonces embajador de Bolivia ante la ONU.

ambiente y la deuda ecológica, a la vez que buscó colocar en agenda los derechos de la naturaleza y el «vivir bien». Sin embargo, la iniciativa del gobierno boliviano tuvo patas cortas. Un año después, la propuesta no fue contemplada en la COP de Cancún; los movimientos sociales que cuestionaban la cumbre fueron mantenidos lejos del recinto oficial y Bolivia quedó en soledad a la hora de las votaciones. Asimismo, el Fondo Verde, orientado a mitigar los impactos del cambio climático, quedó bajo la supervisión del Banco Mundial.

Como corolario, la promesa ecologista de Evo Morales y la narrativa de respeto de los derechos de la Madre Tierra se iban a ver desmentidas en su propio territorio, ante el avance de proyectos de carácter extractivo y la expansión de la frontera agropecuaria. La retórica oficialista se reveló falsa e inconsistente, sobre todo luego del conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en 2011, que enfrentó al gobierno boliviano con varias comunidades indígenas y puso al descubierto el doble discurso oficial, que dio paso a una abierta política extractivista, sumamente descalificatoria y criminalizadora en relación con los ambientalismos críticos de ese país¹¹.

Los movimientos por la justicia ambiental y climática se fueron organizando en torno de acciones y redes de protesta, lo cual fue diseñando, como sostiene Martínez Alier, una nueva cartografía de territorios en resistencia, que –siguiendo a Naomi Klein–, denominaría «Blockadia»¹². El mapa releva las acciones colectivas y estrategias diversas de confrontación contra la expansión territorial del capital, que incluyen desde movilizaciones y bloqueo de rutas y calles hasta la ocupación de territorios y otras formas de resistencia civil. En América Latina son sobre todo las luchas contra el neoextractivismo las que liderarán los movimientos por la justicia ambiental, en sus diversas modalidades: lucha contra la expansión de las fronteras hidrocarburífera, minera y agropecuaria, biocombustibles, megarrepresas y también pasivos ambientales y expansión de zonas de sacrificio. En América del Norte, serán las acciones de protesta contra los conductos que transportan el gas del *fracking* y atraviesan territorios indígenas (por ejemplo, contra el Dakota Access Pipeline). En Europa, hay que incluir la lucha contra las minas de carbón (como en Alemania) y contra el *fracking* (Francia, Bulgaria, Inglaterra), así como las diferentes acciones de bloqueo contra el transporte de combustibles fósiles. En los últimos tiempos, tomarán protagonismo las marchas globales por el clima.

11. Abordamos el tema en M. Svampa: *Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo*, Edhasa, Buenos Aires, 2016.

12. J. Martínez Alier, Alice Owen, Broto Roy, Daniela del Bene y Daria Rivin: «Blockadia: movimientos de base contra los combustibles fósiles y a favor de la justicia climática» en *Anuario Internacional CIDOB* 2018, 7/2018. V. la referencia al EJTatlas en este número de *Nueva Sociedad*.

Las marchas globales por el clima

En EEUU, el catalizador del movimiento por la justicia climática fue, una vez más, la denuncia del racismo ambiental, que tuvo su vuelta de tuerca en 2005, cuando el huracán Katrina arrasó con las comunidades más pobres de origen afroestadounidense de Nueva Orleans y dejó al descubierto las tremendas inequidades existentes nada menos que en el país más rico del planeta. En 2012, el paso por Nueva York de otro huracán, el Sandy, produjo 285 muertos y 75.000 millones de dólares en daños y también fue generando un cambio cultural. Los apagones afectaron a más de dos millones de personas. Mientras las oficinas centrales de Goldman Sachs en Manhattan estaban iluminadas y Wall Street pudo amortiguar los peores efectos utilizando generadores propios, los pobres y menos poderosos quedaron atrapados en el sistema de desigualdad, sin amparo alguno del Estado¹³.

Dos años después, el 21 de septiembre de 2014, Nueva York recibió la Marcha de los Pueblos, en la cual unas 400.000 personas se manifestaron exigiendo políticas activas contra el cambio climático. Entre las consignas podía leerse «No hay planeta B», «Los bosques no están a la venta», «No al fracking», «No se puede detener el cambio climático si no se detiene la maquinaria de guerra de EEUU»¹⁴. En otras 166 ciudades del mundo también se llevaron a cabo actos y movilizaciones contra el cambio climático. La marcha, de carácter más expresivo y festivo que confrontacional¹⁵, se realizó antes de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima, en busca de llegar a un acuerdo para la COP21, con la expectativas puestas en la COP de París, que se realizaría un año después, en 2015.

En 2015 se firmó el Acuerdo de París, en el marco de la COP21. Pese a los aplausos, este acuerdo presenta enormes falencias y debilidades. Pronto se detectó en el documento final que no aparecían palabras claves como «combustibles fósiles», «petróleo» y «carbón», al tiempo que la deuda climática del Norte hacia el Sur brillaba por su ausencia. Se suprimieron también las referencias a los derechos humanos y de las poblaciones indígenas, que fueron trasladadas al preámbulo. Además, todavía debía pasar un tiempo para que este acuerdo entrara en vigor: solo en 2020, y la primera revisión

El 21 de septiembre de 2014, Nueva York recibió la Marcha de los Pueblos

13. Geoff Mann y Joel Wainwright: *Leviatán climático. Una teoría sobre nuestro futuro planetario*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2018, p. 278.

14. Gloria Grinberg: «Marcha de los pueblos' contra el cambio climático en Nueva York» en *La Izquierda Diario*, 23/9/2014.

15. G. Mann y J. Wainwright: ob. cit., p. 280.

de resultados está prevista para 2023. Incluso, podría decirse que respecto de acuerdos anteriores implicó un retroceso, dado que el cumplimiento de lo pactado y la forma de implementación –reducción de emisiones de dióxido de carbono, a fin de que el aumento de la temperatura media no sobrepase los 2 °C– son voluntarios y dependen de cada país. Tampoco hubo planteamientos concretos tendientes a combatir los subsidios que alientan el uso de los combustibles o para dejar en el subsuelo 80% de todas las reservas conocidas de esos combustibles, como recomienda incluso la Agencia Internacional de la Energía, entidad que no se caracteriza por ser ecologista. No se cuestiona el crecimiento económico y mucho menos se pone en entredicho el sistema del comercio mundial. Sectores altamente contaminantes, como la

**Sectores altamente
contaminantes,
como la aviación
civil y el transporte
marítimo, quedaron
exentos de todo
compromiso**

aviación civil y el transporte marítimo, que acumulan cerca de 10% de las emisiones mundiales, quedaron exentos de todo compromiso, entre otros tópicos¹⁶.

La no obligatoriedad del acuerdo y las manifiestas omisiones dejaron un gusto amargo en los miles y miles de activistas climáticos que se trasladaron desde Bourget hasta París para manifestarse en distintos puntos de una ciudad vallada en sus puntos estratégicos. Grupos de la sociedad civil entregaron tulipanes rojos para representar las líneas rojas que, supuestamente, no deben cruzarse, y buscaban realizar un mitin bajo el

Arco de Triunfo. La apelación a la justicia climática fue la consigna común. Naomi Klein fue la estrella indiscutible en París, no solo por sus críticas al capitalismo neoliberal como responsable del calentamiento del planeta sino también por su propuesta de multiplicar las resistencias y ocupaciones organizando «Blockadia» para transformar la sociedad¹⁷.

En 2017, el Acuerdo de París fue ratificado por 171 países de los 195 participantes; sin embargo, y pese a la gravedad de la crisis climática, continúa siendo una declaración de buenas intenciones, pues no establece compromisos concretos o verificables. Con este acuerdo se abren aún más las puertas para impulsar falsas soluciones en el marco de la «economía verde», que se sustenta en la continua e incluso ampliada mercantilización de la naturaleza. Con el fin de lograr un equilibrio de las emisiones antropogénicas, los países podrán compensar sus emisiones mediante mecanismos de mercado que involucren bosques u océanos; o alentar la geingeniería, los métodos de captura y almacenaje de carbono, entre otros. Para financiar todos estos esfuerzos, se establece un fondo de 100.000 millones de dóla-

16. Retomamos la síntesis de Alberto Acosta y E. Viale: «Sin paz con la Tierra, no habrá paz sobre la Tierra» en *Rebelión*, 16/12/2005.

17. G. Mann y J. Wainwright: ob. cit., p. 296.

res anuales a partir de 2020, al que buscan «postularse» no pocos países periféricos.

Como era de prever, la *cop25*, realizada en diciembre de 2019, concluyó en un nuevo fracaso. Recordemos que esta se llevó a cabo en Madrid, y no en la sede originalmente prevista, la ciudad de Santiago de Chile, debido a las protestas sociales que sacuden a ese país. La cumbre fue peor de lo esperado: no arribó a ningún consenso y tuvo que aplazarse de nuevo el desarrollo del artículo del Acuerdo de París referido a los mercados de dióxido de carbono.

La potencia de la juventud

En 1988, la portada de la revista *Times* mostraba un globo terráqueo ligado con varias vueltas de cordel y un rojizo atardecer como fondo, bajo el sugestivo título «Planeta del año: la Tierra en peligro de extinción». Treinta y un años después, en diciembre de 2019, la tapa de la revista muestra a la joven sueca Greta Thunberg, designada como «el personaje del año», con el subtítulo «El poder de la juventud».

Ciertamente, aunque en términos de resultados nada cambió de París a Madrid, en términos de activismo climático hubo una inflexión, vinculada a la irrupción de la juventud, que asumió el protagonismo del movimiento por la justicia climática. Más aún: si en 2015, en París, la gran estrella de la contracumbre fue Klein, quien acababa de publicar su libro *Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima*¹⁸, en Madrid, en diciembre de 2019, la figura insoslayable fue Thunberg, de apenas 16 años, quien dos años atrás inició una verdadera cruzada para combatir el cambio climático.

En agosto de 2018, luego de varias olas de calor e incendios forestales que convirtieron el apacible verano sueco en un verdadero infierno, una adolescente de ese país, de aspecto frágil, lanzó la primera «huelga estudiantil por el clima». Con apenas 14 años y afectada por el síndrome de Asperger, Thunberg dejó de ir a la escuela los días viernes para plantarse frente al Parlamento sueco y denunciar los riesgos de la inacción de las elites políticas y económicas frente al acelerado cambio climático. Su perseverancia, su obstinación y la impactante crudeza de sus declaraciones la harían célebre en muy poco tiempo. El dramático llamado a la acción dio la vuelta el mundo y encontró un eco favorable en miles y miles de adolescentes y jóvenes, que originaron el movimiento Fridays for Future, entre muchos otros que catapultarían a la juventud a la cabeza del movimiento global por la justicia climática.

18. Paidós, Madrid, 2015.

El «efecto Greta» se tradujo en el lanzamiento de las huelgas globales contra el cambio climático, cuyo impacto y masividad sorprenderían a propios y extraños. Tanto es así que, durante la segunda huelga global, el 15 de marzo de 2019, más de 1,4 millones de jóvenes se manifestaron en 125 países y 2.083 ciudades. En la tercera, el 20 de septiembre de ese mismo año, fueron cuatro millones en 163 países, sumando jóvenes de todo el mundo, entre ciudades del Norte y del Sur. Su llamado y, por extensión, la acción de los nuevos movimientos por la justicia climática pusieron en evidencia el fracaso de aquellos grandes objetivos que se había trazado la humanidad medio siglo atrás, al inaugurar el tiempo de las cumbres climáticas globales: en primer lugar, el del llamado «desarrollo sustentable» o «sostenible» como nuevo paradigma, vaciado de todo contenido transformador y sacrificado en el altar del capitalismo y el libre mercado.

**Las palabras de
Thunberg están
atravesadas por
una fuerza
dramática inusual**

En segundo lugar, el quiebre del pacto intergeneracional que, desde la época de las primeras cumbres, buscaba garantizar la equidad a las futuras generaciones, el derecho a una herencia adecuada que les permitiera un nivel de vida no menor al de la generación actual.

Las palabras de Thunberg están atravesadas por una fuerza dramática inusual, en sintonía con la gravedad de la hora. «No quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. Quiero que sientas el miedo que yo siento todos los días y luego quiero que actúes», dijo la joven frente a los líderes del Foro Económico Mundial, en Davos, en enero de 2019. Y en septiembre del mismo año, en el marco de la Cumbre de Acción Climática de la ONU, lanzó:

Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, ¿ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza? ¿Cómo se atreven?

Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? (...) Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y, sin embargo, soy de los afortunados.

En su paso por la COP25, en Madrid, la joven sueca se rodeó de activistas, sobre todo indígenas, y de científicos, estudiosos del cambio climático. A la hora de hablar ante los políticos y observadores tradicionales, cambió de estrategia y evitó la emoción y las frases de impacto para apelar a los datos científicos sobre la situación del clima. Su lema fue, más que nunca: «Escuchen a los científicos».

Al calor de la acción de esta nueva guerrera del Antropoceno, durante 2019 nacieron colectivos y organizaciones juveniles en todo el mundo que se proponen incidir sobre los decisores políticos y las políticas climáticas globales. Casos emblemáticos son Jóvenes por el Clima, Fridays for Future, Extinction Rebellion y Alianza por el Clima; colectivos y redes diseminados en diferentes países cuyo ingreso súbito a la arena política global ha tenido grandes repercusiones.

Por ejemplo, en Argentina, Jóvenes por el Clima nació con el propósito de organizar la versión local de la Marcha Mundial por el clima, en marzo de 2019. El crecimiento de esta organización, compuesta por jóvenes de entre 16 y 20 años, fue explosivo. Solo seis meses después uno de sus referentes, Bruno Rodríguez, fue seleccionado entre muchos otros e invitado a Nueva York para hablar junto a Thunberg en la Cumbre de Jóvenes por el Clima¹⁹. Hoy este colectivo afirma que su objetivo es «promover un ambientalismo popular, latinoamericanista y combativo».

Por su parte, también Extinction Rebellion presenta una trayectoria vertiginosa y fulgurante. La agrupación nació en Gran Bretaña, donde en abril de 2019 ocupó y bloqueó durante una semana cinco puntos claves de Londres para llamar la atención sobre el calentamiento global y los riesgos que esto implica²⁰. Hoy Extinction Rebellion se encuentra diseminada en diferentes países. En su muro de Facebook, la sección argentina de la organización, que también busca conectar justicia climática con luchas contra el neoextractivismo, afirma:

Estamos ante una crisis climática y ecológica sin precedentes; la primera aniquilación de especies de la historia planetaria ya está ocurriendo y la extinción humana es un riesgo real. Tenemos muy poco tiempo para actuar y evitar el colapso: en menos de 10 años debemos transformar nuestro sistema de producción y consumo por completo. La negligencia pasiva de nuestros gobiernos los convierte en cómplice criminal, por lo que es nuestro derecho y deber actuar escuchando a la ciencia y rebelarnos mediante la desobediencia civil pacífica.

Ciertamente, pese a la desconfianza inicial por parte de las organizaciones socioambientales hace tiempo instaladas, los lazos de los jóvenes con las asambleas y colectivos antiextractivistas, así como con las organizaciones

19. Julián Reingold: «Aclimatando las PASO: la juventud que empuja la causa climático-ambiental desde las calles a los palacios del poder» en *Infobae*, 6/8/2019. En rigor, fueron dos los jóvenes invitados desde Argentina, uno por Jóvenes por el Clima y otro por la ONG Ecohouse.

20. «BREAKING: Extinction Rebellion - The World has Changed», 24/4/2019, <<https://rebellion.earth/2019/04/24/breaking-extinction-rebellion-the-world-has-changed/>>.

indígenas, son prometedores. El diálogo intergeneracional deviene imprescindible, así como la comprensión acerca de la articulación necesaria entre la escala global y sus expresiones locales y territoriales. Más aún, en provincias como Mendoza, en Argentina, casi no hay distancia entre las potentes luchas contra la megaminería y el *fracking* y las nuevas organizaciones juveniles. La ampliación del campo de batalla plantea la existencia de un espacio plural donde se cruzan organizaciones con historias y acumulaciones diversas, y deja en claro que las luchas en defensa del planeta adoptan una carnadura local y territorial polifacética, pero cada vez más radical, que ya no puede ser ignorada.

Con la casa en llamas...

Sin duda, la emergencia de un joven activismo climático no solo revitalizó el campo de acción, sino que abrió nuevas expectativas en las que convergen diferentes apelaciones y versiones del Green New Deal (Nuevo Pacto Verde) global, desde la mencionada Klein y Bernie Sanders hasta Jeremy Rifkin.

Claro es que el nuevo campo está cruzado por innumerables acechanzas. Una de ellas es que, pese a la masividad y el corte transversal, las acciones colectivas se agoten en la dimensión cultural-expresiva o incluso, ante los fracasos de las cumbres globales, que naufraguen en una suerte de impotencia o parálisis colapsista. Algo así parece suceder cada año con las COP pues, aunque estas forman parte —como ya señalamos— de una crónica de un fracaso anunciado, todavía continúan suscitando expectativas entre las filas de numerosos activistas y organizaciones ambientales, que se desplazan en masa de un continente al otro para tratar de influir en las negociaciones globales.

Los movimientos por la justicia ambiental y climática son hijos de los movimientos ecologistas de los años 80 pero, sobre todo, en su versiones más recientes, pensados como «campo de acción», son movimientos y colectivos encabezados cada vez más por jóvenes mujeres y varones del Antropoceno, comprometidos en la lucha contra todo tipo de desigualdad, lo que incluye el rechazo a diversas formas de dominación neocolonial, racista y patriarcal, tal como lo fuera Occupy Wall Street y como continúan siéndolo las luchas contra las diferentes formas de neoextractivismo y, sobre todo, como lo son las masivas movilizaciones feministas que hoy recorren el planeta.

En su fuero interno, no pocos jóvenes apuntan a lograr la masividad y el carácter transversal que recientemente ha asumido el potente movimiento feminista a escala global. Sin embargo, pese a que a través de sus acciones

los jóvenes han impulsado un fenómeno de viralización de la crisis climática como problemática mayor, todavía no se ha producido un proceso de liberación cognitiva masivo, esto es, de transformación de la conciencia, vinculada al daño moral y a las expectativas de éxito, proceso que puede activar el pasaje del movimiento social a la «sociedad en movimiento». Por el momento, en tanto «movimiento de movimientos», el campo de la justicia climática presenta formas plurales, que se traducen en diferentes niveles de involucramiento y acción, que van desde grandes y pequeñas organizaciones que desarrollan una persistente tarea militante y registran continuidad en el tiempo, hasta otras, más fluidas y transitorias, que se cristalizan en redes o alianzas fugaces, pues surgen con el objetivo de realizar una determinada acción y se disuelven luego de ella misma, o bien quedan en estado de latencia.

Mientras tanto, los tiempos se van acortando de modo indefectible. Como expresa una carta firmada por más de 11.000 científicos de todo el mundo, «la crisis climática ha llegado y se está acelerando más rápido de lo que la mayoría de los científicos esperaban. Es más severo de lo previsto, amenaza los ecosistemas naturales y el destino de la humanidad». Los desafíos requieren audacia y severidad, pues «las reacciones en cadena climática pueden causar alteraciones significativas en los ecosistemas, las sociedades y las economías que podrían hacer que grandes áreas de la tierra se vuelvan inhabitables»²¹. Una solución urgente exige no solo la reducción drástica de gases de efecto invernadero sino también una disminución en el metabolismo social, lo cual implicaría menos consumo de materia y energía que el actual.

En suma, la radicalidad en las posiciones y demandas que se requiere para transitar la crisis socioecológica sin enormes costos humanos y no humanos es tal, que ya no basta con coloridas movilizaciones globales que desde abajo ilustran las dimensiones más expresivas de la lucha, ni tampoco con la acción de grupos de presión que, en sus recorridos por los pasillos del poder, terminan por legitimar tibias reformas que priorizan las leyes del mercado (bonos de carbono, entre otros). Se requiere de una acción más rupturista, más confrontativa con el poder global y sus expresiones locales y territoriales, si es que verdaderamente se apuesta a que las decisiones del planeta y de la humanidad no continúen secuestradas por una elite política y económica que, en nombre del capital y del progreso, destruye el tejido mismo de la vida. ☐

21. Roberto Andrés: «Once mil científicos del mundo: 'El planeta Tierra se enfrenta a una emergencia climática'» en *La Izquierda Diario*, 12/11/2019.

Una experiencia de cartografía colaborativa

El Atlas de Justicia Ambiental

Joan Martínez Alier

El Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) es una experiencia de mapeo colaborativo utilizado como herramienta para el monitoreo de la (in)justicia ambiental. En el marco de la cartografía crítica, que busca comprender el vínculo entre el conocimiento geográfico y el poder, el atlas surge en un momento de emergencia climática y diversas crisis superpuestas a escala planetaria.

El Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas, por sus siglas en inglés)¹ alcanzó más de 3.000 fichas en enero de 2020, lo que ha permitido avances en el estudio de la ecología política comparada². El Atlas empezó su camino público en 2014 con 920 casos. Más de 100 personas (remuneradas y voluntarias) contribuyeron con fichas³. Las 3.000 fichas actuales suponen una muestra bastante grande aportada por

Joan Martínez Alier: es catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito numerosos libros de ecología política desde la década de 1980, entre los cuales se incluye *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración* (nueva edición aumentada y publicada, Espiritrompa Ediciones / Icaria, Lima-Barcelona, 2011).

Palabras claves: Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), cambio climático, conflictos ambientales, ecología.

1. El proyecto está codirigido por Leah Temper y J. Martínez Alier y coordinado por Daniela Del Bene. Disponible en <<https://ejatlas.org/>>.

2. Este trabajo está financiado por una subvención del European Research Council.

3. L. Temper, Federico Demaria, Arnim Scheidel, Daniela Del Bene y J. Martínez-Alier: «The Global Environmental Justice Atlas (EJAtlas): Ecological Distribution Conflicts as Forces for Sustainability» en *Sustainability Science* vol. 13, 2018.

universitarios o activistas sobre un número de conflictos socioambientales aún incuantificable, pero que suma decenas de miles alrededor del mundo. Las fichas están en acceso abierto y cada una tiene cinco o seis páginas con una descripción del conflicto, las fuentes de información y diversas variables codificadas (los impactos visibles o potenciales del proyecto controvertido, los actores sociales, sus formas de movilización, los resultados del conflicto y algunos links a fotos y videos). El EJAtlas clasifica los conflictos en diez categorías principales: energía nuclear, biomasa y tierras, combustibles fósiles y cambio climático, minería, infraestructuras, industria, conservación de biodiversidad, agua, residuos, turismo. Dentro de cada una de esas categorías hay numerosas categorías secundarias.

Es posible hacer análisis por países o regiones, como Raquel Neyra en su tesis doctoral de 2019 en la Universidad de Zaragoza sobre más de 80 conflictos ambientales en Perú⁴; o el estudio del metabolismo social de países andinos y su relación con 300 conflictos ambientales⁵; el artículo de Lucrecia Wagner y Mariana Walter con casos del EJAtlas presentado en un taller sobre industrias extractivas en Oxford, en diciembre de 2019, con el título «Mining Struggles in Argentina: Analysis of a Successful Story of Mobilization»; o el de Emiliano Terán sobre conflictos socioambientales en Venezuela tanto al norte como al sur del Orinoco⁶. Hay un artículo casi acabado que escribimos con Ksenija Hanacek en el que analizamos 50 conflictos en el Ártico, que es una nueva frontera de la extracción de *commodities* desde Alaska y Canadá hasta Siberia oriental. O los artículos de Brototi Roy y de Juan Liu con panorámicas de conflictos ambientales en la India y en China⁷. También hay análisis transversales alrededor del mundo sobre la minería y la fundición de cobre, la minería de arenas y gravas para construcción o de arenas para metales (ilmenita para titanio), plantaciones de palma de aceite o de eucaliptos, represas hidroeléctricas, incineradoras (con muchos casos en China) y otros conflictos por residuos urbanos, centrales eléctricas de carbón, *fracking* de gas, minería de uranio o centrales nucleares, molinos de viento y otros asuntos⁸. Hemos publicado

4. R. Neyra Souplet: «Cambios en el metabolismo social y la generación de conflictos socioambientales en el Perú», tesis de doctorado, Universidad de Zaragoza, 2019.

5. Mario Pérez Rincón, Julieth Vargas Morales y J. Martínez Alier: «Mapping and Analyzing Ecological Distribution Conflicts in Andean Countries» en *Ecological Economics* vol. 157, 3/2019.

6. E. Terán Mantovani: «Inside and Beyond the Petro-State Frontiers: Geography of Environmental Conflicts in Venezuela's Bolivarian Revolution» en *Sustainability Science* vol. 13, 2018.

7. B. Roy: «Ecological Distribution Conflicts in India: A Bird's Eye View» en *Ecología Política*, 7/2018; J. Martínez Alier y J. Liu: «Conflictos socioambientales en China: casos seleccionados del Atlas de Justicia Ambiental» en *Ecología Política*, 1/2019.

8. Sofía Ávila: «Environmental Justice and the Expanding Geography of Wind Power Conflicts» en *Sustainability Science* vol. 13, 2018.

también un reciente mapa de conflictos en los que recicladores urbanos protestan contra la privatización e incineración de basura⁹.

El EJAtlas se usa en el activismo ambiental y también en el periodismo, la investigación académica y la enseñanza universitaria en ecología política y otras ciencias socioambientales, como la economía ecológica, la historia ambiental, la sociología ambiental, la ecología industrial; en la geografía humana y la cartografía crítica; en el estudio de las relaciones internacionales. Y también puede usarse en economía empresarial. Por ejemplo, un reciente artículo de Rajiv Maher en el *Business and Human Rights Journal* señala que los rankings de empresas para información de inversores según su grado de respeto por los derechos humanos y el ambiente natural contrastan con las informaciones del EJAtlas. Esos rankings deben pues ser cuestionados y reelaborados a la luz de los hechos que el EJAtlas hace visibles¹⁰.

Se ha publicado un mapa con el título «Blockadia» (que cartografía los movimientos locales para dejar bajo tierra los combustibles fósiles, como la iniciativa Yasuní ITT en Ecuador y Ende Gelände en Alemania)¹¹ y otros mapas de conflictos de la compañía Vale, de la Chevron, de Pan American Silver¹². Hemos contribuido (con Sara Mingorría) a mapear y explicar los conflictos registrados por la red Stay Grounded contra nuevos campos de aviación. Otro mapa especial recoge conflictos que involucran a poblaciones romaníes en el sudeste de Europa¹³. Analizamos casos de mujeres activistas asesinadas (decenas de «Bertas Cáceres»). Con Grettel Navas publicamos el capítulo «La represión contra el movimiento global de Justicia Ambiental: algunas ecologistas asesinadas» en un libro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) de 2017¹⁴. El archivo de fichas del EJAtlas contiene también casos de ecologismo obrero

**El archivo de fichas
del EJAtlas contiene
también casos
de ecologismo
obrero y muchos
casos de ecologismo
campesino**

9. Nina Clausager, Max Stoisser, F. Demaria y Marcos Todt: «How Waste Pickers in the Global South are Being Sidelined by New Policies» en *The Conversation*, 1/3/2020.

10. R. Maher: «De-contextualized Corporate Human Rights Benchmarks: Whose Perspective Counts? See Disclaimer» en *Business and Human Rights Journal* vol. 0, 2019.

11. J. Martínez Alier, Alice Owen, B. Roy, D. Del Bene y Daria Rivin: «Blockadia: movimientos de base contra los combustibles fósiles y a favor de la justicia climática» en *Anuario Internacional CIDOB* 2017, 7/2018.

12. «Denuncian con un mapa el impacto de la minera Pan American Silver en Latinoamérica» en *Eldiario.es*, 3/3/2020.

13. Global Anti-Aerotropolis Movement (GAAM): «Global Map of Aviation-Related Socio-Environmental Conflicts and Justice Movements», 26/7/2019.

14. Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez y Facundo Martín (coords.): *Ecología política latinoamericana*, Clacso, Buenos Aires, 2017.

y, por supuesto, muchos casos de ecologismo campesino; asimismo, analizamos el alto porcentaje de participación indígena en los conflictos ambientales, y la eventual presencia de grupos religiosos (católicos en Sudamérica y Filipinas, budistas en Asia). Los conflictos de «conservación biológica militarizada» en la India y África pueden ser contrastados con los casos de «conservación convivial».

Usando la función de filtro disponible para cualquier lector, comprobamos (en los 3.000 casos del EJAtlas) que en unos 375 se reporta la muerte de uno o más defensores ambientales (12% de los casos). En casi 500 casos se reporta un éxito en la justicia ambiental, conflictos en los que se logra por lo general que los proyectos sean cancelados. Si no hubiera algunos éxitos, no podríamos hablar de un movimiento global de justicia ambiental. No todos los países se comportan igual. En México, de 109 conflictos reportados (hasta enero de 2020), el porcentaje de éxitos en obtener justicia ambiental es similar al promedio mundial, pero los casos con uno o más activistas fallecidos son 22, es decir 20%. En Perú, de 93 casos reportados, 19 son clasificados como éxitos de la justicia ambiental y en 27 hay uno o más activistas fallecidos (muy por encima del promedio mundial).

¿Existe un movimiento global de justicia ambiental?

Usamos aquí «movimiento social» en el mismo sentido en que se hablaba del movimiento obrero en Europa hasta 1914, o de los movimientos pacifistas en el mundo, como el movimiento estudiantil en Estados Unidos contra la Guerra de Vietnam en la década de 1960; o los movimientos campesinos o agraristas en América Latina desde Emiliano Zapata en 1910 en México; o el triunfante movimiento anticolonial después de 1945, particularmente en África; o el movimiento por los derechos civiles en los EEUU de Martin Luther King y otros. Y, desde luego, el creciente y exitoso movimiento feminista de los últimos 100 años. Estos movimientos sociales no suelen generar una única organización. La cronología va de la denuncia de los agravios a la presentación de reclamos, y de ahí a la formación de movimientos. Primero se pidió la tierra en distintos lugares y momentos, luego llegaron consignas colectivas como «la tierra al que la trabaja» y «tierra y libertad», que viajaron por el mundo en diversas lenguas, y todo eso ocurrió mucho antes de que se fundara la Vía Campesina a finales del siglo xx. Los dispersos colectivos obreros hicieron huelgas y boicots, arremetiendo contra los rompehuelgas y esquiroles, antes de que esas palabras se difundieran y de que se formaran sindicatos.

Lo mismo ocurre en el movimiento ambientalista: se difunden consignas, como en América Latina «el agua vale más que el oro»; se plasman

En los conflictos del EJAtlas puede verse cómo se despliegan distintos lenguajes de valoración

en pancartas que se llevan a las manifestaciones, se pintan en murales, se ponen en camisetas. El eslogan no quiere decir que, en dinero, un kilogramo de oro valga menos que un kilogramo de agua, sino que el agua tiene valores para la subsistencia humana y para la propia naturaleza que no son recogidos en la valoración crematística. En los conflictos del EJAtlas puede verse cómo se despliegan distintos lenguajes de valoración. El lenguaje de la compensación monetaria de los daños es solamente uno de los posibles lenguajes y además no se suele dar en la práctica, como sabemos por famosos casos como el de Chevron-Texaco en Ecuador o la Shell en el Delta del Níger. Para entender los conflictos

socioambientales, hay que adoptar una perspectiva multicriterial y hay que preguntarse quién tiene el poder para imponer o excluir determinados lenguajes de valoración.

En el EJAtlas estamos coleccionando no solo fichas con descripciones de conflictos sino también expresiones culturales en lenguas distintas. Piénsese en eslóganes como «Sin maíz no hay país» (en México) o «Paremos de fumar» (en Argentina), o «Las plantaciones de árboles no son bosques» o «Desiertos verdes» contra plantaciones de eucaliptos en Brasil, o el nombre de Ríos Vivos en Colombia para una red contra hidroeléctricas (similar al Movimiento de Afectados por las Represas –MAB– en Brasil o el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos –MAPDER– en México). Basta ver cómo la expresión «zona de sacrificio» se ha extendido por el continente, tomada seguramente del libro de Steve Lerner en EEUU¹⁵, a su vez nacido del movimiento de justicia ambiental en ese país. O el neologismo *zadiste* en Francia, originado hace pocos años en la *zone à défendre* (zona a defender) contra el proyecto del aeropuerto de Nantes. O la expresión en China que se traduce al inglés como «Cancer Village», con resonancias de la «Cancer Alley» en Louisiana¹⁶.

No hay aquí espacio para entrar en detalles, pero escuchen por ejemplo «Poramboke Song», de T. M. Krishna, nacida en Ennore Creek, al norte de Chennai, en la India. En pocos versos resume el conflicto por la destrucción de manglares y de la pesca en un estuario debido a la terrible contaminación producida por centrales eléctricas de carbón. Y canta que esa tierra y esa agua eran bienes comunales, eran un Poramboke. La palabra en tamil hoy se emplea mal, como «tierra de nadie», «tierra baldía». No es así, canta T. M. Krishna: Poramboke

15. E. Lerner: *Sacrifice Zones: The Front Lines of Toxic Chemical Exposure in the United States*, MIT Press, Cambridge, 2010.

16. «Inside China's 'Cancer Villages'» en *The Guardian*, 4/6/2013.

son los comunes¹⁷. En el EJAtlas hemos recopilado centenares de fotos de pancartas, canciones, documentales, murales de todo el mundo. Haciendo análisis de redes (*network analysis*), intentamos mostrar que no solo hay eslógenes compartidos sino también, a veces, conexiones entre protagonistas sociales de muchos de esos conflictos. En los conflictos socioambientales, primero nace la conciencia de agravios y hay reclamos («pliegos de reclamos», como se dice en el lenguaje sindical latinoamericano), luego hay manifestaciones, pancartas, cortes de ruta, criminalización de activistas, etc. Tras el movimiento, tal vez aparezca una organización o varias con nombre y siglas. Pero para que haya un movimiento, no hace falta una organización. Es erróneo buscar la presencia del movimiento global de justicia ambiental en los cambiantes nombres de las organizaciones (algunas permanentes, como Censat Agua Viva en Colombia o Acción Ecológica en Ecuador, y muchas otras efímeras) más que en las acciones locales con sus formas diversas y en sus expresiones culturales.

¿Por qué hay un movimiento por la justicia ambiental?

El proyecto EnvJustice es materialista. Buscamos las causas de los conflictos de minería, represas, infraestructuras públicas, industriales, extracción de biomasa y de combustibles fósiles, o evacuación de residuos, en sus causas materiales, a saber, el crecimiento y los cambios en el metabolismo social. Esos flujos de energía y materiales son concomitantes con el crecimiento económico y la acumulación de capital. El crecimiento económico aparece a la vez que el aumento del metabolismo social, es decir, los flujos de energía y materiales. Concluimos que la economía industrial capitalista no es circular sino entrópica, cada vez más entrópica. Está por acabar la transición de la economía mundial en Asia del Sur y África hacia el predominio de los combustibles fósiles que empezó en Europa hace 200 años. La economía industrial usa combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), los quema como fuentes de energía que se disipa y además produce residuos, como el dióxido de carbono, en cantidades excesivas, lo que aumenta el efecto invernadero. La curva de Keeling mide la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y sigue su marcha imperturbable desde las 320 partes por millón (ppm) en la década de 1950 a 410 ppm ahora, 450 ppm hacia el año 2050 y probablemente 500 ppm en 2100. Para entonces, el decrecimiento de la población humana y de la economía mundial, los

17. «Chennai Poromboke Paadal ft. T.M. Krishna», disponible en <www.youtube.com/watch?v=82jreyv5AHM>.

movimientos de Blockadia y los cambios tecnológicos tal vez reviertan la tendencia¹⁸.

La economía no solo consume los combustibles fósiles, también agota los «bienes fondo» que en principio son permanentes: las pesquerías y la fertilidad de los suelos, los grandes bosques y la biodiversidad, el ciclo natural del agua (que convierte en un ciclo hidrosocial). Lo cierto es que la economía industrial tiene un apetito voraz de nuevos suministros de materiales y energía que vienen de las fronteras de la extracción. Y deposita los residuos en la atmósfera, los océanos, los ríos y los suelos rurales o urbanos. Incluso una economía industrial sin crecimiento necesitaría suministros frescos de materiales y energía, porque la energía se disipa y los materiales se reciclan solo en pequeña parte. Los datos (de Willi Haas y otros) indican que la tasa de reciclaje de los insumos que entran en la economía mundial es inferior a 6%¹⁹.

La economía «neoliberal» triunfa desde la década de 1970 en gran parte del mundo y el fundamentalismo de mercado es enemigo del medio ambiente. Pero supongamos que la economía mundial no fuera neoliberal, sino una economía keynesiana socialdemócrata o una economía del estilo soviético anterior a 1990. O supongamos que el capitalismo de Estado chino triunfara en todo el mundo. No por eso se reducirían los conflictos ambientales causados por el crecimiento y los cambios del metabolismo social de la economía industrial, conflictos que registramos en el EJAAtlas y de los cuales nace un movimiento mundial de justicia ambiental. ☐

18. «The Keeling Curve» en *Enciclopedia de National Geographic*, disponible en <www.national-geographic.org/encyclopedia/keeling-curve/>.

19. W. Haas, Fridolin Krausmann, Dominik Wiedenhofer y Markus Heinz: «How Circular is the Global Economy? An Assessment of Material Flows, Waste Production, and Recycling in the European Union and the World in 2005» en *Journal of Industrial Ecology* vol. 19 Nº 5, 10/2015.

¿El tercer capítulo de la Primavera Árabe?

Ezequiel Kopel

Las protestas en el mundo árabe mostraron su potencia desde 2011, pero al mismo tiempo dejaron en evidencia las dificultades para avanzar por un camino democrático. Son varias las causas de este devenir –tanto internas como geopolíticas– pero, pese a la represión brutal, persisten la corrupción, la incompetencia y la crisis económica como el combustible de nuevas olas de protestas en la región.

En 2011, Oriente Medio fue epicentro de una segunda Primavera Árabe. La primera, mucho más pequeña en su magnitud y alcance, había tenido lugar en 2005. Durante ese año, los iraquíes fueron por primera vez a las urnas tras la caída de Saddam Husein; Siria se retiró del Líbano tras una multitudinaria movilización popular en el país de los cedros; en Bahrein, 50.000 ciudadanos (una octava parte de la población) marcharon por una reforma constitucional; en Egipto, Hosni Mubarak permitió que la Hermandad Musulmana participase en las elecciones (aunque con otro nombre) y Arabia Saudita organizó sus primeras elecciones municipales en décadas. Mientras tanto, la segunda revuelta en 2011, mucho más exitosa que su antecesora, se llevó consigo a cuatro presidentes vitalicios (en Túnez, Egipto, Libia y Yemen), pero no logró democratizar la región, que incluso se volvió más autoritaria y represiva. Desde comienzos de 2019, la «tercera vuelta» se está desarrollando en países que, en su mayoría, se habían resistido a los levantamientos de 2011.

Ezequiel Kopel: desde 2003 trabaja como corresponsal en diversos medios gráficos de Oriente Medio. Es autor de *La disputa por el control de Medio Oriente. Desde la caída del Imperio Otomano hasta el surgimiento del Estado Islámico* (Eduvim, Buenos Aires, 2016).

Palabras claves: democracia, Primavera Árabe, protestas, Oriente Medio.

Fueron muchas las voces que sostuvieron que las sociedades de Líbano, Iraq e incluso Sudán y Argelia estaban demasiado agotadas por años de conflicto armado como para tratar de motorizar movilizaciones como la de 2011. Sin embargo, la idea se demostró falsa cuando en Sudán comenzaron protestas a fines de 2018 por un aumento en el precio del pan, y luego estas se apoderaron de Argelia, cuando el octogenario presidente Abdelaziz Butefflika anunció que se postularía para un quinto mandato. Ya en septiembre de 2019 se produjeron sorpresivas marchas en Egipto, que testimoniaban un desafío abierto al dominio del presidente Abdel Fatah al Sisi y fueron suprimidas por el gobierno dictatorial mediante una importante ronda de arrestos. En octubre, los iraquíes retomaron manifestaciones que habían iniciado un mes antes en protesta por la destitución de un respetado general y contra la corrupción de la clase política (sumado al pedido de una distribución más equitativa de la enorme riqueza petrolera del país). En noviembre, los libaneses salieron a las calles, indignados por un leonino impuesto a las llamadas de WhatsApp y Skype, medida que fue cancelada sin que el descontento mermara, para terminar transformándose en un pedido de renuncia del primer ministro –quien finalmente abandonó el poder– y de reforma de todo el sistema político sectario del país. También hubo protestas masivas en Irán contra un aumento en el precio de la gasolina que provocaron la más sangrienta represión en la calle desde que la Revolución Islámica se hiciese con el control del Estado hace 40 años.

En 2003, el ex-presidente estadounidense George W. Bush había citado la intención de promover la democracia en la región entre las razones por las que había ocupado Iraq y derrocado al partido Baaz, pero ese deseo preocupó tanto a las repúblicas (dictaduras) árabes como a las monarquías del Golfo, que creyeron que el político norteamericano se estaba tomando muy en serio su misión. A pesar de lo malogradas que hayan sido las políticas de Bush, ayudaron a democratizar parcialmente un país como Iraq, algo que de otra forma –bajo la férrea dictadura de Sadam Husein– habría sido por lo menos dificultoso. No obstante, después de exigirles a aliados y rivales de la zona que convocaran a elecciones y de que se dieran una sucesión de victorias electorales no deseadas (islamistas) en Egipto, Líbano y los territorios palestinos, Estados Unidos abandonó su agresiva postura de imponer la democracia en Oriente Medio (en Cisjordania y Gaza, Bush le exigió al líder palestino Mahmud Abás que convocara a elecciones para reafirmar su mandato luego de la muerte de Yasser Arafat, pero, a la vez, le recomendó que prohibiera la participación de la organización islámica terrorista Hamas en la contienda electoral)¹.

1. Beverly Milton Edwards y Stephen Farrell: *Hamas: The Islamic Resistance Movement*, Polity Press, Cambridge, 2010, p. 247.

Con la preocupación por la insurgencia iraquí contra sus tropas y con un Irán que comenzaba a expandirse por la región (por la mismísima obra y gracia de los estadounidenses que habían derrocado a Husein, el enemigo jurado de los iraníes hacia el oeste, y también a los talibanes afganos, los otrora rivales religiosos de los iraníes al este), la promoción estadounidense de la democracia árabe empezó a funcionar como un lujo secundario que –consideraron– debía esperar hasta un momento más propicio. La nueva percepción del gobierno neoconservador era que los islamistas usarían la reivindicación electoral para combatir la influencia estadounidense en la región. Por lo tanto, y ya sin el peso de la mayor potencia mundial sobre los hombros, los autócratas árabes se relajaron y volvieron a hacer lo que mejor sabían: mantener a sus respectivas poblaciones a raya utilizando todo el poder de un Estado que prácticamente llevaba sus nombres tatuados.

A partir de 2006, por ejemplo, Egipto experimentó la peor ola de represión contra la Hermandad Musulmana que se recuerde desde la década de 1960, mientras que Jordania, considerada por muchos como una monarquía constitucional que permitía el disenso, comenzó a cancelar su apertura y a volver al autoritarismo como único medio de defensa ante el avance del islamismo². Un año después, casi todos los países de la región, de una manera u otra, anularon sus avances democráticos, y en ese escenario llegó Barack Obama al poder en EEUU. Su idea principal –repitiendo un fallido intento de muchos de sus antecesores– era priorizar un acuerdo de paz israelí-palestino como manera de moderar a Oriente Medio, antes que promover una dinámica de democratización que pudiera colocar al gobierno estadounidense en la vereda de enfrente con respecto a sus aliados dictatoriales del mundo árabe.

Con la ulterior idea de contar con el apoyo de los líderes de la región para impulsar el proceso de paz, en 2009 Obama pronunció en El Cairo su famoso discurso para el mundo musulmán, donde exhortó a los pueblos de Oriente Medio a buscar la libertad y la democracia, a la vez que les aclaraba a sus despóticos líderes que EEUU no «impondría» la democracia sobre ellos. La ambivalencia de sus palabras tuvo interpretaciones dispares, pues instigó tanto la rebelión de las masas populares como el consiguiente uso de la fuerza de los dictadores autóctonos para

A partir de 2006, por ejemplo, Egipto experimentó la peor ola de represión contra la Hermandad Musulmana

2. Amr Hamzawy y Nathan J. Brown: «The Egyptian Muslim Brotherhood: Islamist Participation in a Closing Political Environment», Carnegie Papers For International Peace, 9/3/2010.

suprimirla. Una especie de ambigüedad política que no contentó a nadie mientras les dio rienda suelta a todos³.

Alertado por el doble discurso del presidente estadounidense, el gobierno de Mubarak inició una ofensiva contra los grupos de oposición y transformó las elecciones parlamentarias de 2010 en Egipto en los comicios más manipulados en la historia moderna del país. Los resultados le dieron más de 98% de los diputados al partido gobernante y la Hermandad Musulmana perdió 87 de los 88 representantes que tenía en el Parlamento⁴. Los números de la elección alertaron incluso a los propagandistas más convencidos del régimen, que esperaban un resultado más acorde a una realidad articulada, que les permitiese esgrimir ante los observadores del mundo que el conteo electoral era justo y legal. En vísperas de la segunda Primavera Árabe, Oriente Medio seguía siendo prácticamente la única zona mundial que no había sido tocada por las tendencias de democratización global que recorrieron el planeta en la década de 1990. Si bien existían todo tipo de regímenes, incluidos democracias sectarias (Líbano, Iraq), monarquías constitucionales (Kuwait, Jordania) y repúblicas autoritarias (Egipto, Túnez, etc.), no había ninguna democracia liberal totalmente consolidada.

Las percepciones generalizadas sobre las desigualdades económicas fueron otro de los motores de las protestas

Las percepciones generalizadas sobre las desigualdades económicas fueron otro de los motores de las protestas. En muchos países que experimentaron transiciones políticas, el deterioro de las condiciones económicas y el consiguiente descontento público precipitaron los intentos de cambio. La legitimidad de los regímenes se había basado en un contrato social que incluía un amplio empleo estatal, subsidios alimentarios y un gasto considerable en asistencia social, pero con el transcurrir de los años las fuerzas laborales empezaron a ser demasiado grandes para que el sector público las empleara y contuviera (la población de Egipto pasó de 26 millones de personas en 1960 a 100 millones en la actualidad, y se espera que en una década la fuerza laboral alcance a 80 millones de personas). Para muchos, la corrupción, la incompetencia y el autoritarismo de los regímenes, que parecían problemas soportables cuando el mundo vivía una polaridad política entre capitalismo y comunismo, se volvieron de pronto intolerables, el recuerdo del colonialismo extranjero se alejaba y la situación económica empeoraba: los procesos

3. E. Kopel: «El legado de Obama en Medio Oriente (y en el mundo)» en *Panamá*, s./f. <www.panamarevista.com/el-legado-de-obama-en-medio-oriente-y-en-el-mundo/>.

4. Shadi Hamid: *Temptations of Power: Islamists and Illiberal Democracy in a New Middle East*, Oxford, Oxford UP, 2014, p. 139.

de liberalización de la economía terminaron por beneficiar solo a las familias gobernantes, que usaron y abusaron de la información privilegiada para favorecer a sus parientes, seguidores y amigos. El rápido avance de la tecnología permitió a economías de países no muy lejanos adelantarse a los Estados de Oriente Medio, mientras que la proliferación de los medios de información modernos provocó que muchos experimentaran la revelación de que sus sistemas no eran libres ni pujantes.

Existen tantas ideas como personas acerca de por qué el mundo árabe no puede alcanzar un sistema de derechos individuales dentro de un gobierno participativo. Algunos sostienen que los orígenes tribales de la sociedad árabe han fomentado una cultura de sumisión a la autoridad. Otro grupo sostiene que la culpa es de la herencia y la excepcionalidad de una religión como el islam, en la que el líder es el Estado mismo. Y muchos apuntan a la ubicación del mundo árabe en el planeta, geografía en la cual los ingresos de vastas cantidades de petróleo se acumulan en las chequeras de sus despóticos líderes y les permiten profundizar el autoritarismo mediante la construcción de un aparato coercitivo, junto con la distribución del mecenazgo como medio de control.

Un cuarto conjunto de teorías se centra en los esfuerzos de las potencias extranjeras, particularmente de EEUU, para mantener un orden dictatorial regional que les permita proteger a aliados como Israel o Arabia Saudita (lo que hoy también ocurre con Rusia en relación con el régimen de Siria). Asimismo, las dictaduras árabes se han vuelto expertas en agitar el miedo como forma de autopreservación: maquiavélicamente, se han posicionado como la única alternativa –autoritaria sin más– que puede frenar el avance del islamismo o del radicalismo islámico, aunque ello implique cancelar o alterar elecciones para impedir el triunfo de los religiosos (es conocida la anécdota de 2008, cuando George W. Bush presionaba a Mubarak para que democratizara su país y el dictador egipcio le contestó que si así lo hacía, «la Hermandad Musulmana triunfaría»; a lo que el líder estadounidense replicó que lo que Mubarak debía preguntarse es por qué los islamistas triunfan cada vez que hay elecciones libres⁵). También, durante décadas, los hombres fuertes de la región habían tenido la astucia de canalizar la frustración ciudadana hacia rivales externos (Occidente, EEUU, Israel, etc.), con la intención de escapar del escrutinio popular.

No obstante, imprevistamente, el «manual» dejó de funcionar en 2010-2011, y por primera vez desde su independencia, las poblaciones de Oriente Medio enfocaron su descontento en sus propios regímenes y líderes. Más

5. Elliott Abrams: *Realism and Democracy: American Foreign Policy after the Arab Spring*, Cambridge UP, Cambridge, 2017, p. 85.

allá de cuál sea la mejor explicación de las causas de un autoritarismo con tanta resiliencia en Oriente Medio, la Primavera Árabe de 2011 rompió de cuajo la ilusión de invulnerabilidad de los dictadores autóctonos y todo cambió el 14 de enero de ese año, cuando los tunecinos derrocaron al presidente Zine el Abidine Ben Alí. Si bien las protestas se extendieron y atravesaron, de una manera u otra, la mayoría de las 22 naciones que componen el mundo árabe, las cinco más afectadas por el efecto dominó en esa oportunidad fueron todas repúblicas (y no monarquías): Túnez, Egipto, Libia, Yemen y Siria (esta última es la única de las cinco donde el dictador vitalicio, Bashar al-Asad, pudo conservar el poder utilizando toda la fuerza represiva a su disposición).

Antes de Túnez y desde la independencia de los países de Oriente Medio de las potencias europeas, no habían existido ejemplos exitosos de revueltas populares. Lo más cerca que estuvo un movimiento de masas de derrocar un sistema dictatorial fue en 1991, cuando el Frente Islámico de Salvación (FIS) argelino se impuso en las elecciones, lo que significó la primera vez que un partido opositor le ganaba al que ejercía el control del aparato estatal. Poco tiempo más tarde, con apoyo de Europa y EEUU, así como de los principales países de la región, el ejército anuló la elección, proscribió al FIS e inició una cruenta represión que envió a miles de islamistas a «gulags» en el desierto del Sahara.

Mientras que la importancia política de la Primavera Árabe ha sido comparada con la del colapso comunista de 1989 en Europa del Este, su papel histórico también puede equipararse con el de los movimientos de liberación nacional que recorrieron Oriente Medio a mediados del siglo xx. Pero los levantamientos de 2011 y 2019, aunque pueden reflejar su condición de movimientos de masas –por su similitud en escala con lo sucedido a mediados del siglo pasado contra la dominación inglesa y francesa–, son de una naturaleza diferente. En las décadas de 1950 y 1960, las luchas eran de naciones oprimidas (Egipto, Iraq, etc.) contra fuerzas extranjeras y monarquías tuteladas por poderes imperiales, y condujeron al establecimiento de repúblicas, en una poderosa oleada que alteró la historia de la región. En cambio, en estos años, la agitación política ya no surge principalmente de la disputa de personas de las clases medias y bajas contra el imperialismo y el colonialismo (aunque existan sin duda factores hegemónicos, tanto regionales como internacionales), sino de sus reclamos frente a la corrupción, la injusticia y el autoritarismo de los gobiernos nacidos tras la independencia. Los movimientos de liberación nacional, si bien acabaron con el dominio extranjero, inauguraron un control autoritario autóctono que, a pesar de denominarse patriótico o anticolonialista, continuó utilizando los mismos métodos de dominio empleados por los Estados coloniales



(estado de sitio, detenciones sumarias, etc.) para mantener vigiladas a sus respectivas poblaciones.

Es preciso destacar que la ola de cambio que se extendió por Europa del Este después de la caída del Muro de Berlín ocurrió bajo condiciones internas y externas mucho más favorables que las transformaciones ocurridas en la Primavera Árabe. La eliminación del apoyo soviético debilitó de manera uniforme la supervivencia de los regímenes autoritarios, y la integración europea alentó la ola de democratización. Los regímenes árabes son más diversos que las antiguas dictaduras de Europa del Este, incluso con respecto a sus estructuras de apoyo internas (las elites se encuentran unidas contra el avance de una democracia que puede poner al islamismo en el poder, y existen actores externos, como Rusia, que han sostenido a aliados locales, como la familia Asad en Siria). En otras palabras, la Primavera Árabe ha generado presión para un cambio político, pero también ha despertado a las fuerzas contrarrevolucionarias –locales y extranjeras–, que han empleado sofisticados aparatos de control represivo para detenerla.

Los regímenes árabes son más diversos que las antiguas dictaduras de Europa del Este

Así, los gobernantes, desde Baréin hasta Marruecos, aprendieron a contener las demandas populares y a reafirmar el control sobre sus sociedades, mientras reajustaban sus fórmulas de gobierno con la clara intención de limitar cualquier tipo de cambio estructural que implique rehacer sus respectivos Estados por completo. Todo esto dificultó desde el principio el cambio del régimen sin un colapso total del Estado, como aconteció en Iraq luego de la remoción de Saddam Husein: una vez que se eliminó su liderazgo y se destruyó al partido Baaz, junto al ejército que lo sostenía, toda la estructura estatal se derrumbó y hubo que reconstruir el Estado por completo, con los problemas ya conocidos.

La atención gira entonces hacia la dinámica de los gobiernos autoritarios y las estrategias que los autócratas y militares árabes han desplegado para preservar su control del poder. Como quedó en evidencia en 2013 en Egipto, con el golpe de Estado contra el gobierno islamista elegido por voto popular, estas adaptaciones han sido decididamente represivas y excluyentes, pero no siguen una guía de procedimientos uniformes. Sus cursos de acción han variado, desde las estrategias de contención empleadas en Jordania, Kuwait y Marruecos hasta los enfoques más violentos en Egipto, Arabia Saudita, Baréin y Siria (como también en Irán, para evitar una «Primavera Persa»). A pesar de sus diferencias, todas estas experiencias se destacan por un constante aprendizaje de nuevas formas de control que garantizan la adaptabilidad y la supervivencia de los sistemas autoritarios de dominación.

Muchos de los Estados autoritarios se mantuvieron fuertes, respaldados por redes de mecenazgo, intereses creados y apoyo regional. Asimismo, los movimientos de oposición fueron socavados por desacuerdos ideológicos, divisiones étnicas y la represión decidida y brutal –junto con los cálculos de poderes distantes que salieron a proteger a sus aliados–, a la que el ímpetu de jóvenes con consignas inspiradoras no pudo hacer frente. Un factor clave, a menudo dejado de lado, fue que algunos de los habitantes de países tan disímiles como Egipto, Siria, Arabia Saudita e Irán no admiraban los sistemas y estilos de vida de Occidente tanto como algunos comentaristas extranjeros creían y, a la vez, la relación de muchos de los supuestos liberales locales con la democracia, las libertades individuales y la participación de islamistas en la vida política era (¿es?), por lo menos, dudosa y conflictiva. De esta manera, aquellos que buscaban el cambio se unieron en torno de demandas elásticas y mal definidas, que si bien permitieron que diferentes tendencias religiosas y políticas pudiesen compartir el mismo espacio, hicieron que se volviera imposible entregar una «hoja de ruta» clara y realista que marcara hacia dónde ir.

Una de las características que agruparon a las distintas manifestaciones de la primavera de 2011 fue su naturaleza esencialmente árabe. Las demandas de los manifestantes se centraron en cuestiones nacionales que no cruzaban las fronteras y, sin embargo, la Primavera Árabe no fue un fenómeno local, sino una corriente opositora que podía extenderse para atacar a diferentes regímenes. Es decir, tuvo un efecto dominó. Tristemente, otra peculiaridad compartida estuvo en la imposibilidad de materializar una victoria concluyente. Con pedidos lejanos a una posible realidad, los diversos manifestantes no distinguieron entre los lemas flexibles que se pueden escribir en las redes sociales y la acción política producto del poder real. La idea de que era posible un nuevo paradigma, sin programas políticos y, principalmente, sin líderes que estuvieran listos para tomar el poder, llevó a que en muchos países las fuerzas represivas tuviesen el tiempo suficiente para reagruparse y contraatacar con todo su aparato.

Ya en septiembre de 2011, los analistas Rob Malley y Hussein Agha, en un ensayo publicado en la revista *New York Review of Books* que aún hoy sorprende por su vigencia anticipatoria, alertaban que en el futuro los levantamientos serían extremadamente caóticos y hasta podrían resultar en una guerra regional, como luego ocurrió en Siria:

Las revoluciones devoran a sus hijos. El botín va al resuelto, al paciente, que sabe lo que persigue y cómo lograrlo. Las revoluciones casi invariablemente son asuntos de corta duración, estallidos de energía que destruyen mucho en su camino, incluidas las personas y las ideas que los inspiraron. Así es con el levantamiento árabe. Traerá cambios radicales.

Potenciará nuevas fuerzas y marginará a otros. Pero los jóvenes activistas que primero llenaron las calles tenderán a perder en las escaramuzas que vendrán. El público en general podrá estar agradecido por lo que han hecho, a menudo los admiran y los tienen en alta estima. Pero no sienten que sean parte de ellos. La condición habitual de un revolucionario es ser descartado (...). Es muy probable que en el futuro inmediato del mundo árabe se desarrolle una disputa compleja entre el ejército, los restos de los viejos regímenes y los islamistas, todos ellos con raíces, recursos, así como con la capacidad y la fuerza de voluntad para dar forma a los acontecimientos. Los partidos regionales tendrán influencia y los poderes internacionales no se abstendrán de participar. Hay muchos resultados posibles, desde la restauración del viejo orden hasta la toma de poder militar, desde la fragmentación rebelde y la guerra civil hasta la progresiva islamización. Pero el resultado que muchos extraños esperaban, una victoria de los manifestantes originales, es casi seguro que no ocurra.⁶

Después del «Invierno Árabe» de 2013 (periodo en el que se desataron sin control las fuerzas contrarrevolucionarias, cuando en solo una semana de agosto más de 800 egipcios fueron masacrados mientras protestaban por el golpe militar contra el gobierno –democrático, por cierto– de la Hermandad Musulmana, y otros 1.000 civiles sirios fueron gaseados con armas químicas por el gobierno de Bashar al-Asad en un suburbio de Damasco), parecía que los autócratas y dictadores de Oriente Medio lograrían imponer sus designios a sangre y fuego. La condena internacional fue por lo menos escasa (si en 2011 Obama había decidido apoyar a quien se impusiese en las urnas, en 2013 el propio gobierno norteamericano evitó denominar la interrupción democrática como un golpe de Estado, con el objetivo de no detener la ayuda militar al ejército egipcio, según una ley estadounidense que exige un corte inmediato en caso de un golpe⁷) y las narrativas locales gubernamentales relataron ambos hechos como las únicas alternativas para que radicales islámicos no tomaran el poder.

Asimismo, Libia y Yemen –luego de ser abandonados por el mundo– se sumieron en respectivas guerras civiles, y los levantamientos en Baréin y el este de Arabia Saudita fueron reprimidos sin pausa por las monarquías sunitas. En Siria, el presidente Bashar al-Asad convirtió a la mitad de su

6. H. Agha y R. Malley: «The Arab Counterrevolution» en *The New York Review of Books*, 29/11/2011.

7. David D. Kirkpatrick: «That Time Obama Wouldn't Call a Coup a Coup: A Very Short Book Excerpt» en *The Atlantic*, 9/2018.

población en refugiada y desarrolló campos de exterminio mientras luchaba contra una oposición que tomó las armas cuando las manifestaciones pacíficas fueron aniquiladas. Por su parte, la Mukhābarāt, la agencia de inteligencia siria, buscó redefinir el conflicto interno como una guerra etnosectaria, a sabiendas de que en las guerras civiles de ese estilo es poco probable alcanzar una resolución democrática cuando la disputa llega a un punto muerto.

Las rivalidades geopolíticas de la región (Arabia Saudita, Irán, Qatar, Emiratos Árabes, Turquía, entre otros) se hicieron presentes en casi todos los conflictos para apoyar sus respectivas agendas y transformar todo en un rompecabezas irresoluble⁸. También el deseo de retirada de EEUU como mediador o policía de la región trajo aparejado que Rusia, una potencia más débil pero mucho más resoluta, ocupase su lugar. Pero la novedad del cambio no trajo ninguna buena noticia para los manifestantes de la región: el presidente ruso Vladímir Putin considera que las sociedades de Oriente Medio no están maduras para la democracia, que la política prodemocracia de EEUU ha generado un caos extendido que desembocó en el yihadismo islámico y que solo hombres fuertes o una autoridad estatal poderosa pueden administrar los Estados de esa latitud del mundo (lo mismo entiende para Rusia, por otra parte).

Cuando más de un observador creía que los vientos de cambio habían sido suprimidos para siempre mediante una combinación de represión e intervención regional y extranjera sin precedentes, llegó 2019 para despertar tanto a escépticos como a futurólogos. Así fue como los sudaneses, a pesar de sufrir divisiones tribales y étnicas, derrocaron a Omar al-Bashir (luego de 30 años en el poder), en una revuelta ciudadana que se impuso sobre la maquinaria de un Estado militar que mató a 1.000 personas. Los argelinos sacudieron el país en febrero del mismo año saliendo por millones a las calles, en un impresionante movimiento social, para exigir el fin del mandato de 20 años del presidente Buteffika, quien terminó renunciando en abril, sin que la acción detuviera el pedido de retirada de una elite —empresarios amigos y políticos militares— que controla el país. En el Líbano, los líderes sectarios siguen tratando de salvar un sistema que garantiza su poder y riqueza a costa de los deseos de su pueblo, y en Iraq, los manifestantes continúan manteniendo su posición

Putin considera que las sociedades de Oriente Medio no están maduras para la democracia

8. Una de las claves por las cuales Túnez fue el único país en la segunda Primavera Árabe que pudo realizar exitosamente su transición a un sistema democrático es que no está involucrado en disputas geopolíticas como los otros países que vivieron levantamientos.

en las protestas más grandes y prolongadas de la historia moderna del país, contra un gobierno corrupto que obedece más los dictados de las milicias proiraníes que hoy lo sostienen (secuestrando y matando a activistas y opositores) que a su propia población.

Las debilidades y los desafíos de las actuales manifestaciones parecen ser los mismos que los de la segunda Primavera Árabe: expectativas no muy bien definidas y, principalmente, ningún liderazgo establecido. A pesar de que se han movilizado sin la participación clara de ningún grupo político organizado, el éxito de los respectivos movimientos con el paso del tiempo está supeditado a la capacidad de estos de establecer una agenda posible, que convierta la movilización de la calle en una fuerza política organizada que no solo sorprenda a los políticos y militares gobernantes, sino que también se convierta en una alternativa que pueda imponerse electoralmente. La necesidad de mantener las protestas dentro de contornos no violentos en países que hasta no hace mucho vivieron guerras civiles parece ser otra de las imperiosas lecciones del pasado.

Los levantamientos de 2011 fueron un momento decisivo para Oriente Medio, pues alteraron la psiquis de los habitantes del lugar, que pasaron de resentir fabricadas amenazas externas a sufrir fácticos problemas internos. Si bien es temprano para dilucidar si las movilizaciones repetirán las dinámicas del pasado o tendrán un mejor devenir, lo que sí está claro es que hoy a los gobiernos autoritarios de la región les resulta más difícil mantener el poder junto con la estabilidad represiva y desigual que ejercen: el legado más perdurable de las revueltas (sin contar la exitosa transición tunecina, en la que islamistas y seculares pudieron acordar un programa para democratizar el sistema político) es la ruptura del «factor miedo» y el deseo de demostrar ese cambio.

Una primera impresión puede sugerir que el injusto orden político de Oriente Medio sigue vivo y alerta, pero el impacto de las protestas ha sido profundo. Y como bien nos recuerda el estudio de la historia, esta no tiene fin, no está escrita y sigue su curso. ☐

Los «chalecos amarillos» y la representación política

Rémi Lefebvre

El movimiento de los *gilets jaunes* expresó sentimientos profundos de injusticia que ya no están representados, expresados ni politizados por los sindicatos o las organizaciones de izquierda tradicionales. El rechazo a toda representación, que constituyó su fuerza, condujo no obstante al debilitamiento del movimiento. Esta dinámica de desintermediación de la política no es exclusiva de Francia: socava al conjunto de las democracias occidentales.

Los *gilets jaunes* (chalecos amarillos) estuvieron en gran medida ausentes del proceso de las elecciones europeas. Si bien dominaron la agenda política y mediática durante seis meses y desestabilizaron al poder vigente, marcaron muy poco la campaña electoral, cuyo resultado consolidó la posición de La República en Marcha (*La République en marche*), la agrupación de Emmanuel Macron, y confirmó el sismo electoral de 2017. Sin duda alguna, el movimiento produjo efectos estructurales de politización y socialización, y no se descarta que viva un resurgimiento, pero en el corto plazo parece licuarse y disolverse. El orden electoral y la política instituida recuperaron sus atribuciones

Rémi Lefebvre: es politólogo. Sus investigaciones se centran en los partidos políticos, sobre todo el Partido Socialista francés, el poder local y las movilizaciones electorales. Entre otros libros, es autor de *La société des socialistes* (con Frédéric Sawicki, La Découverte, París, 2006).

Palabras claves: «chalecos amarillos» (*gilets jaunes*), democracia, representación, Francia.

Nota: la versión original en francés de este artículo, con el título «Les gilets jaunes et les exigences de la représentation politique» fue publicada en *La Vie des Idées*, 10/9/2019, disponible en <<https://laviedesidees.fr/Les-Gilets-jaunes-et-les-exigences-de-la-representation-politique.html>>. Traducción: Gustavo Recalde.

y reimpusieron sus códigos. Esta restauración era previsible. Pero esta situación remite también a las contradicciones y las aporías del movimiento, que pueden analizarse mediante un repaso de los últimos meses.

Los «chalecos amarillos» participan de la dinámica sociopolítica actual de desintermediación (cuyo espejo invertido es el macronismo). El movimiento se desarrolló fuera de las estructuras organizadas (partidos y sindicatos), desacreditadas y poco representativas, y esta subversión de los marcos tradicionales fue una condición de posibilidad tanto de su desarrollo como de su éxito. El movimiento logró estructurarse sin apoyarse en una organización. A lo largo de las semanas, al afirmarse la intención de ser más que un movimiento de protesta fugaz, surgieron aspiraciones a la formalización. Sin embargo, estas resultaron rápidamente contradictorias y, al rechazar la representación en todas sus formas (liderazgo personalizado, ingreso en la arena electoral, organización), el movimiento se fue debilitando a lo largo del tiempo. Los «chalecos amarillos» revelan la descomposición de los canales políticos tradicionales, pero también la necesidad de mediaciones y la exigencia insuperable de la representación en las reglas del marco democrático dominante, cuya legitimidad es, sin embargo, cada vez más frágil.

En primer lugar, haremos un repaso de la dinámica de desintermediación política y analizaremos cómo el movimiento pudo desarrollarse fuera de las estructuras existentes y, al mismo tiempo, organizarse. Mostraremos luego por qué su desmovilización se debe en parte a su incapacidad para formalizar una estrategia y a su rechazo de toda forma de mediación representativa.

Un proceso multiforme de desintermediación política

En pocos meses, La República en Marcha y los «chalecos amarillos» fueron dos manifestaciones del proceso en curso de desintermediación política. Todo parece *a priori* enfrentar a estos dos emergentes sociopolíticos: sus consignas, su estilo, su geografía social o las adscripciones sociales de sus participantes. Ambos movimientos son ideológica y sociológicamente opuestos. Sin embargo, son las dos caras de una misma moneda: la del debilitamiento del sistema partidario y de las organizaciones tradicionales. Participan de la afirmación de la «democracia de audiencias», que se libera de las instituciones de la sociedad civil y las elites tradicionales¹. Estos movimientos no son producto de tradiciones organizativas ni de culturas políticas o

1. Gérard Noiriel hace referencia en diversas entrevistas al concepto de Bernard Manin. Ver Nicolas Truong: «Gérard Noiriel: 'Les gilets jaunes replacent la question sociale au centre du jeu politique'» en *Le Monde*, 27/11/2018.

filiaciones intelectuales preestablecidas, sino que surgieron en relación con una coyuntura y una actualidad precisas, de una lógica de situación, en apariencia *ex nihilo*². Pocos meses después, subvirtieron y desestabilizaron el sistema político: *por arriba*, el movimiento de Macron, más elitista; *por abajo*, los «chalecos amarillos», más cercanos a una base popular (con contornos complejos y variables, según las configuraciones territoriales). Hicieron irrupción en la «vieja política» y el «viejo mundo» de las organizaciones rompiendo los códigos dominantes. Se observa en ambos casos un rechazo de la «vieja política» y una aspiración a la desprofesionalización de la política que participan de una tendencia común expresada en la demanda de «que se vayan» (*dégagisme*). Movimientos *improbables* en muchos aspectos alteraron los esquemas de análisis de los observadores y los actores dominantes que no los habían anticipado y generaron un sinfín de interpretaciones, en la medida en que desestabilizan las rutinas analíticas de los investigadores³. Ambos movimientos se estructuraron también bajo formas en un sentido similares (de manera horizontal y a partir de las redes sociales, sin estructura preestablecida), pero a la vez muy diferenciadas (personalización muy fuerte en torno de un líder, por un lado; rechazo de todo liderazgo y cuestionamiento del principio mismo de representación, por el otro). Sin disponer en absoluto de los mismos recursos iniciales, ambos movimientos «hackearon» e ignoraron a los actores representativos tradicionales del sistema político.

**Ambos movimientos
«hackearon» e
ignoraron a los actores
representativos
tradicionales**

Así, La República en Marcha y los «chalecos amarillos» son tanto el producto como el germen de una dinámica de *desintermediación* de la política que no es exclusiva de Francia, sino que socava el conjunto de las democracias occidentales. Encarnan los intereses de grupos sociales invisibilizados o negados, que ya no se sentían representados. Las mediaciones tradicionales son ignoradas por organizaciones o movimientos que surgen y las desestabilizan utilizando las redes sociales, las plataformas y formas a la vez horizontales y verticales de movilización. Así, traducen cada uno a su manera la descomposición de las organizaciones políticas y el debilitamiento de su anclaje social.

Pero allí donde La República en Marcha logró ingresar en la política e integrarse en el sistema institucional (así como el Movimiento 5 Estrellas,

2. Especialmente en el caso de La República en Marcha, no se deben pasar por alto los fenómenos de reconversión y continuidad.

3. Bernard Dolez, Julien Fretel y Rémi Lefebvre: «Introduction générale. La science politique mise au défi par Emmanuel Macron» en B. Dolez, J. Fretel y R. Lefebvre (dirs.): *L'entreprise Macron*, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2019.

aunque de un modo diferente, lo hizo en Italia), reafirmando algunas de sus tendencias (presidencialización y ultrapersonalización⁴), el movimiento de los «chalecos amarillos» se debilitó (gozando de un alto y persistente apoyo de la opinión pública), en parte porque no supo ofrecer una salida política a la movilización. La dificultad para estructurar el movimiento o el fracaso de sus listas en las elecciones europeas son fenómenos emblemáticos de este proceso. El movimiento reveló la descomposición social de partidos en ingravidez social y la inadaptación de los sindicatos a las transformaciones del mundo del trabajo. Demostró también la capacidad de organizarse fuera de las estructuras de representación. Pero este aspecto se transformó en debilidad y puso en jaque la durabilidad del movimiento y sus «salidas» políticas.

Una movilización por fuera de los partidos y sindicatos

Un movimiento social «autoorganizado», que surge y se desarrolla fuera de los canales tradicionales de la protesta y la representación social, no es un fenómeno novedoso. Pensemos en las «coordinadoras» en los años 1980. Estas estaban sin embargo estrictamente correlacionadas y confinadas a un sector profesional asalariado y fueron en gran medida impulsadas por militantes de la «izquierda sindical», provenientes sobre todo de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo. Habían designado interlocutores para negociar con el gobierno. El movimiento de los «chalecos amarillos» es mucho más amplio y reúne a un sector importante de adherentes que se involucran por primera vez. Es emblemático de lo que el sociólogo Albert Ogien denomina «prácticas políticas autónomas» que se desarrollan al margen de las instituciones tradicionales de la democracia representativa: agrupaciones, plataformas políticas e incluso nuevos partidos, como Momentum en Gran Bretaña, el Tea Party en Estados Unidos, el Movimiento 5 Estrellas en Italia, los indignados en España, etc., que no siempre buscan la conquista del poder del Estado, sino que establecen contrapoderes democráticos y son factores de cambio social⁵. El *modus operandi* clásico de las movilizaciones iniciadas por las organizaciones tradicionales es el siguiente: lanzan una convocatoria, fijan una fecha y un lugar, organizan el traslado de los movilizados con ómnibus y buscan llamar la atención de los medios de comunicación y de los gobernantes.

4. ¿Las clases dominantes serían, contrariamente a la creencia popular, menos resistentes a entregarse a un líder?

5. Ver A. Ogien: «Le spectre de la démocratie directe» en *Libération*, 31/1/2019.

La acción colectiva de los «chalecos amarillos» no rompe totalmente con ello: en efecto, hubo un llamado a la movilización el 17 de noviembre de 2018, organizado con mucha antelación. Pero la dinámica fue por lo general espontánea, descentralizada, al principio esencialmente local (el movimiento se nacionalizó rápidamente a través de los canales de noticias en continuo y las marchas a la capital los sábados). El modo de movilización que altera los esquemas de análisis clásicos es aquí molecular, sin centro ni líder, y no está encuadrado ni por un partido ni por una organización sindical. El movimiento logró imponer su vocabulario y sus símbolos y puntos de concentración: los chalecos amarillos en las rotondas.

En esta lógica, los repertorios de acción tradicionales se encuentran desfasados. El poder está desconcertado frente a un movimiento sobre el cual no tiene influencia y que se niega a generar interlocutores para negociar. El juego representativo tradicional se basa en una división del trabajo entre partidos y sindicatos: la defensa de los intereses sectoriales corresponde a los sindicatos y la tarea de articular esos reclamos con propuestas políticas a través de la mediación de las instituciones políticas atañe a los partidos. El modelo de las «prácticas políticas autónomas» altera ese juego establecido y en gran medida agotado. El movimiento actuó como un indicador del desmoronamiento de las organizaciones políticas: desvitalizadas y demasiado encerradas en sus juegos u objetivos propios, ya no inciden en el debate público ni logran definir la agenda pública. La protesta social pasa por otros canales.

La incompreensión de los sindicatos –y particularmente la Confederación General del Trabajo (CGT)– es en este aspecto elocuente. Al principio, ignoraron por completo a un movimiento que sin duda no comprenden porque se creó fuera de las empresas, prospera en desiertos sindicales y es sociológicamente heterogéneo. Un dirigente lionés señalaba, tras concluir el congreso de la CGT en mayo de 2019, este desconcierto: «Por primera vez, estalló un movimiento poderoso en el que no tuvimos nada que ver»⁶.

Rápida y estratégicamente, la CGT lo identificó con la extrema derecha y pensó que se trataba de algo pasajero. Particularmente bajo el efecto de la profesionalización del trabajo sindical, los responsables sindicales están cada vez más desfasados de aspiraciones sin embargo cercanas al centro de su labor reivindicativa, defendidas por muchos trabajadores pobres, jubilados

El movimiento logró imponer su vocabulario y sus símbolos y puntos de concentración

6. Raphaële Besse Desmoulières: «Au congrès de la CGT, les ‘gilets jaunes’ occupent les esprits» en *Le Monde*, 17/5/2019.

humildes o jóvenes con empleo temporario⁷. Como mostró el sociólogo del sindicalismo Karel Yon, en esta situación también intervienen factores coyunturales: los sindicatos estaban centrados en sus propios juegos cuando surgió el movimiento (los escándalos en Fuerza Obrera que condujeron a la renuncia de Pascal Pavageau, las elecciones profesionales, etc.)⁸. La CGT buscó luego aproximarse a los «chalecos amarillos». A mediados de diciembre, se intentaron maniobras de acercamiento, pero la consigna común en favor de la huelga no tuvo éxito.

Los partidos políticos, por su parte, no ejercen ninguna influencia en el movimiento. *Le Monde* señala el 6 de febrero de 2019, en una investigación minuciosa respecto de los principales grupos de Facebook de los «chalecos amarillos», que los «discursos y argumentos de los partidos políticos tradicionales solo ocupan un lugar marginal, incluso anecdótico». Agrupamiento Nacional o Francia Insumisa⁹ están muy poco instalados en la Francia de las ciudades medianas o periurbanas. Los trabajos sobre la implantación electoral de la extrema derecha en estos territorios muestran que esta no tiene una verdadera implantación militante. Recordemos que Agrupamiento Nacional posee solo una veintena de sedes ¡en toda Francia!¹⁰.

Los partidos no representan a la Francia «de los sectores medios bajos» que son el corazón sociológico del movimiento¹¹. Los profundos sentimientos de injusticia que han expresado los «chalecos amarillos» ya no están representados, expresados, politizados por las organizaciones de izquierda tradicionales, incluyendo las más radicales como Francia Insumisa. Aunque aprueban el pedido de «que se vayan» de Jean-Luc Mélenchon (la «revuelta ciudadana» contra las elites, la autoorganización del pueblo), su sector se mostró incapaz de hegemonizar el movimiento. Francia Insumisa está en lo esencial anclada sociológicamente en los empleados públicos, los universitarios desclasados o la «Francia de los barrios» (un tercio de los diputados de Francia Insumisa fueron elegidos en Seine-Saint-Denis¹²), segmentos poco presentes entre los «chalecos amarillos» movilizados. En el viejo lenguaje de la ciencia política, los «chalecos amarillos» demuestran

7. Guillaume Gourgues y Maxime Quijoux: «Syndicalisme et gilets jaunes» en *La Vie des Idées*, 19/12/2018.

8. K. Yon: «Les syndicats dans la roue des Gilets jaunes» en «*Gilets jaunes*». *Hypothèses sur un mouvement*, La Découverte, París, 2019.

9. Movimiento de izquierda fundado en 2016 y liderado por Jean-Luc Mélenchon [N. del E.].

10. R. Lefebvre: «Des partis en apesanteur sociale?» en Igor Martinache y Frédéric Sawicki (dirs.): *La fin des partis?*, PUF / La Vie des Idées, en prensa.

11. Isabelle Coutant: «Les 'petits-moyens' prennent la parole» en Joseph Confavreux: *Le fond de l'air est jaune*, Seuil, París, 2019.

12. Ciudad obrera del «cinturón rojo» que hoy acoge uno de los mayores centros de negocios de Île-de-France [N. del E.].

que la *función tribunicia* ya no es ejercida por ninguna organización. Otra desempeñada por el Partido Comunista, permitía encarnar la protesta social y organizarla, pero también canalizarla. En ausencia de esta regulación, el movimiento de los «chalecos amarillos» adquirió un carácter relativamente incontrolable y no pudo contener la violencia en su seno.

En cuanto a La República en Marcha, esta demostró que su mayoría parlamentaria en gran medida está políticamente desarraigada. Los 300 diputados macronistas solo tienen una débil influencia en sus territorios locales de elección y fueron con frecuencia mucho más blancos de críticas que mediadores. La secuencia mostró que La República en Marcha paga el precio de la ausencia de un verdadero partido en el cual apoyarse. La casi totalidad de los partidos de oposición buscaron apropiarse del movimiento desde modalidades y ángulos diferentes (Los Republicanos lo vieron primero como la ratificación de su retórica contra los impuestos), pero sin verdadero éxito. La intención de incluir a toda costa al movimiento en las categorías interpretativas de la política y los esquemas partidarios resultó un fracaso. Indudablemente, su composición social heterogénea no era «apropiable» por parte de los partidos. François Dubet lo recuerda: las organizaciones partidarias son la herencia del «régimen de clases sociales»¹³. Las clases ofrecían una representación unificada y estable de las desigualdades y forjaban identidades colectivas. Los partidos se acoplaban (parcialmente) a esas identidades y las alimentaban. Les daban a los dominados una forma de dignidad integrándolos. Los «chalecos amarillos», por su parte, expresan una forma de individualización del descontento social que vuelve problemática su agregación en reivindicaciones más articuladas, aun cuando Dubet subestime, equivocadamente según nuestro criterio, la dimensión colectiva y política del movimiento.

Esta ausencia general de influencias partidarias y esta sensación de que el movimiento escapa a todos los marcos de la política representativa alimentaron la percepción de que existía una crisis política. El movimiento resultó de hecho apartidario y/o antipartidario. Según una encuesta realizada por un equipo de politólogos de Grenoble, 60% de los consultados no se ubican en el eje izquierda/derecha (rechazan ese eje) y 8% ni a la izquierda ni a la derecha (niveles de desafiliación mucho más altos que en la población francesa en general)¹⁴. Una inmensa desconfianza respecto de las organizaciones políticas y del mecanismo representativo surge del material recogido por los

La intención de incluir a toda costa al movimiento en las categorías interpretativas de los esquemas partidarios resultó un fracaso

13. F. Dubet: *Le temps des passions tristes. Inégalités et populisme*, Seuil, París, 2019.

14. «Qui sont vraiment les 'gilets jaunes'? Les résultats d'une étude sociologique» en *Le Monde*, 26/1/2019.

investigadores. La crítica a los partidos va de la mano de una concepción aconflictiva y consensuada de la política, de la creencia de que los intereses de cada uno pueden respetarse y de una representación monista e idealizada del «pueblo», al que no se piensa como atravesado por conflictos de clases. La desconfianza apunta a las elites políticas y de la política profesional («el pueblo contra los gobernantes»¹⁵) y muy poco a la patronal, apenas cuestionada. Aquí también, la heterogeneidad social del movimiento y su diversidad ideológica son un obstáculo a toda politización conflictiva.

Tal como lo señala Samuel Hayat:

el movimiento de los «chalecos amarillos» se opone a los tecnócratas pero retoma en gran medida su concepción peyorativa de la política partidaria y la manera de pensar la acción pública. El ciudadanía es el equivalente democrático del macronismo; ambos nos dicen que hay que acabar con las ideologías: tanto uno como otro reducen la política a una serie de problemas que hay que resolver, preguntas que hay que responder.¹⁶

Una forma de organización sui géneris

Los «chalecos amarillos» no son sin embargo un movimiento social salvaje, que rechaza toda forma de intermediación. Si bien el movimiento prescindió de una organización, estructuró su accionar articulando hábilmente y de manera multicentrada la dimensión territorial y la digital, las luchas alrededor de las rotondas y las redes sociales, las acciones en las provincias y las manifestaciones en París. En efecto, se produjo un trabajo de *mediación* política y social sin organización ni representación en sus formas habituales.

Una vez más, el movimiento demuestra el potencial de movilización que ofrece internet y su capacidad de ampliar el acceso a la palabra pública. Las redes sociales y su viralización ocuparon un lugar en la organización. Tienden a funcionar como vectores y propulsores contestatarios poderosos, que permitieron unir a gente desconocida en forma inmediata y coordinar apoyos y consignas. Facebook se impuso rápidamente como la «rotonda de las rotondas» y una forma de «asamblea general» permanente y explosiva del movimiento.

Otorgándoles un carácter no jerárquico, las redes generaron fenómenos de liderazgo localizados y luego nacionales que no deben menospreciarse. Se opera, así, una forma de reintermediación digital. A través de las redes sociales, el movimiento también produjo y estableció su propia comunicación fuera de los

15. Desde este punto de vista, los «chalecos amarillos» marcan un deslizamiento del «populismo» del campo político al social.

16. AAVV: «L'économie morale et le pouvoir» en J. Confavreaux: ob. cit.

canales mediáticos tradicionales e impuso progresivamente su lenguaje y sus códigos en los estudios de televisión, que se volvieron ávidos de figuras «ordinarias» y anónimas. Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. parecen haber reducido la ventaja estructural que las élites o las organizaciones tradicionales tienen sobre los ciudadanos o las poblaciones dominadas, a saber, el monopolio de las opiniones, el control de la agenda, el orden del día, aquello de lo que se habla, «lo que pasa» y lo que es importante.

El movimiento cumplió otra función sin tener una organización formal. Se desarrolló poco a poco un trabajo de elaboración de una línea política, desde luego de manera fragmentada, pero que condujo a una ampliación de la causa inicial (la oposición al impuesto al combustible, detonante de la movilización) a demandas de carácter más general. Los «chalecos amarillos» permitieron compartir los sufrimientos sociales, que se volvieron públicos, y alentaron relatos de penurias individuales, pero este papel meramente expresivo fue superado progresivamente por la transmutación de las penurias individuales en una causa colectiva que emergió aun en la confusión. Los «chalecos amarillos» fueron a menudo analizados principalmente como la expresión negativa de una protesta o de «pasiones tristes», retomando la expresión bastante despectiva de Dubet. Pero este enfoque no hace justicia al trabajo político desarrollado, aunque haya ocurrido de manera desordenada.

Se articularon principios de justicia social, dignidad, reconocimiento, mucho más allá de los reclamos puntuales iniciales. El 28 de noviembre se publicó una lista de 42 demandas relativamente coherente¹⁷. De hecho, los «chalecos amarillos» lograron interconectar una serie de desigualdades a partir de una cuestión de poder adquisitivo ligada al impuesto al combustible. Si bien los reclamos fueron creciendo a menudo de manera contradictoria y sin prioridades, formando un listado inconexo¹⁸, lograron finalmente introducir la justicia social en el corazón del debate público.

La encuesta de Jean-Yves Dormagen y Geoffrey Pion en Dieppe muestra el apoyo unánime a un núcleo de reivindicaciones en torno de una agenda de justicia social. La revalorización del salario mínimo, el restablecimiento del impuesto de solidaridad a la fortuna y el aumento de las jubilaciones generaron la aprobación de 90% de las personas consultadas¹⁹.

Los «chalecos amarillos» permitieron compartir los sufrimientos sociales, que se volvieron públicos

17. Patrick Farbiaz: *Les Gilets jaunes. Documents et textes*, Éditions du Croquant, Vulaines-sur-Seine, 2019.

18. El rechazo al gasto público y a los impuestos coexiste de manera problemática con la demanda de intervención del Estado.

19. J.-Y. Dormagen y G. Pion: «Le mouvement des 'gilets jaunes' n'est pas un rassemblement aux revendications hétéroclites» en *Le Monde*, 27/12/2018.

Además de la estructuración de la opinión pública, el movimiento asumió otra función que los partidos y organizaciones políticas ejercen cada vez menos: la de sociabilidad, solidaridad y socialización²⁰. Las encuestas o los medios de comunicación dieron cuenta de la convivencia en las rotondas y de la fraternidad y la ayuda mutua que las animaban. Los «chalecos amarillos» revelaron la soledad y la desocupación, especialmente de las mujeres solas muy presentes en el movimiento, pero también la aspiración al intercambio, la ayuda, la reciprocidad. Todos estos son valores que tienden a desaparecer de los partidos de izquierda, cuya sociabilidad se debilita y que son cada vez menos lugares de convivencia y conocimiento mutuo. Estos intercambios y estas relaciones sociales fueron también el crisol de un proceso de politización y aprendizaje de la política.

Los dilemas estratégicos del movimiento

Esta autoorganización fue eficaz, pero pronto se planteó la cuestión de la durabilidad del movimiento y, luego, la de su organización. Si bien el juego representativo fue subvertido, este impone a su vez sus reglas. Las fuerzas del movimiento (su flexibilidad, su informalidad, su horizontalidad, etc.) son también sus debilidades (ausencia de horizonte estratégico claro, de legi-

Esta autoorganización fue eficaz, pero pronto se planteó la cuestión de la durabilidad del movimiento

bilidad, etc.). Puesto que pretendía ser algo más que una protesta puntual (lo que se infiere por la ampliación de sus marcos reivindicativos), surgieron sus aporías. A partir de febrero de 2019, la fractura entre la estrategia de la calle y la de las urnas fue cada vez más fuerte; y esta última conllevaba la formalización de una organización en la perspectiva de las elecciones europeas de

mayo de 2019. Convertirse o no en una organización (no necesariamente ligada al juego electoral): esta fue una de las cuestiones centrales que sacudieron a los «chalecos amarillos». Rápidamente se impuso un dilema: entrar en el juego representativo (electoral, especialmente, o en el campo de las organizaciones del movimiento social) para perdurar y tener peso, encontrar una «salida», a riesgo de la normalización y la institucionalización, o mantener una forma de movimiento no organizado o sin lógica de representación, conforme a su estilo y garante de su eficacia hasta entonces. Para decirlo con otras palabras y resumir una alternativa clásica de los movimientos emergentes: tomar partido a riesgo de ser tomado por la política

20. Laurent Jeanpierre: *In girum. Les leçons politiques des ronds-points*, La Découverte, París, 2019.

partidaria. El movimiento Noche en Pie (Nuit debout), algunos años atrás, estuvo atravesado por los mismos interrogantes y dilemas. Los movilizados ¿son tan reacios a toda organización? Es posible dudar de ello. La encuesta de Dormagen y Pion en Dieppe muestra que 91% de los consultados desean estructurarse en un movimiento organizado y duradero, y que 80% piensa que se necesitan voceros para representarlos. La cuestión práctica del «cómo» es más problemática...

Diversas «estructuras» de coordinación nacional de los «chalecos amarillos» se constituyeron en torno de tres legitimidades principales: la de las redes, la de los estudios de televisión y la del terreno, pero el movimiento no fijó reglas organizacionales. A pesar de los numerosos microlíderes que generaron, los «chalecos amarillos» carecen de representantes oficiales y eluden la exhortación de los gobernantes que los incitan a producirlos. Impulsados por su influencia en las redes, los líderes reivindican el hecho *de no serlo* y son cuestionados si lo son demasiado. Todo intento de encontrar voceros fracasó. A fines de noviembre, una parte del movimiento anunció la creación de una delegación de ocho interlocutores, luego de una consulta a 30.000 personas en internet. Pero «estos mensajeros», que no fueron concebidos como «tomadores de decisiones», fueron rápidamente desaprobados. Un representante habría sin duda afectado la identificación amplia de la que gozó el movimiento, pero la ausencia de líderes reconocidos también tuvo un efecto negativo: el sentido del movimiento fue construido desde afuera. A falta de voceros, lo hicieron hablar... mucho y a menudo para perjudicarlo.

Una agrupación de «chalecos amarillos» de los estudios de televisión surgió en torno de Hayk Shahinyan, el Colectivo del 17 de noviembre; este impulsó un proyecto de lista efímero para las elecciones europeas encabezado por Ingrid Levavasseur, pero el proyecto fracasó rápidamente. Se lanzaron otros proyectos de listas (una decena) que tuvieron una suerte similar. Las lógicas del juego electoral pusieron bajo tensión al movimiento. «En el momento en que uno aspira a obtener votos, ya no puede librar el combate de las ideas», señalaba en febrero François Boulo, vocero de los «chalecos amarillos» de Ruan, «ya que uno participa de estrategias para hacerse elegir»²¹. Si bien el *gilet jaune* Éric Drouet invitó a no dispersar el voto para tener peso en las elecciones europeas, esto no se tradujo políticamente durante los comicios. Finalmente, se presentaron tres listas reivindicando a los «chalecos amarillos» en las elecciones europeas, que obtuvieron sumadas 1% de los votos. Paralelamente, intentó tomar cuerpo otra dinámica no electoral de coordinación de los «chalecos amarillos». El 30 de noviembre, una agrupación de rotondas de Commercy, pequeña ciudad de Mosa, lanzó un llamado a crear en toda Francia asambleas populares, según principios cercanos

21. Aline Leclerc: «Les européennes à venir divisent les 'gilets jaunes'» en *Le Monde*, 12/4/2019.

al municipalismo libertario. La cuestión democrática de la representación del movimiento estuvo en el corazón de la primera Asamblea de las Asambleas que convocó en enero a un centenar de delegaciones en esta ciudad. El rechazo a la representación política constituyó la base de este proceso marcado por el repudio a la jerarquía y a la delegación. La legitimidad de los delegados de esta asamblea para hablar en nombre de todos los «chalecos amarillos» fue constantemente cuestionada. «Hay tanta desconfianza, se siente temor a traicionar y ser identificado con lo que se combate: ese diputado al que le delegamos nuestro voto y que, una vez en la Asamblea, actúa sin consultarnos nunca», decía Dominique, 57 años, proveniente de Seine-et-Marne. Un animador de los debates se preguntaba: «¿Cómo organizarse para ser lo más democrático posible? ¿Se da cuenta?, es lo que tratamos de hacer esta noche y cuesta mucho. ¡La democracia es súper difícil!»²². En el llamado final, se lee: «No queremos ‘representantes’ que terminen necesariamente hablando por nosotros (...) Si se designan representantes y voceros, eso terminará volviéndonos pasivos. Peor aún: no tardaremos en reproducir el sistema y funcionar de arriba hacia abajo como los crápulas que nos gobiernan». O incluso: «No pongamos de nuevo el dedo en el engranaje de la representación y la cooptación».

La Asamblea de las Asambleas se reunió dos veces más. Alrededor de 700 «chalecos amarillos», delegados de 235 grupos de toda Francia, se reunieron en abril en Saint-Nazaire para la segunda Asamblea de las Asambleas, y luego en junio en Montceau-les-Mines. La intención de estructurar el movimiento en el largo plazo («implantarse en el largo plazo») se reafirmó, pero de la manera más horizontal posible. Sin embargo, aquí también se observa un estancamiento. Esta segunda dinámica también se bloquea...

El movimiento no resistió el paso del tiempo, aun cuando haya gozado de un largo y poderoso apoyo de la opinión pública. El escenario del pasaje de la esfera social a la espera política o electoral fracasó rápidamente y marcó así el límite del proceso de desintermediación en marcha. Los «chalecos amarillos» expresan a la vez una aspiración a la política y un rechazo de la política instituida y electoral. La oposición entre el arriba y el abajo está en el corazón del movimiento, que participa, desde este punto de vista, de una «situación populista» (aunque el rechazo de la figura de un líder lo distancia a la vez del populismo). En este movimiento, las organizaciones y mediaciones no tienen cabida porque su descrédito es muy profundo, pero también porque se basan en una concepción monista de un pueblo homogéneo cuya defensa de intereses, de alguna manera, se daría por sentada. Tal como lo recordaba recientemente Yves Mény:

22. A. Leclerc: «Dans la Meuse, une assemblée de ‘gilets jaunes’ de toute la France propose un appel commun» en *Le Monde*, 27/1/2019.

la democracia tal como funciona está basada en la representación y supone una mediación generalizada de las relaciones sociales y políticas. Grupos, sindicatos y partidos agrupan, estructuran, organizan, movilizan y actúan por cuenta de individuos, consumidores, ciudadanos que no tienen necesariamente las cualidades, los medios y la voluntad o la disponibilidad de tiempo necesarios para la acción individual. Estos filtros están desapareciendo o, en todo caso, atraviesan una profunda crisis.²³

Los «chalecos amarillos» son un poderoso indicador de esta crisis, pero también de las dificultades que deben superarse. En efecto, se produjo una mediación que se beneficia de los recursos tecnológicos de las redes sociales, pero el rechazo de la representación lleva al movimiento a una forma de callejón sin salida político y estratégico. No *ser* o *convertirse* en un partido o una organización: es a la vez la fuerza de los «chalecos amarillos»... y su debilidad.

Marcado por una horizontalidad radical que se acentuó con el tiempo, el movimiento se condena a la impotencia. Participa de una poderosa corriente de desafiliación respecto de las instituciones de la sociedad civil y las elites, pero resulta un peso por la incapacidad de producir nuevas mediaciones que superen el estado de movilización. La politización del movimiento según esquemas clásicos habría sin duda exacerbado sus contradicciones. En la democracia representativa, las organizaciones siguen siendo estructuras indispensables para incorporar en forma duradera intereses colectivos, defenderlos y encarnarlos en el sistema político a través de programas y propuestas, a condición de renovar radicalmente su modelo.

Indicadores del estado de desestructuración política de las capas populares, los «chalecos amarillos» representan un desafío para la izquierda: ¿qué mediaciones reconstruir con la sociedad cuando el descrédito de las organizaciones es radical? A pesar de sus dificultades, los «chalecos amarillos» habrán puesto en el centro del debate público la cuestión democrática. Lejos de desplazarse hacia temáticas xenófobas, su agenda evolucionó, con cierta coherencia, de la justicia social a la cuestión democrática, según un proceso bastante cercano a Nuit debout (mientras que sociológicamente ambos movimientos estaban al principio muy diferenciados)²⁴. Como si, actualmente, la cuestión de la democratización de las instituciones fuese la condición previa a la resolución de la crisis social... ☐

23. Y. Mény: *Imparfaites démocraties*, Presses de Sciences Po, París, 2019, p. 232.

24. La crisis de las modalidades de representación política y de formulación de nuevas demandas democráticas se explica sin duda por la evolución sociológica del movimiento, como lo demuestra el trabajo en curso de Magali Della Sudda en Sciences Po Bordeaux.

Colombia: despertar ciudadano y dilemas políticos después del «21-N»

Entrevista a Álvaro Jiménez Millán

Marc Saint-Upéry

En noviembre pasado, Colombia vivió una ola de movilizaciones que muchos compararon con las de Chile. En un país donde la protesta siempre fue criminalizada, y asociada a la guerrilla, miles de personas, sobre todo jóvenes, salieron a las calles con nuevas y viejas demandas. En esta entrevista, Álvaro Jiménez Millán analiza las dinámicas del movimiento, sus actores y sus perspectivas, en un contexto marcado por los obstáculos al proceso de paz y los cotidianos asesinatos de líderes sociales. Al mismo tiempo, dibuja una cartografía de los liderazgos que, en el espacio de centroizquierda e izquierda, buscan desplazar al uribismo en el poder. Jiménez Millán es analista político, columnista de la revista *Semana*, dirige la Campaña Colombiana contra Minas Antipersonal y es cofundador de Colombia Risk Analysis, una iniciativa de estudio sobre el riesgo político en Colombia, y de Crudo Transparente, centro de pensamiento e incidencia sobre el impacto socioeconómico y político de la industria del petróleo en el mismo país.

La opinión pública latinoamericana e internacional ha quedado muy sorprendida por el carácter novedoso y por la potencia de las movilizaciones

Marc Saint-Upéry: es periodista, editor y traductor. Es autor de *El sueño de Bolívar. El desafío de las izquierdas sudamericanas* (Paidós, Barcelona, 2008).

Palabras claves: *fake news*, protestas, violencia, Iván Duque, Colombia.

de noviembre de 2019 en Colombia. Pero la continua y frenética espiral de acontecimientos mundiales ha dejado un poco en la sombra las secuelas de este movimiento. ¿Qué se puede decir al respecto?

La sorpresa fue también para Colombia. El 21 de noviembre de 2019 (conocido como el 21-N) significó un despertar colectivo, con liderazgos parciales y difusos, que puso en evidencia múltiples aspiraciones, especialmente en las ciudadanías jóvenes del país. Hubo novedad, diversidad, fuerza y mucha alegría. El 21-N fue también un *Basta ya* de la ciudadanía frente al hecho de que el uribismo continúe siendo el modelador de la coyuntura política y del futuro del debate nacional. Se trata también de una escenificación de rupturas y de la búsqueda de nuevos liderazgos, de nuevas formas de expresión, de desobediencia frente al establishment, pero también frente a la oposición clásica de la izquierda más «organizada». El 21-N se lo tomó la ciudadanía.

Luego hubo réplicas como aquellas que se dan luego de los terremotos, pero se fue perdiendo la fuerza y el entusiasmo inicial se redujo, con lo que no se puede negar que el proceso se debilitó. Adicionalmente, no hubo liderazgo ni capacidad orientadora del proceso. Las centrales obreras y el Comité del Paro han quedado rezagados, divididos e incluso se ven rechazados por sectores que acompañaron las marchas del 21-N en las diferentes ciudades. De allí que el fenómeno del 21-N se pueda considerar superado por la estrategia gubernamental, que logró enfriar el momento.

La estrategia del gobierno tuvo tres elementos que le permitieron ser exitosa: por un lado, la política informativa del «miedo al vandalismo» (estimulada por las informaciones sobre los acontecimientos en Chile), que permitió justificar la salida del ejército a la calle, la mano libre al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional y la descalificación a los voceros del paro por irresponsables y peligrosos. Por otro lado, se satanizó como oportunistas a quienes desde el liderazgo político pudiesen incidir en la dirección del proceso. Finalmente, hubo lo que el gobierno llama la «Conversación Nacional», que permitió crear una interlocución paralela, con el apoyo de los medios, del sector empresarial y de la Iglesia católica, que defienden este espacio como manera de institucionalizar la protesta para que el país «no se salga de madre». El efecto real es que hasta hoy se desconoce al Comité del Paro y la negociación planteada por este.

Por último, la cercanía con las celebraciones de fin de año, que trajeron la atención de la ciudadanía, contribuyó a apagar el entusiasmo del 21-N.

En el 21-N y las movilizaciones sucesivas se ha expresado una mezcla compleja de reivindicaciones de índole socioeconómico (pensiones, impuestos, educación, etc.), de rechazo vigoroso a la figura de Iván Duque —y, aparentemente, también al uribismo en general y a la casta política tradicional—, pero asimismo un clamor contra la violencia estatal y paramilitar. ¿Cómo se articulan estas demandas tan heterogéneas?

Creo que lo que hubo fue un grito colectivo y, si se quiere, desesperado. En la masividad de la protesta, incidió el agotamiento de la opinión ciudadana frente al descaro institucional que expresaba el gobierno a través del Ministerio de la Defensa, que minimizaba el asesinato de líderes sociales e intentó ocultar el asesinato del ex-combatiente de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], Dimar Torres, por parte de un suboficial del ejército, acompañado por acusaciones mentirosas que trajeron a la memoria la práctica de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos» en Colombia.

El desarrollo de estos episodios devino en la salida del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, luego de un debate parlamentario en el que se comprobó además que el ministro y el propio gobierno escondieron la muerte de niños durante un bombardeo a un campamento de las disidencias de las antiguas FARC en el departamento del Caquetá. Ese hecho potenció la indignación contra el gobierno, que en buena parte se refleja en la masividad del 21-N.

Las otras reivindicaciones que articuló el Comité del Paro suman 104 y son reclamos de índole económica, regulatoria, social, además del rechazo al asesinato de líderes sociales e indígenas, etc. Sin embargo, este comité que convocó el 21-N se ha quedado sin aire suficiente al desinflarse la movilización de la calle y al enfrentar la estrategia de Conversación Nacional del gobierno.

Eso dicho, en el espacio creado por el gobierno, la cantidad de peticiones es mucho mayor, son miles, en muchos casos coinciden con las de las marchas y son contrarias al interés del gobierno. Por ejemplo, se ha pedido que se instale la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se suspenda la técnica del *fracking* para la explotación de petróleo o que se cambie el modelo económico basado en el uso de combustibles fósiles. No van a esa conversación solo los amigos del gobierno. Van también sectores que no tienen organización, individuos que sienten la posibilidad de decir cosas, de «quejarse» a ver si los escuchan, organizaciones que no se sienten representadas por el Comité del Paro o gente común y silvestre que va a ver si el gobierno les pone atención.

Pero la Conversación Nacional rompe el esquema de la convocatoria al 21-N, que tenía un comité responsable, unas peticiones y una exigencia de

negociarlas. Ahora hay unas mesas coordinadas por personas a las que el gobierno convocó con apoyo de la Iglesia y de los empresarios para que escuchen a organizaciones e individuos en cada línea temática, sin un propósito claro, con una extensión en el tiempo indefinida, y a ver qué va pasando.

Así que no hay verdadero camino de negociación frente a las exigencias del 21-N. No hay reconocimiento real al Comité del Paro y se produce una suerte de paralelismo gubernativo frente a un movimiento social reivindicativo de múltiples orígenes. De allí la eficiencia de la estrategia del gobierno. No hay negociación, hay «conversación», y en el entretanto, los medios de comunicación con más audiencias ayudan en su mayoría al gobierno, poniendo en duda si la continuidad del paro vale o no la pena para la ciudadanía, estimulando la narrativa de que los vándalos se fortalecen, etc., etc. Y amplificando versiones de que el 21-N habría sido un plan de los «rusos», de Nicolás Maduro, de las disidencias de las FARC, del ELN, etc. Esto sin duda contribuyó a deslegitimar el proceso post-21-N, está cada vez más deslegitimado, por cierto no en los grupos organizados o militantes de izquierda, sino entre las clases medias de centro y de centroderecha, cuya participación fue la novedad que les dio fuerza a las protestas. Nunca antes estos sectores de la sociedad —de los que una parte se había expresado positivamente frente a la paz durante el plebiscito— habían acompañado reivindicaciones económicas o de normatividad laboral.

No hay verdadero camino de negociación frente a las exigencias del 21-N

¿Qué se puede decir hoy del movimiento sindical colombiano? ¿Cuál es su nivel de presencia y de efectividad en la sociedad? ¿Está en una fase de redinamización, o lo del 21-N fue solo un efecto de oportunidad coyuntural?

El movimiento sindical por sí solo tiene poca convocatoria en la sociedad colombiana. En general, los sindicatos y su dirigencia no son una referencia para la mayoría de la población. Tenemos un movimiento sindical anacrónico, cuyas formas organizativas y de comunicación están ancladas en los años 60 del siglo xx. Sus liderazgos siguen excluyendo a las mujeres en los niveles de dirección fundamental y sus discursos hablan de temas que son marginales para la mayor parte de la población económicamente activa del país. No se puede hablar de redinamización en el mundo sindical. Ellos fueron parte de los convocantes a la fiesta (no fueron los únicos), y sin embargo no pusieron la música, no definieron lo que ocurrió el 21-N. Y luego del 21-N, la gente en la calle claramente no quiere que ellos sean sus voceros. Los estudiantes, las nuevas ciudadanías, los animalistas, la población LGTBI+, los artistas, entre otros que se movilizaron, tienen agendas diferentes de la de las reivindicaciones

laborales, no le entregan ni le entregarán su voz a la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) o del movimiento sindical en general.

Las pensiones no son la preocupación de los jóvenes, los suyos son temas como la calidad del aire, la sostenibilidad del planeta, y esos discursos no son los de los sindicatos ni los de las dirigencias sindicales. Si algo han demostrado el 21-N y sus desarrollos, es el anacronismo y la desconexión del liderazgo sindical con las ambiciones y las agendas del movimiento urbano, joven, estudiantil, desempleado, excluido, indígena, que se expresó con fuerza en esta fecha.

Parecería que, de un modo muy parecido a lo que pasó en Chile, hubo una especie de bifurcación o de paralelismo no sinérgico entre modos de protesta y de movilización muy novedosos y creativos, incluso lúdicos —y relativamente ajenos al repertorio de la izquierda tradicional—, y brotes de furia caótica y de vandalismo cuyas fuentes y modalidades no son fáciles de identificar y que, por supuesto, fueron instrumentalizados y exagerados por el poder. ¿Cómo lo ve?

La instrumentalización de la violencia real o imaginada fue exitosa para el gobierno en los días previos a la marcha del 21-N. Por eso fue fácil y conveniente para la derecha y sectores radicales de la derecha que llegáramos al toque de queda en Bogotá y Cali. Generar miedo sobre lo que ocurriría, llamar a proteger las ciudades de los vándalos, fue la estrategia semanas antes del 21-N, y al finalizar la jornada se vería la efectividad de esa estrategia. Es cierto que la ciudadanía, después del 21-N, respondió lúdicamente, como se vio por ejemplo en la jornada de cacerolazos. Pero este espíritu creativo y pacífico quedó desbordado por el miedo al «vandalismo», la imagen de los tanques en las calles de Bogotá, de las pedreas violentas, etc. La cuestión de las pedreas, que fue marginal en la realidad, a través de su manipulación mediática se ha convertido en un tema sensible. Eso no solo porque hay acusaciones de todo tipo frente a este y otros hechos posteriores, sino adicionalmente porque los sectores de centroderecha, para diferenciarse de la izquierda y fortalecer posiciones en el debate político, sostienen que las marchas no pueden afectar el diario y normal discurrir de las ciudades. Los sectores que defienden la parálisis de actividades son señalados como vándalos que perturban el orden y quieren destruir la sociedad.

Sin embargo, muchos observadores dicen que, pese a sus límites, el proceso de paz y el retorno de las FARC a la vida civil han generado cierta «desestigmatización» de la protesta social, que permitió a nuevos sectores unirse a ella sin miedo y sin recelo. ¿Concuerda con esta caracterización?



© Nueva Sociedad / Gustavo Deveze 2020

Gustavo Deveze es dibujante. Egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes «Manuel Belgrano». Ha participado en muestras de dibujo, pintura, historieta y video. Vive y trabaja en Buenos Aires. Página web: <www.deveze.com.ar>. Blog: <<http://jeneverito.blogspot.com>>.

Hay más deseo que realidad en esa afirmación. De hecho, los días previos al 21-N fueron de estigmatización de la protesta y promoción del miedo por parte del gobierno. «Impediremos que pase lo de Chile», «Maduro y Cuba no van a vencer en Colombia», «No van a obtener en la calle lo que perdieron en las urnas»: desde la Presidencia hasta medios importantes de radio y televisión promovieron este discurso, pasando por los voceros de las Fuerzas Armadas. Protestar en Colombia sigue siendo visto como algo negativo, sospechoso y manipulado por intereses foráneos.

Los días previos al 21-N fueron de estigmatización de la protesta y promoción del miedo

Además, los liderazgos de centroderecha, alternativos a la derecha paramilitar pero cuidadosos frente a los intereses del *statu quo* histórico, repiten junto al gobierno de Duque que la protesta es válida «pero sin violencia», pese a que ninguno de los dirigentes del paro o del 21-N llama a la violencia (hay que insistir en esto). Esta expresión repetida refuerza la idea promovida por el gobierno de que la protesta amenaza la tranquilidad ciudadana, que no puede bloquear vías, no puede suspender servicios. Es decir que solo es aceptable la protesta «aconductada». Todo esto crea desconfianza sobre la salida a la calle, aunque hay que reconocer que los nuevos gobiernos locales, especialmente los de Bogotá, Medellín y Cali, promueven por su lado la validez de la protesta y luchan contra la estigmatización de las marchas y sus liderazgos. Pero lo hacen insistiendo en que no debe haber bloqueos y suspensiones de servicios, e incluso desarrollando iniciativas de protocolos locales para controlar la violencia en las marchas. Esto genera discrepancias en el movimiento social, porque la línea de separación entre estas iniciativas y los mensajes del gobierno nacional es muy delgada y se confunde en la opinión pública.

Si uno observa la historia de Colombia, afirmaciones de este tipo vigorizan lógicas de pensamiento vigentes durante el conflicto armado según las cuales toda protesta era infiltrada por la guerrilla y sus promotores eran señalados como «guerrilleros de civil». En la situación actual posterior al Acuerdo de Paz, el discurso y las iniciativas de los nuevos gobiernos locales aún no alcanzan para que la sociedad en su conjunto asuma o refuerce lógicas de transición que legitimen la protesta social y la comprendan como una búsqueda de escenarios de solución a diferencias subyacentes en el ámbito de la vida social y económica del país que requieren de mecanismos extraordinarios de negociación.

Además, este debate sobre estigmatización de la protesta y la violencia en ella está afectado por la disputa sobre las elecciones presidenciales en 2022 —que es un factor relevante en los desarrollos post-21-N—. Los llamados del senador y ex-candidato presidencial Gustavo Petro a que se mantenga el paro

hasta que el gobierno se siente a negociar son rechazados por la mayoría de los líderes y partidos políticos que se expresan en el Congreso y que se postulan como alternativa al gobierno de Duque. Los dirigentes del Partido Verde y los del Polo Democrático Alternativo, así como los partidarios de Sergio Fajardo, señalan a Petro como incendiario e irresponsable y como promotor de la violencia.

En los últimos años, hubo varios paros universitarios nacionales, tres paros agrarios, varias «mingas» indígenas, paros cívicos en Choco y Buenaventura, movilizaciones estudiantiles gigantescas en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Barranquilla y Bucaramanga y varias movilizaciones e iniciativas ciudadanas en varios lugares del país. ¿Se puede ver ahí una anticipación de lo que pasó en noviembre, o se trata de algo diferente?

No creo que se observe una lógica de *crescendo* continuo. Lo que hay es un gran descontento y, al mismo tiempo, una enorme dispersión del movimiento social. Parecía que el 21-N sería el factor de condensación, pero lo que vemos meses después es que la dispersión y división son mayores, lo que no significa que no vayan a darse nuevas movilizaciones. Los esfuerzos de coordinación entre las expresiones rurales y urbanas de las protestas son aún débiles e involucran fundamentalmente a los sectores organizados o militantes que, a pesar de ser los más activos, no fueron el eje del fenómeno 21-N.

¿Cuál fue el papel de las redes sociales en la movilización? ¿Prevalcieron sus funciones positivas de coordinación espontánea y descentralizada o se manifestó más bien el riesgo de olas de fake news y manipulación?

Al inicio de la jornada, el rol principal de las redes sociales fue el de transmitir información que sirvió para extender el movimiento y las marchas. Ese proceso fue cambiando con el paso de las horas y, al término del 21-N, se convirtió en un alimentador del miedo, con *fake news* sobre vandalismo, anuncios sobre oleadas de personas que llegaban a robar y vecinos que se armaban, con lo que la protesta fue perdiendo simpatías minuto a minuto.

Sin embargo, las redes sociales fueron y siguen siendo un poderoso instrumento de comunicación, especialmente entre los jóvenes. Son un dinamizador de emociones en favor y en contra de la protesta, instrumento de denuncia y socialización de situaciones, pero no parece que alguna estrategia particular en las redes sociales haya jugado algún rol significativo el 21-N. Fue una herramienta permanente tanto de quienes

promovieron la movilización diversa como de quienes al caer la tarde de ese día impulsaron el miedo como fórmula. Los días posteriores, las redes han sido útiles para impulsar las nuevas jornadas, hacer visibles nuevas vocerías, especialmente de artistas, y tuvieron un rol muy relevante en difundir y buscar apoyo en la comunidad de colombianos en el exterior.

El «No» al proceso de paz levemente mayoritario en el plebiscito de 2016 parecía expresar, entre otras cosas, una cierta indiferencia de sectores urbanos más o menos «protegidos» frente a los sufrimientos y dilemas de territorios periféricos víctimas de los embates más crueles de la violencia política y criminal. Pero ahora se ha visto una participación importante de sectores medios urbanos en estas movilizaciones y en su reclamo de cumplimiento sincero e integral del proceso de paz. ¿Cómo lo explica? ¿De veras la mayoría de la sociedad colombiana ha decidido dejar de «mirar para el otro lado» frente a la violencia contra líderes sociales y poblaciones marginadas? ¿No hay riesgo de que, con el posible deterioro creciente de las condiciones de seguridad en varios territorios, caiga de nuevo una capa de indiferencia y de fatalismo sobre estos hechos?

Los sectores urbanos que vimos movilizados el 21-N en su mayoría fueron los mismos que marcharon por el «Sí» durante el plebiscito. Ese empate político negativo de la sociedad colombiana no se ha resuelto y el país político continúa profundamente dividido sobre el proceso de paz y sobre la coyuntura. A esa división contribuyen factores como la postura del gobierno de Duque, que buscó desde sus inicios destruir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el sistema de justicia transicional que es la almendra del acuerdo con las FARC. No es poca cosa, pues expresa la voluntad del gobierno de debilitar el acuerdo. A ello deben sumarse otros elementos: el crecimiento de las disidencias de las antiguas FARC y la profunda división de su liderazgo (Iván Márquez *versus* Timochenko), con las consecuencias que ello implica para la estabilidad de la reincorporación colectiva a la vida civil; la convocatoria a rearmarse a los antiguos combatientes; y, no menos importante, la nueva y múltiple división de la expresión partidista legal de la ex-guerrilla —que también se llama FARC, pero ahora significa Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común— y sus flojísimos resultados electorales. Hay que mencionar también el crecimiento del ELN y su dominancia en vastas e importantes regiones como el Chocó y el Catatumbo, la ruptura de relaciones con Venezuela, la tensión permanente derivada del apoyo del liderazgo colombiano a la estrategia de Estados Unidos contra Maduro, el apoyo a Juan Guaidó y la dinamización de los carteles locales e internacionales de la coca.

Todos estos factores, así como los caminos de solución a estos desafíos, dividen las opiniones y son temas relevantes para las regiones. Por ejemplo:

uso o no de aspersión aérea o erradicación forzada de cultivos de coca en contra de decisiones constitucionales; incumplimiento de los compromisos del anterior gobierno con miles de campesinos sobre sustitución voluntaria de los cultivos; parálisis de los procesos de inversión en las áreas de presencia de las antiguas FARC. Todos estos temas siguen polarizando el debate nacional y dan a muchos colombianos la idea de que el proceso de paz no avanza, idea respaldada por discursos oficiales como el de la ex-ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, quien recientemente, antes de salir de su cargo, calificó dicho proceso como «semifallido».

Los asesinatos de líderes sociales fueron un factor que detonó la participación de muchos en el 21-N. Sin embargo, la negativa del gobierno a negociar con el Comité del Paro y la ausencia de un liderazgo más allá de ese comité que, interpretando banderas como el asesinato de líderes sociales, hubiese logrado generar una interlocución con el gobierno para tratar ese tema específico, han reducido la capacidad de asombro, y los asesinatos se han «normalizado». Eso hasta el punto de que en el mes de enero de 2020 se denunció un promedio de uno por día y el país no salió a marchar, con la excepción de unos pocos activistas, mientras solo algunos líderes políticos estuvieron haciendo la denuncia en redes sociales. El seguimiento social que hoy se hace frente al asesinato y riesgo permanente del liderazgo social, especialmente en pequeños municipios y áreas rurales del país, no es suficiente. Dados los últimos desarrollos post-21-N y la profundización de la división actual en el país, los llamados de alerta han disminuido y efectivamente el fatalismo viene tomándose buena parte de la opinión pública. Con este antecedente, es imposible afirmar hoy que la movilización social hará cambiar de rumbo al gobierno o que lo obligará a relanzar una política de construcción de paz, abocar el fin del conflicto armado por un camino diferente al de *manu militari* o evitar el deterioro del proceso de paz.

Cierto es que subsisten dinámicas de mejoramiento de la vida de los campesinos en materia de paz, seguridad y potencialidades de desarrollo en algunas regiones de Putumayo, Huila, Meta o Caquetá y otros territorios. Pero en las regiones de frontera con Venezuela, en el corredor del Pacífico y otras importantes áreas del país, continúa mandando el que tiene la pistola más grande. La existencia de los pobladores de esas zonas discurre en medio de desplazamientos, minas antipersonal, confinamientos y riesgos permanentes para su vida y su economía producto del control territorial transitorio o semipermanente que ejercen diversos actores armados no estatales.

Los asesinatos se han «normalizado». En el mes de enero de 2020 se denunció un promedio de uno por día

Uribe fue un presidente bastante popular en su tiempo, y su política de «seguridad democrática» contó con la aprobación explícita o tácita de muchos sectores de la sociedad —y no solo de las elites ultraconservadoras—. Pese a la división en la opinión que usted menciona, ¿cómo se explica el cambio de humor relativo de la sociedad frente a los enormes «daños colaterales» de las políticas de seguridad?

Uribe se ha quedado con un discurso anticuado cuya obsesión es «evitar que nos convirtamos en Venezuela»

Buena parte de esa explicación radica en que la seguridad dejó de ser la preocupación de los núcleos urbanos —que representan la mayoría de la población—, al contrario de lo que era en los inicios del siglo XXI. Las FARC no son hoy una amenaza para los colombianos, no existen. Uribe se ha quedado en el aire con un discurso anticuado cuya obsesión presente es «evitar que nos convirtamos en Venezuela» (un tema más agitational que real para los colombianos); eso, sin desconocer que esta afirmación le facilita reeditar su viejo discurso antiterrorista. Lo que preocupa a los jóvenes son temas como la lucha contra la corrupción, la sostenibilidad ambiental, el animalismo, la migración, la defensa del agua, la educación, la calidad del aire, el modelo económico. Uribe y su partido están fuera de sintonía con estos temas, y eso vale también de hecho para la mayoría de los liderazgos políticos nacionales. Pero más allá del cambio generacional, sí hay también una evolución de opinión en los antiguos votantes por Uribe, que no hay que confundir con el núcleo duro de los uribistas. Esos ex-electores no uribistas de Uribe de inicios del siglo XXI comprenden mejor los retos actuales, andan buscando proyectar sus negocios internacionalmente, no comparten la visión de Donald Trump para la región ni tampoco su proteccionismo a ultranza, y perciben los riesgos que se derivan de la política estadounidense actual para la modernización de la economía y la política del país.

En buena parte de los jóvenes existe la certeza de que Uribe, al igual que los partidos históricos y sus liderazgos, son el «viejo país», que identifican como criminal y asociado al paramilitarismo. No expresa ni representa sus preocupaciones, no conecta con sus sueños, sino que quiere conducirlos por el camino ya recorrido, con su perpetuación de la violencia, la inequidad y la corrupción. Dicho esto, es interesante observar que la pirámide generacional está cambiando y Colombia está envejeciendo, de allí que el país de Uribe siga teniendo fuerza. Por ello, la apuesta de poner a Duque como presidente permitió un juego de espejos en el que Uribe se ponía en sintonía con la ambición de relevo generacional y, a la vez, conservaba la política anticuada y tramposa que Duque expresa.

Al mismo tiempo que se produce esta expresión del malestar ciudadano, las fuerzas político-parlamentarias alternativas a la vieja partidocracia, y en particular las fuerzas de centro renovadoras, de centroizquierda y de izquierda—pese a sus relativamente buenos resultados electorales en los últimos escrutinios— parecen bloqueadas en conflictos personales o recelos tal vez más clínicos que ideológicos...

Las candidaturas que se presentan como alternativas son proyectos personales fuertes que obedecen exclusivamente al liderazgo de cada una de sus figuras. Los de Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Jorge Robledo son liderazgos cuajados en el tiempo y son ellos quienes deciden sus candidaturas o no. Incluso alguien como Fajardo había dicho públicamente—luego de la elección de Duque— que nunca más sería candidato. Hoy, a dos años y meses del fin del gobierno de Duque, anda en gira presidencial. Robledo decidió también, él solito, ser candidato. No obedecen a procesos colectivos. Petro se reclamó candidato el día en que Duque ganó la elección como presidente. El Partido Verde tiene hoy su figura más reconocida en la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que parece obedecer más a procesos de partido. Sin embargo, bajo el ala de su institucionalidad, existe una protocolización de divisiones que giran alrededor de las candidaturas mencionadas, sin lograr un equipo sólido en su pensamiento y acción.

Derivado del Acuerdo de Paz con las FARC y ante los ataques del gobierno contra él, se creó el colectivo Defendamos La Paz (DLP), un grupo de opinión en el que se expresan diversas corrientes alternativas: la nueva FARC; la ruptura del viejo Partido Liberal liderada por el ex-ministro Juan Fernando Cristo; sectores de centro renovador que impulsaron la candidatura de Humberto de la Calle, cabeza de la delegación de paz del gobierno de Juan Manuel Santos; y distintos sectores de izquierda. Estas fuerzas apuntan a la promoción de un frente o de un escenario de encuentro para 2022. Si bien esto aún no se define con claridad, intentan ser un jugador en la próxima coyuntura electoral.

Pero tienen también en común su rechazo a la lógica política que expresa Petro y la animadversión a incluirlo en un esfuerzo de confluencia de izquierdas, centros o cualquier nombre con el que quieran denominarse. Porque efectivamente, en Colombia, la política alternativa es principalmente clánica. Así se tengan similitudes o diferencias ideológicas, lo que predomina son las animadversiones personales de cada líder.

Resulta por tanto correcto afirmar que hoy, el consenso entre los sectores de centroderecha y centroizquierda (Fajardo, Robledo, Juan Manuel Galán, Angélica Lozano y otros senadores verdes) es no juntarse con Petro, definir su cercanía como tóxica y preservar con él o con sus seguidores enconadas

peleas por redes sociales. Esas mismas disputas, en ocasiones grotescas, las reproducen los formadores de opinión de centroizquierda, izquierda, voceros de la derecha y centroderecha frente a lo que llaman el «petrismo», a menudo acusado de ser el «comodín» colombiano del «chavismo-madurismo».

En el Senado y la Cámara de Diputados, las «bancadas alternativas» han buscado ser eficientes en lo relacionado con la defensa de proyectos sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Los esfuerzos

El «petrismo» es a menudo acusado de ser el «comodín» colombiano del «chavismo-madurismo»

colaborativos se presentan de manera coyuntural y en temas específicos: aspersión aérea, negociaciones de paz, respeto a los protocolos firmados con los países garantes (Noruega y Cuba) para el proceso de paz con el ELN, entre otros. Hay diferencias en especial sobre temas económicos y ambientales (por ejemplo, frente al tema de combustibles fósiles o del *fracking*) entre los congresistas del Partido

Verde, los del Polo y los de la coalición Colombia Humana-Unión Patriótica, liderada por Petro. Los integrantes de las «bancadas alternativas» han hecho uso conjunto del «derecho de réplica» a las alocuciones presidenciales, pero no son una fuerza unificada. Debe anotarse que Petro y sus posiciones políticas son motivo de polémica por la representación que tienen o no frente a los demás sectores.

Dentro de estas bancadas podrían generarse más iniciativas comunes de cara a 2022. Se mueven discusiones en ese sentido y lo que se observa es que las sinergias especialmente ocurren entre el Partido Verde, sectores del Polo y algunos congresistas de los viejos partidos que se declararon en independencia o en oposición frente al gobierno. Pero esa búsqueda de sinergias y esfuerzos comunes frente a 2022 excluye a Petro.

¿Cómo se explica este rechazo a Petro?

Personalmente, pienso que Petro ha demostrado ser el candidato con mayor solidez conceptual y raigambre popular, y también con mayores agallas para llamar las cosas por su nombre. Su postura sobre temas como la agenda de las nuevas ciudadanías —desde su campaña a la Alcaldía—, el cambio climático, la defensa del agua, la calidad del aire, la educación, el reconocimiento de las drogas como un tema de salud pública, la lucha implacable contra la corrupción y el paramilitarismo, deberían ser credenciales suficientes para gozar de un amplio apoyo. Me parece el líder más moderno frente al debate global en materia de modelo de desarrollo y retos de la democracia. Sin embargo, la posibilidad de que Petro, que obtuvo la segunda votación presidencial con ocho millones de votos, tenga el

respaldo de los demás sectores para encabezar una candidatura es nula. Es el líder más polémico y controversial hoy en el país, y es declarado como el enemigo del Partido Verde, del Polo, de la corriente de Fajardo, además de los partidos tradicionales y en especial del uribismo. Es el diablo temido al que no se le puede aceptar ningún tipo de desarrollo.

Por un lado, sus afirmaciones conceptuales críticas, sin concesiones al *statu quo*, lo distancian de los sectores de centro, que lo ven como una amenaza para la estabilidad de la economía y de la estructura institucional. Pero hubo también episodios como el video donde se lo ve recibiendo dinero en bolsas de un amigo y contratista¹, y aspectos negativos como su enconada actitud en redes contra diversos actores que podrían ser potenciales aliados, su individualismo para tomar decisiones y la actitud de «endiosamiento» que generan sus seguidores más radicales. Todo esto debilita su potencial entre las capas medias.

Aunque hoy no parece que tenga posibilidades de ser un candidato de coalición, estoy convencido de que jugará un papel relevante en el debate y todavía puede ser una sorpresa si consigue nuclear a sectores importantes de la población. Por eso su estrategia es construir masa crítica para presentarse solo y obtener una votación que lo ponga en segunda vuelta.

¿Qué otros escenarios de candidaturas «alternativas» se presentan?

La otra posibilidad para superar electoralmente el uribismo y la dominancia de la vieja partidocracia expresada por Duque sería que, en 2022, sectores del establishment político y empresarial, así como muchos de los votantes que respaldaron a Duque, apoyen a Fajardo. Los factores relevantes que pueden potenciar aún más esa candidatura serían: un impacto positivo de la gestión de Claudia López –quien repetidamente ha expresado su apoyo a la candidatura de Fajardo– en Bogotá (no puede negarse el peso y significado de la capital como factor de la política de relevo al uribismo); un crecimiento nacional del liderazgo de Fajardo semejante al que logró localmente López sobre sectores medios de la población; un éxito de la estrategia de los sectores de centro y de derecha de identificar a Petro con el «chavismo-madurismo».

La próxima campaña presidencial tendrá como coordenadas esenciales el despliegue de los liderazgos unipersonales, la situación con Venezuela (migración, desarrollo de la estrategia de EEUU, con sus aspectos de guerra encubierta), las dinámicas territoriales de violencia que siguen creciendo en los bordes de la frontera agrícola del país y las zonas limítrofes con los países vecinos, la capacidad de perturbación institucional del ELN y de las disidencias

1. V. «Gustavo Petro da explicaciones sobre video en que recibe fajos de dinero» en *El Herald*, 3/12/2018.

conducidas por antiguos líderes de las FARC y las dinámicas de la economía del narcotráfico (fumigaciones, incidencia en las comunidades, etc.).

¿Qué es de Álvaro Uribe y de las derechas?

El partido de Uribe, el Centro Democrático, es el partido de gobierno, y Duque es fiel a la lógica política de su jefe. Uribe es la fuerza de Duque y el uribismo de Duque es su elemento de estabilidad. Además de un ganador, Uribe sigue siendo un factor determinante de las decisiones de Estado en el país. Si bien es cierto que el mundo empresarial, político y los medios no lo aplauden como antes, muchos siguen respaldando su gobierno, el gobierno de Duque, aun considerándolo un aprendiz de baja calificación.

Eso dicho, el silencio que mantiene Uribe estos últimos meses se debe a los desarrollos judiciales. El juicio contra Santiago Uribe, su hermano, sospechado de actividades paramilitares, está a punto de resolverse. Este hecho le toma mucho de su tiempo y, adicionalmente, lo preocupan las decisiones que pueda tomar la Corte Suprema de Justicia sobre las acusaciones graves que existen en su contra².

En el liderazgo de los partidos y movimientos que ayudaron a elegir a Duque asumen que Uribe no podrá definir la nueva figura presidencial. Sin embargo, saben que todavía es y será un actor relevante en las elecciones de 2022.

Por su parte, la derecha más dura sigue siendo uribista fiel. Sus representantes no quieren pelearse con Duque, pero a menudo expresan públicamente inconformidades que los ayudan a mostrar su vigencia e importancia dentro del Centro Democrático. Sus éxitos son evidentes: logran mantener su agenda beligerante con Venezuela, tienen los cargos más relevantes del ejecutivo (Defensa, Relaciones Exteriores), preservan el mando fundamental de las Fuerzas Armadas y sus voceros son la voz fuerte dentro de la junta directiva de la empresa colombiana de petróleo, Ecopetrol.

El interrogante es ¿cómo actuarán en 2022? ¿A quién impulsarán como candidato? Mientras llega esta definición, hacen debates e impulsan medidas de control a los ímpetus de algunos aliados moderados que quieren romper el Centro Democrático y fragilizar a Uribe de cara a 2022. Con Duque, la derecha más reaccionaria se reacomoda y tiene garantizada su supervivencia en el poder por lo que resta del gobierno. Lo que podemos afirmar es que, así como es claro que habrá alternativas al uribismo en 2022, también es cierto que ni al cajón del uribismo ni al de la vieja partidocracia colombiana se les ha puesto el último clavo. ☐

2. Jorge Cantillo: «Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia y tensión en la calle: la indagatoria que divide a Colombia» en *Infobae*, 8/10/2019.

El poder de las huelgas clásicas

Kim Kelly

Las huelgas no son algo del pasado, y esto es particularmente cierto para el caso del transporte (trenes, buses y aviones). En estas áreas, los trabajadores tienen aún la capacidad de incidir sobre el poder en defensa de sus propios derechos –afectados por la precarización–, e incluso en muchos países, mediante huelgas de solidaridad, de apoyar a otros sectores laborales.

El Día de Acción de Gracias es posiblemente el peor día festivo de Estados Unidos. Incluso si obviamos la historia genocida que enmascara, los días que rodean al consumo ritualizado de grandes aves resacas y chorreantes guarniciones (por lo general, en presencia de nuestros parientes menos favoritos) son sin duda uno de los periodos de viaje más frenéticos del año, y 2019 no fue una excepción. La Asociación de Automóviles de EEUU (AAA, por sus siglas en inglés) calculó que 49 millones de estadounidenses se desplazarían al menos 80 kilómetros en coche, mientras que Airlines for America (el *lobby* de las aerolíneas) previó que 41 millones de personas volarían entre el 22 de noviembre y el 3 de diciembre. El impacto ambiental es brutal y el estrés de atender a todos esos iracundos pasajeros es una pesada carga para los trabajadores aeroportuarios. Es previsible cierto grado de caos, pero gracias a la labor de los siempre sobreexigidos y con frecuencia mal remunerados

Kim Kelly: es una escritora independiente y activista sindical cuyos textos sobre trabajo, políticas radicales y cultura se han publicado en *The New York Times*, *The Washington Post*, *The Guardian*, *The New Republic*, *Teen Vogue*, *Pacific Standard* y muchos otros. Integra el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Este) (WGA, por sus siglas en inglés).

Palabras claves: condiciones de trabajo, huelga, sindicalismo, transporte.

Nota: la versión original en inglés de este artículo, con el título «Planes, Trains, and Automobiles», fue publicada en la revista *The Baffler*, 27/11/2019, y una versión en español apareció en la revista *CTXT*. Traducción de Álvaro San José.

trabajadores del transporte, la mayoría de los pasajeros llega a casa a tiempo para comer el pavo.

Sin embargo, este año [por 2019] ese viaje podría ser un poco más complicado. El 26 de noviembre, los trabajadores de abastecimiento de comida de 17 de los principales intercambiadores aéreos (incluido el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, el O'Hare de Chicago, el LAX de Los Ángeles y el DCA de Washington) escenificaron lo que su sindicato, UNITE HERE, denominó la manifestación más numerosa del personal de servicios en tierra de los aeropuertos estadounidenses en años. Las protestas formaban parte de una redoblada campaña para llamar la atención sobre la grave situación que viven los trabajadores de *catering* del aeropuerto, muchos de los cuales «viven en la pobreza», mientras la aerolínea American Airlines, que utiliza los servicios de estos trabajadores a través de firmas subcontratadas como LSG Sky Chefs y Gate Gourmet, declaraba un beneficio neto de 1.400 millones de dólares en 2018. Como destaca UNITE HERE, una encuesta reciente que se realizó entre cientos de trabajadores de Sky Chefs concluyó que «30% de los trabajadores carecía de seguro médico y 35% dependía de la asistencia sanitaria del gobierno para sus tratamientos o los de sus hijos».

La vigencia del convenio de los trabajadores de *catering* de aerolíneas finalizó el 31 de diciembre de 2018: Gate Gourmet comenzó la mediación el 26 de septiembre de 2018 y Sky Chefs, el 21 de mayo de 2019. El salario, los seguros de salud y las inseguras condiciones de trabajo son los principales temas que los trabajadores de ambas empresas llevaron a la mesa de negociación: «Trabajo en el principal intercambiador de American Airlines, DFW, que también es la ciudad natal de la empresa y donde American Airlines acaba de edificar unas nuevas y lujosas oficinas centrales», comenta

Stephanie Kopnang, integrante de UNITE HERE, «y, sin embargo, estamos entre los servicios de *catering* peor pagados del país. Si no hago horas extras, no puedo pagar el alquiler ni las cuentas».

Los miembros de UNITE HERE llevan meses cuestionando las insostenibles y explotadoras condiciones de trabajo con acciones que van desde el simulacro de muerte escenificado en Filadelfia en octubre de 2019 hasta las manifestaciones que se llevaron a cabo en

numerosos aeropuertos durante el verano boreal. En julio, los trabajadores de *catering* de 33 aeropuertos votaron mayoritariamente en favor de ir a la huelga una vez que la Comisión Nacional de Mediación los liberara de la negociación. El tiempo se está agotando para que las aerolíneas comiencen a tomar en serio a estos trabajadores y trabajadoras y satisfagan sus exigencias porque, como han dejado suficientemente claro, están dispuestos a hacer

**Los miembros de
UNITE HERE llevan
meses cuestionando
las insostenibles
y explotadoras
condiciones**

lo que sea necesario para conseguir el convenio que ellos (y sus familias) se merecen. «Yo estoy en esta lucha por mi hija de 12 años, Ariana; pago 400 dólares al mes por el seguro de la empresa solo para poder llevarla al médico y que le traten el asma crónico que padece», explica Shandolyn Lewis, una empleada de *catering* de Detroit. «Nosotras trabajamos para una subcontratista de LSG Sky Chefs, pero nuestro trabajo hace que las aerolíneas ganen dinero. Sin nosotras, las aerolíneas no tendrían comida o agua que ofrecer a sus pasajeros. No podemos permitirnos esperar más por algo que nos merecemos».

Junto con los trabajadores de *catering* de aerolíneas, los tripulantes de cabina de pasajeros, que ya se están preparando mentalmente para la afluencia de ansiosos y desagradables pasajeros del Día de Acción de Gracias (¡eso sí que es control emocional!), también emprendieron sus propias luchas. Los auxiliares de vuelo de Hawaiian Airlines votaron a favor de convocar una huelga (la primera en los 90 años de historia de la aerolínea) tras la ruptura de las negociaciones contractuales que comenzaron en enero de 2017. Los auxiliares de Hawaiian Airlines cobran menos que los de otros estados de EEUU, a pesar del elevado costo de vida de las ciudades en que viven. Llevan seis meses organizando piquetes informativos en el aeropuerto internacional de Honolulu con el apoyo de su sindicato, la Asociación de Auxiliares de Vuelo (AFA-CWA, por sus siglas en inglés) y su presidenta, Sara Nelson, quien en junio se sumó a los piquetes. Al igual que los trabajadores de UNITE HERE, no podrán convocar una huelga legalmente hasta que la Comisión Nacional de Mediación los libere de la negociación y pase un «periodo de enfriamiento» de 30 días. Pero después de ese tiempo, todo es posible.

Los trabajadores de aerolíneas no son, ni mucho menos, los únicos que están en lucha. Los conductores de autobuses de la zona metropolitana de Washington (WMATA, por sus siglas en inglés), contratados por la estación Cinder Bed Road de Virginia, llevan meses en huelga. Los trabajadores son miembros del sindicato Amalgamated Transit Union (ATU), filial 689, y la estación Cinder Bed Road está operada por Transdev, una multinacional francesa: la primera estación metropolitana de Washington que se gestiona con capital privado en 40 años. Los trabajadores convocaron la huelga el 24 de octubre de 2019 por demandas en materia de seguridad, por prácticas laborales injustas y por problemas con el servicio, además del evidente desequilibrio salarial (según el sindicato, los conductores de Transdev realizan exactamente el mismo trabajo que los contratados directamente por el WMATA y cobran 12 dólares menos la hora). Asimismo, deben aportar 6.000 dólares por el seguro sanitario, mientras que los demás trabajadores del WMATA no aportan nada. Este doble sistema de salarios y prestaciones, en el que se clasifica y paga a los trabajadores de manera diferente

aunque realicen el mismo trabajo, se asemeja a las condiciones laborales que provocaron la huelga general de General Motors a comienzos en 2019 y casi hicieron lo mismo con UPS en 2018. Las patronales adoran los salarios diferenciados porque pueden ahorrar dinero en indemnizaciones y, en algunos casos, incluso conseguir que los afiliados al sindicato se enfrenten entre sí. Pero la injusticia intrínseca de este sistema irrita a los trabajadores, y los intentos que ha realizado la dirección para dividirlos ya están empezando a jugar en su contra. El espíritu de grupo del sindicato ATU, filial 689, le ha permitido llegar a este punto y ahora no va a tirar la toalla. Como cantaban en un reciente video musical que realizó el huelguista Otis Price: «No juegues con mi dinero, no juegues con mi familia».

La huelga del Cinder Bed Road ha contado con el apoyo de otros miembros del sindicato, incluidos los que trabajan en Fairfax Connector, la red de autobuses más grande de Virginia y la tercera más grande de la zona de Washington, DC. Los trabajadores sindicalizados de Fairfax Connector, cuyo convenio ya finalizó su vigencia, también votaron una huelga el 9 de noviembre de 2019; su red de autobuses, como seguramente hayan adivinado, también está operada por Transdev¹. Y estas no son las primeras situaciones de conflicto laboral que ha tenido la empresa francesa en el ámbito del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés); en 2018, Transdev llegó a un acuerdo para evitar el juicio por una demanda que presentaron cinco conductores de paratrásito², que afirmaban que cobraban «cuatro o cinco dólares la hora», según uno de los demandantes. De igual forma, a comienzos del mismo año, la ciudad de Baltimore había demandado a Transdev por una supuesta sobrefacturación de 20 millones de dólares por operar el servicio gratuito de autobuses del Charm City Circulator.

Es difícil imaginar a la empresa intentando este tipo de conducta abusiva en su sede de París. Los trabajadores franceses son conocidos por su perpetua disposición para la huelga, y los que trabajan en el sector de los transportes no solo realizaron numerosos paros el año pasado, sino que tienen planificados más aún para este año. Apenas al otro lado de la frontera norte de EEUU, unos 3.000 trabajadores del Ferrocarril Nacional de Canadá declararon el 19 de noviembre de 2019 su primera huelga en una década. No obstante, el 26 de noviembre se anunció que el sindicato de transportistas de Canadá y la empresa de ferrocarriles habían llegado a un acuerdo preliminar: la huelga planteaba problemas muy graves al débil gobierno del primer

1. Los trabajadores acordaron suspender la huelga hasta nuevo aviso el 10 de diciembre de 2019.

2. Transporte flexible para pasajeros cuya discapacidad les impide acceder al servicio de rutas fijas de autobús [N. del T.].

ministro de Canadá, Justin Trudeau, porque paralizaba el transporte de petróleo y productos agrícolas a lo largo y ancho del país.

Mientras tanto, Lufthansa se enfrentó a la posibilidad de una huelga durante las fechas navideñas; el 25 de noviembre del año pasado los controladores aéreos italianos interrumpieron bruscamente el tráfico aéreo y dejaron en tierra más de 100 vuelos de Alitalia; y los trabajadores de South African Airlines pusieron fin hace poco a una complicada huelga. Finnair, la aerolínea nacional de Finlandia, tuvo que cancelar casi 300 vuelos el 24 y 25 de noviembre por la huelga de solidaridad que declararon los trabajadores de la aerolínea en respuesta al conflicto laboral que afectaba a unos 9.000 trabajadores del servicio postal del país. La huelga también se extendió a los conductores de autobuses de Helsinki y, en lo que supuso un duro golpe para el turismo —y además para la economía en general—, el Sindicato de Marineros de Finlandia suspendió la navegación de todos los barcos de carga y pasajeros con bandera finlandesa hasta nuevo aviso.

Este tipo de huelgas de solidaridad son mayoritariamente ilegales en EEUU, a raíz de la odiada Ley Taft-Hartley de 1947, que impuso restricciones a este tipo de medidas, así como a las huelgas jurisdiccionales y a las denominadas huelgas «salvajes» (es decir, huelgas que violan las cláusulas que las prohíben, o que se realizan sin la autorización oficial del sindicato). Los profesores de Virginia Occidental que iniciaron la corriente actual del #RedforEd [Rojos por la Educación] declararon una huelga salvaje, al igual que aquellos que los siguieron en Kentucky y Oklahoma. Los transportistas que se negaron a entregar los vehículos de General Motors a los concesionarios durante la reciente huelga en la empresa también realizaron, posiblemente, algo similar al tipo de huelgas de solidaridad que prohíbe la Ley Taft-Hartley. Algunas reglas están para romperlas. Aun así, la existencia de la ley dificulta que los trabajadores estadounidenses organicen el tipo de paros a gran escala que sus equivalentes en otros países realizan con una regularidad pasmosa. Chile y Colombia declararon huelgas nacionales en noviembre de 2019; las calles de Roma se llenaron de huelguistas en octubre; Sudán, la India y Cataluña convocaron a huelgas generales en 2019; los manifestantes de Hong Kong declararon una en agosto; y a principios del año pasado, cientos de miles de mujeres en España llevaron a cabo una huelga coordinada durante toda una jornada para reivindicar el Día Internacional de la Mujer.

Aunque es posible que las restricciones de la Ley Taft-Hartley compliquen la rebelión a gran escala de la clase obrera en términos similares a los

Este tipo de huelgas de solidaridad son mayoritariamente ilegales en EEUU a raíz de la Ley Taft-Hartley

que se han visto en otros países, también demuestran la importancia de las acciones que están llevando a cabo los trabajadores del transporte en la actualidad: la estructura de transporte en EEUU es vulnerable y los trabajadores sindicalizados pueden provocar un verdadero caos.

Esto es algo que sindicatos como el de Camioneros (Teamsters) y el Sindicato Internacional de Estibadores y Trabajadores Portuarios (ILWU, por sus siglas en inglés) siempre tuvieron muy claro. Los transportistas y los trabajadores del transporte se encuentran en una situación perfecta para manipular (con dureza) los hilos del poder. Hace pocos meses, más de 300 miembros de la filial 455 del sindicato de camioneros de Denver, Colorado, hicieron huelga en la planta de distribución de alimentos de Sysco por problemas en materia de seguridad. La destacada historia militante de la ILWU no puede ser subestimada: el sindicato está amenazado en la actualidad por un fallo judicial que lo condena a pagar 93,6 millones de dólares por ralentización del trabajo y paros en Portland, que sus abogados alegan que fueron provocados por las prácticas laborales.

Como estos y otros trabajadores del transporte mencionados anteriormente dejan en claro, una forma segura de atraer la atención hacia un problema es interferir en los planes de viaje de las personas, en el envío de sus productos de consumo, en la entrega de sus paquetes o en su traslado del punto A hacia el punto B. En el Festival Workers Revival, un evento organizativo y de artes celebrado en 2018 en Kansas City y planificado por el colectivo Missouri Jobs With Justice [Empleos con Justicia de Missouri], me senté con un señor canoso que había trabajado durante décadas en los ferrocarriles. Según él, la gente no se da cuenta del tremendo poder que todavía tienen los ferrocarriles ni de la importancia decisiva que tienen las infraestructuras de transporte para permitir que el país siga funcionando: «Podríamos paralizar este país en tres días», afirmó.

Tras el estallido de las manifestaciones en los aeropuertos en 2017 en respuesta al repugnante veto de Donald Trump a la entrada de ciudadanos de países musulmanes (medida que sigue estando en vigor y con probabilidades de ampliarse), los tribunales primero pudieron bloquear la prohibición y luego consiguieron suavizarla. Cuando los mineros de Blackjewel detuvieron un tren de carbón de Kentucky hasta que les pagaran los salarios atrasados, atrajeron la atención de la opinión pública nacional y finalmente consiguieron su dinero. Menos de una semana después de que la presidenta de AFA-CWA solicitara a los demás dirigentes sindicales que consideraran la idea de una huelga general para terminar con el cruel y fútil «cierre del gobierno» (*shutdown*) que impuso Trump, varios vuelos de los aeropuertos principales tuvieron que permanecer en tierra por motivos de seguridad, ya que algunos controladores aéreos de la costa se declararon enfermos para no concurrir

al trabajo. Al día siguiente se reanudaron todas las actividades del gobierno. Existen motivos para que la simple idea de que los trabajadores del metro se declaren en huelga provoque pánico en el corazón de todo neoyorkino, y es probable que la mera posibilidad de una cancelación de vuelos en cascada hiciera dar marcha atrás a un vulgar tirano. Los trabajadores del transporte tienen la llave de la economía y de nuestra sociedad; sin ellos, nada ni nadie puede ir adonde necesita ir, por muy importante que se crea. ☐

revista CIDOB d'
afers
internacionals

Diciembre de 2019

Barcelona

Nueva época Nº 123

MUNICIPALISMO INTERNACIONAL Y DERECHO A LA CIUDAD:
LAS CIUDADES EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN

ARTÍCULOS: **Raquel Rolnik, Eva Garcia-Chueca**, Introducción: municipalismo internacional y derecho a la ciudad (contradicciones y desafíos). **Marta Galceran-Vercher**, Emprendedores de normas: el municipalismo internacional y el derecho a la ciudad. **Borja M. Iglesias**, «No dejar a ningún municipio atrás»: escalando el «derecho a la ciudad» a la región. **Mariona Tomàs Fornés**, Por un derecho a la ciudad metropolitana: un análisis institucional. **Norma Tiedemann**, Nuevos municipalismos en espacios posyugoslavos: rupturas democráticas en Zagreb y Belgrado. **Antonio Alejo**, Binacionalidad cívica y derecho a la ciudad en la paradiplomacia de Ciudad de México. **Maurizio Artero**, Santuarios urbanos y el derecho al tránsito: migrantes en tránsito por Milán. **Brenda Isela Ceniceros Ortiz**, El «artivismo» en la frontera Ciudad Juárez-El Paso: hacia el derecho a la ciudad. OTROS ARTÍCULOS: **Katarzyna Dembicz**, Reflejos constitucionales de la transformación en Cuba: miradas desde Polonia. **Patxi Zabalo Arena, Eduardo Bidaurrezaga Aurre y Artur Colom Jaén**, Implicaciones para América Central del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. RESEÑAS DE LIBROS.

Revista CIDOB d'Afers Internacionals es una publicación académica cuatrimestral de relaciones internacionales y desarrollo de la Fundación CIDOB, c/ Elisabets, 12 - 08001 Barcelona, España, Tel. (+34) 93 302 6495. Se edita en formato impreso y digital. Página web: <www.cidob.org/publicaciones/filter/53216>.